



UNIVERSIDAD NACIONAL "PEDRO RUIZ GALLO"

**ESCUELA DE POST- GRADO
DOCTORADO EN DERECHO**



FACTORES DE DESEMPEÑO FUNCIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE. 2012-2015

TESIS

**Presentada a la Escuela de Post Grado de la
Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo", para optar el
Grado académico de Doctor en Derecho
y Ciencia Política**

Presentada por:

Mg. MARIO VICENTE CHÁVEZ REYES



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

ESCUELA DE POSTGRADO

DOCTORADO EN DERECHO

Tesis presentada para optar el Grado Académico de Doctor

Doctorado en Derecho y Ciencia Política

PRESENTADA POR:

Mg. Chávez Reyes, Mario Vicente

LAMBAYEQUE – PERÚ

MARZO - 2018

TITULO DE LA TESIS

**“Factores de desempeño funcional de la Policía Nacional del Perú en la
implementación del nuevo Código Procesal Penal en la región Lambayeque.
2012-2015”**

AUTOR.

ASESOR

Presentada a la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
para optar el Grado de: DOCTOR EN DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA

APROBADO POR:

PRESIDENTE DEL JURADO
Dr. JOSÉ MARÍA BALCÁZAR ZELADA

SECRETARIO DEL JURADO
Dr. RAFAEL HERNÁNDEZ CANELO

VOCAL DEL JURADO
Dr. MIGUEL ARCÁNGEL ARANA CORTEZ

Marzo, 2018

**Para mi esposa Blanca y mis hijos
Mario y Jonathan, centro de
inspiración y motor permanente
para nuestra labor y creación
intelectual.**

**Un agradecimiento especial a
nuestro asesor Dr. Alejandro
Lamadrid Ubillús por su acertada
orientación en el tema, fruto de su
gran experiencia funcional y
académica.**

-¿Crees tú que un pintor es menos hábil si después de pintar el más hermoso modelo de hombre que pueda verse y de haber dado a cada uno de sus rasgos la mayor perfección, no es capaz de demostrar que pueda existir un hombre semejante?

-No, ¡por Zeus!, no lo creo -contestó.

-¿Pues qué? ¿No podemos decir nosotros que también estábamos creando, en la conversación, el modelo de la ciudad buena?

-Sí, por cierto.

-¿Y pierde su valor lo que decimos si no podemos demostrar que sea posible establecer una ciudad como el modelo?

-De ninguna manera -contestó.

-Tal es, pues, la verdad -dije-, pero si quieres que, por complacerte, te muestre cómo y hasta qué punto puede realizarse una ciudad semejante, deberás hacerme algunas concesiones.

-¿Cuáles?

-¿Es posible llevar algo a la práctica tal y como se lo describe, o no está en la naturaleza de las cosas que la ejecución se acerque menos a la verdad aunque algunos no lo crean? En lo que a ti respecta, ¿estás de acuerdo o no con ello?

-Estoy de acuerdo -dijo.

-Así, pues, no me exijas que demuestre la necesidad de que las cosas sucedan en la práctica exactamente como lo expusimos de palabra, pero si llegamos a ser capaces de encontrar cómo puede ser organizada una ciudad de la manera más parecida a la que describimos, confiesa que habremos descubierto que era posible realizar lo que tú pretendías. ¿O no te bastará un resultado semejante? En lo que a mí respecta me dejaría contento.

-A mí también -afirmó.

[Diálogo entre Sócrates y Glaucón en: Platón. República. Traducción directa del griego por Antonio Camareno. 24° edición, 4° impresión. Eudeba. Buenos Aires. 2005. Pgs. 374-375 Párrafos 472d-473b]

TABLA DE CONTENIDOS (INDICE)

INDICE	
Contenido	Páginas
PRESENTACION	10
RESUMEN (ABSTRACT)	11
INTRODUCCION	13
a. Descripción	13
b. Explicación	15
Capítulo I	
ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO	
1.1. Ubicación	17
1.2. Cómo surge el problema	17
1.3. Cómo se manifiesta y qué características tiene	18
1.4. Planteamiento del problema	33
1.5. Descripción de la metodología	35
Capítulo II	
METODOLOGÍA INVESTIGATIVA	
2.1. Objetivos	37
2.1.1. Objetivo general	37
2.1.2. Objetivos específicos	37
2.2. Hipótesis	38
2.2.1. Formulación de la hipótesis	38
2.2.2. Identificación de variables	38
2.2.2.1. Variable independiente	39
2.2.2.2. Variable dependiente	40

2.3.	Técnicas y metodología	41
2.3.1.	Diseño de investigación	41
2.3.2.	Instrumentos	41
2.3.3.	Procedimiento	41

Capítulo III

MARCO TEÓRICO

3.1.	Antecedentes del problema	42
3.2.	Base teórica	44
3.2.1.	Aspecto policial	44
A.	Antecedentes de la policía	44
B.	En la investigación preliminar	68
C.	En la investigación preparatoria	70
D.	En la etapa intermedia y juzgamiento	71
3.2.2.	Hacia un nuevo modelo policial	73
3.2.3.	Aspecto de reforma procesal penal. Antecedentes	98
3.2.4.	Etapas del nuevo proceso penal	99
3.2.5.	Ámbitos del proceso penal. La etapa policial	100
3.2.5.1.	Funciones de la PNP en la IP	100
3.2.5.1.1.	Atribuciones directas	100
3.2.5.1.2.	Por solicitud del Fiscal	101
3.2.5.1.3.	Obligaciones de la PNP luego de diligencias	102
3.2.5.1.4.	La detención en caso de flagrancia	102
3.2.5.1.5.	La detención preliminar	102
3.2.5.1.5.1.	Supuestos	103
3.2.5.1.5.2.	Contenido	103
3.2.5.1.6.	Arresto ciudadano	103
3.2.5.2.	Derecho comparado	105

Capítulo IV

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.	Contrastación de la hipótesis	107
-------------	--------------------------------------	------------

4.1.1.	Contrastación de las variables independientes	107
4.1.2.	Variable independiente	107
4.2.	Contrastación de las variables independientes	
4.2.1.	Variable dependiente	107
4.2.2.	Análisis	107

Capítulo V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.	Conclusiones. Contrastación de la hipótesis global	122
5.2.	Recomendaciones	122
5.2.1.	Propuesta <i>de lege ferenda</i> la modificación del D. Leg. 1267, Ley de la PNP, en algunos de sus artículos relacionados con el presente trabajo	122

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	126
----------------------------	-----

ANEXOS	129
--------	-----

○ Ley de la PNP	129
○ Decreto Legislativo que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el Sector Interior	144
○ Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1291, decreto legislativo que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el Sector Interior	148
○ Reglamento del Decreto Legislativo N° 1291, decreto legislativo que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el Sector Interior	149
○ Encuesta aplicada	150

PRESENTACIÓN

La concepción de fuerza policial varía en las diferentes latitudes de nuestro planeta, la mejor de todas es aquella que la considera como una prolongación de nuestro anhelo de vivir dignamente, de vivir respetando los derechos de los demás y que los demás respeten los nuestros, la mejor policía es la que ha encontrado el justo medio entre el uso de la fuerza, y el conocimiento cabal de la naturaleza humana y su capacidad de convivencia social, de autodeterminarse en diferentes situaciones de acuerdo a ello. Nuestro país no es la excepción en este entendido sino un lugar en el que su policía es producto de todos sus aciertos y deficiencias, debiendo considerar entre ellas ese círculo vicioso que ha venido significando la corrupción, que forma un remolino por el que se van nuestros valores cuando se institucionaliza dicho fenómeno. Aspecto que sumado a la coyuntura de implementación de un nuevo modelo procesal penal que estamos viviendo hace que el desempeño policial como operador de primer orden del mismo, resulte crucial para determinar el éxito o fracaso del mismo. Por lo tanto el mejoramiento holístico de la formación de su personal y su desempeño en las áreas de prevención y tratamiento del delito nos proporcionará su mejoramiento funcional y con ello la optimización de la implementación del nuevo sistema procesal penal.

RESUMEN (ABSTRACT)

La tesis se ha desarrollado con el fin de brindar aportes significativos respecto a la capacitación, que reciben los miembros Policía Nacional del Perú (PNP), y el desempeño de los mismos, así como en la decisiones en la misma institución, a propósito de la óptima aplicación del nuevo Código Procesal Penal (NCPP); para lo cual se utilizó el Método Científico de Investigación¹, instrumento que sirvió para desarrollar aspectos importantes del trabajo, desde su capítulo primero hasta el último.

Con motivo de nuestro estudio se realizó la recopilación de información sobre el tema por diferentes especialistas con respecto al desarrollo de las variables: mejoramiento de los factores negativos del desempeño funcional de la PNP y fortalecimiento de la función del Ministerio Público (MP) y por ende del proceso de implementación del NCPP; con relación al estudio de campo se utilizó la técnica de la encuesta usando como instrumento un cuestionario el mismo que estuvo conformado por preguntas que fueron respondidas por Oficiales y Suboficiales de la PNP, magistrados miembros del MP y Poder Judicial (PJ), así como profesores de Derecho y abogados en ejercicio, quienes dieron sus diferentes puntos de vista sobre esta problemática, para luego ser llevadas a gráficos estadísticos, así como sus respectivas interpretaciones; desde luego, las hipótesis planteadas fueron contrastadas para luego arribar a las conclusiones y recomendaciones del trabajo.

Finalmente, en la última parte de la tesis concluye con los aportes que se dan como resultado de la investigación, los mismos que se alcanzaron a plenitud, facilitando las recomendaciones las cuales se consideran como viables y practicables; además se añade la amplia bibliografía, así como los anexos correspondientes.

¹ Se considera método científico de investigación a una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que nos lleva a un conocimiento científico. Estos pasos nos permiten llevar a cabo una investigación. Es concebido como una receta aplicada a cualquier problema, garantiza su solución, realmente no existe, pero tampoco puede negarse que la mayor parte de los investigadores, trabajan de acuerdo con ciertas reglas generales, que a través de la experiencia han demostrado ser útiles, la descripción de esto es lo que se conoce como “método científico de investigación”

The thesis has been developed in order to provide significant contributions regarding the training, received by the members of the National Police of Peru (PNP), and the performance of the same, as well as in the decisions in the same institution, regarding the optimal application of the new Criminal Procedure Code (NCPD); for which the method of scientific research was used, instrument that served to develop important aspects of the work, from its first chapter to the last.

The study carried out the collection of information about different Specialists with regard to the development of the variables: Improvement of negative functional performance factors of PNP and Strengthening the role of the MP and therefore of the NCPD implementation process; In the field study the survey technique was used with its instrument the questionnaire the same one that was conformed by questions that were answered by the Officers and Subofficers of the NCPD, magistrates members of the Public Ministry (MP) and Judicial Power (PJ), as well as law professors and lawyers in practice, who gave their different points of view on this problem, in order to then be taken to statistical graphs, as well as their respective interpretations; of course, the hypotheses were contrasted to then arrive at conclusions and recommendations of the work.

Finally, in the last part of the thesis it concludes with the contributions that are given as a result of the investigation, the same ones that were fully achieved, facilitating the recommendations which are considered as viable and practicable; in addition, the extensive bibliography is added, as well as the corresponding annexes.

INTRODUCCIÓN

a. Descripción

La tesis se ha desarrollado con el fin de brindar, previa justificación de su necesidad, aportes significativos respecto a la capacitación, que reciben los miembros Policía Nacional del Perú (PNP), y al desempeño de los mismos, así como a las políticas en la misma institución, a propósito de la exigencia de una óptima aplicación del nuevo Código Procesal Penal (NCPP); para lo cual recurrimos obviamente al Método Científico de Investigación, instrumento que sirvió para desarrollar aspectos importantes del trabajo en toda su extensión.

En este sentido la Constitución de 1993 establece en forma expresa en el inciso 4 del artículo 159 que la Policía Nacional está en la obligación de cumplir con los mandatos u órdenes que imparta el Fiscal en el ámbito de su función de investigación del delito, existiendo aportes como el del doctor Ramiro Salinas Siccha, Fiscal Superior Penal, que en su artículo “Conducción de la investigación y relación del Fiscal con la Policía en el Nuevo Código Procesal Penal”, precisa: “...es obligación imperativa de los Fiscales el actuar en la investigación con objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinen o acrediten la responsabilidad o así como los que determinen o acrediten la inocencia del sospechoso. Con esta finalidad conduce y controla jurídicamente los actos de investigación preliminar que realiza la Policía Nacional”. Haciendo la salvedad de que: “debiendo el Fiscal participar en la mayor cantidad de diligencias policiales que disponga realizar para el esclarecimiento de los hechos así como identificar a sus autores y partícipes, a excepción de aquellas que por su propia naturaleza son de competencia exclusiva de la PNP o en su caso, por cuestiones geográficas o de urgencia no pueda estar presente”. Pudiendo así: “determinar en su oportunidad, si tiene realmente elementos de convicción que sustenten una acusación o por el contrario, solicitar de inmediato el sobreseimiento del caso y dedicar todo su esfuerzo y energías en casos que realmente considere tendrán futuro de acusación”; dado que: “El no participar en las diligencias y solo dejar a los efectivos de la Policía Nacional que la realicen y

luego elaboren su informe, ocasiona que aquella convicción llegue muy tarde o lo que es peor, nunca llegue.”; sin embargo existen experiencias como la chilena y la colombiana en las que ello ocurre, pero en sus realidades se dio una inversión significativa en la preparación de sus cuerpos policiales, evidenciándose la carencia de una policía especializada en investigación en nuestro país, haciéndose cada vez más patente que para efectos de la reforma, urge que el Ministerio del Interior vuelva a retomar la idea que dio origen a la desaparecida Policía de Investigaciones del Perú (PIP), y con ella la del Fiscal que suscribe las actuaciones policiales, pues el Fiscal dirige la actuación de las diligencias en las que participa, dado que sólo él sabe qué busca acreditar con su actuación, y los efectivos policiales actúan como importante apoyo a la labor del Fiscal, pues conforme al inciso 4 del artículo 159 de nuestra Constitución; la Policía Nacional está en la obligación de cumplir con los mandatos u órdenes que imparta el Fiscal en el ámbito de su función de investigación del delito, y conforme al artículo 67 del NCPP se establece en forma general para todos los efectivos de la PNP: que en su función de investigación, por propia iniciativa debe recibir o tomar conocimiento de los delitos con la obligación de dar cuenta inmediata al Fiscal; dado que está obligada a realizar los actos de investigación (diligencias) de urgencia e imprescindibles² para evitar o impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para esclarecer los hechos, cuidando siempre de las formalidades al levantar las actas haciendo participar al sospechoso y a su abogado por ejemplo, a fin de no hacer ineficaz su trabajo, conforme lo prescribe los incisos 2 y 3 del artículo 68 del NCPP, permitiéndole al Fiscal organizar jurídicamente la investigación y decidir que otras diligencias son necesarias para el esclarecimiento de los hechos y sobre las ya realizadas, disponer la ampliación de las mismas; asimismo en su caso, si se realizó incautación de bienes por ejemplo, solicitar al Juez de la investigación

² Tales como: recibir denuncias escritas o verbales, tomar la declaración del denunciante, vigilar y proteger el escenario de los hechos, practicar registro a las personas, prestar auxilio a las víctimas, recoger y conservar los objetos e instrumentos del delito así como todo elemento material que pueda servir para la investigación, identificar a los autores y partícipes del delito, recibir la declaración de los testigos, levantar planos, tomar fotografía, realizar grabaciones en video, detener a los sospechosos en caso de flagrancia, asegurar los documentos privados que puedan servir para la investigación, allanar locales de uso público o abiertos al público, efectuar bajo inventario secuestros e incautaciones necesarias en casos de delito flagrante o peligro inminente de su perpetración y recibir la manifestación de los sospechosos con presencia de su abogado.

preparatoria la expedición de una resolución confirmatoria, como lo prevé el numeral 2 del artículo 316 del NCPP. El mismo autor explica: “Sólo de la actuación profesional y responsable del Fiscal, depende la fortaleza del acto de investigación efectuada a fin que sea de utilidad en el contradictorio. El solo delegar a los efectivos de la PNP que sabemos en su gran mayoría no cuentan con suficiente preparación en técnicas de investigación³, puede resultar perjudicial para el trabajo fiscal y por ende, el Ministerio Público puede deslegitimarse aún más ante los ciudadanos de a pie”.

b. Explicación

En consecuencia, consideramos con el mencionado autor que los efectivos de la PNP siempre deben actuar con la convicción siguiente: para ser útiles y eficaces dentro del proceso penal, las actas de las diligencias en las que participan, estas deben realizarse ceñidas a las formalidades y respetando siempre los derechos del sospechoso. Idéntico criterio deben tener los Fiscales, ya que un acta efectuada en forma deficiente puede ser declarada hasta ilícita por el Juez ante su eventual cuestionamiento. Pudiendo ocurrir lo mismo con cualquier actuación policial defectuosa, sobre todo en los casos de detención.

Esta relación tan estrecha entre los desempeños funcionales fiscal y policial a propósito de la investigación del delito bajo la implementación del NCPP determina que, la eficiencia y eficacia o lo contrario, de uno conduzca respectivamente al éxito o fracaso del otro.

Consideraciones que nos permitirán alcanzar el objetivo de la investigación, cual es establecer los factores negativos de la PNP y su influencia en el desempeño funcional del MP en el proceso de implementación del NCPP en la región

³ De primera intención es común pensar que en nuestra Policía Nacional hay especialización, es decir, existen miembros de la PNP capacitados, entrenados y especializados en técnicas de investigación delictiva, sin embargo, al indagar al respecto con sorpresa tomamos conocimiento que no existe tal especialización basados en la concepción errónea (teórica y práctica) en el sentido que todos los policías al egresar de la Escuela, están capacitados para efectuar una investigación sobre la comisión de un delito. La realidad nos demuestra lo contrario y ello genera la materialización de investigaciones deficientes que realiza nuestra PNP. Debemos ser conscientes desde el inicio: si un Fiscal competente y responsable con su labor no cuenta con un buen equipo policial de apoyo en la investigación del delito muy poco podrá hacer. El nuevo modelo procesal del CPP del 2004, exige que un buen grupo de miembros de nuestra Policía Nacional se especialice en criminalística y en técnicas de investigación del delito, los mismos que deben estar adscritos en las diversas comisarias del Perú. Este aspecto primordial deben tenerlo claro los responsables del Ministerio del Interior y volver a la idea que dio origen por ejemplo a la desaparecida Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Caso contrario, existe el peligro latente que se imponga la impunidad. (SALINAS SICCHA, 2007)

Lambayeque durante los años 2012-2015, partiendo de que esta problemática es la misma que se verifica a nivel nacional, salvo aspectos muy excepcionales que iremos anotando, es que planteamos nuestra propuesta que gira en torno a que si se superaran los aspectos negativos del desempeño funcional de la PNP en la región Lambayeque predominantes durante los años 2012-2015, ello redundaría en el fortalecimiento de la función del MP y por ende en el del proceso de implementación del NCPP. Luego *si se revirtieran los factores negativos del desempeño funcional de la Policía Nacional del Perú en la región Lambayeque predominantes durante los años 2012-2015, entonces redundaría en el fortalecimiento de la función del ministerio público y por ende en el del proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal.*

En éste mismo sentido, con motivo de nuestro estudio se realizó la recopilación de información sobre el tema por diferentes especialistas con respecto al desarrollo de las variables: mejoramiento de los factores negativos del desempeño funcional de la PNP y fortalecimiento de la función del MP y por ende del proceso de implementación del NCPP; en cuanto al estudio de campo se utilizó la técnica de la encuesta usando como instrumento un cuestionario el mismo que estuvo conformado por preguntas que fueron respondidas por Oficiales y Suboficiales de la PNP, magistrados miembros del Ministerio Público (MP) y Poder Judicial (PJ), así como profesores de Derecho, quienes dieron sus diferentes puntos de vista sobre esta problemática, para luego ser llevadas a gráficos estadísticos, así como sus respectivas interpretaciones; desde luego, las hipótesis planteadas fueron contrastadas para luego arribar a las conclusiones y recomendaciones del trabajo.

Finalmente, en la última parte de la tesis concluye con los aportes que se dan como resultado de la investigación, los mismos que se alcanzaron a plenitud, facilitando las recomendaciones las cuales se consideran como viables y practicables; además se añade la amplia bibliografía, así como los anexos correspondientes.

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Ubicación

Nuestro enfoque abarca las incidencias pertinentes acaecidas en la región de Lambayeque entre los años 2012 y 2015.

1.2 Cómo surge el problema.

Todos conocemos que la Policía Nacional del Perú (PNP) es una institución tutelar del Estado, responsable directa del Orden Público y la Seguridad Ciudadana en el País, art.166 de la Constitución Política del Perú (CPP), cuya finalidad fundamental es la de “garantizar, mantener y restablecer el orden interno” y con funciones determinadas como son: prestar protección ayuda a las personas y a la comunidad; garantizar el cumplimiento de las Leyes y la seguridad del patrimonio público y privado; prevenir, investigar y combatir la delincuencia; vigilar y controlar las fronteras.

Sin embargo esta Institución dados los problemas que enfrenta, desde la Unificación de la Policía⁴ durante el gobierno del Sr. presidente Alan García Pérez en 1984, viene sumida en el desprestigio ante la sociedad, en desmedro del Derecho de Policía⁵ y como consecuencia del Principio de autoridad, la misma que se demuestra en casi el 100% de sus intervenciones, siendo objeto de faltamientos de cualquier ciudadano y ciudadana, desde una agresión muy simple hasta la muerte; situación que impide el cumplimiento cabal de todas sus funciones, entre ellas sobre todo la de investigación del delito, y se presenta debido a que nuestra PNP cuenta con legalidad⁶ pero carece de legitimidad⁷.

⁴ El 7 de diciembre de 1988 fue publicada la ley 24949 del 6 de noviembre de 1988 que modificando los artículos pertinentes de la Constitución de 1979 creó definitivamente la Policía Nacional, dicha ley fue dada y promulgada el 25 de noviembre de 1988. Los objetivos que se buscaron fueron, entre otros, integrar las tres Fuerzas Policiales, hacer un mejor uso de los recursos económicos, desaparecer los conflictos que existían entre ellas originados por dualidad de funciones y, sobre todo, ofrecer un mejor servicio a la sociedad. Con motivo de la unificación de las Fuerzas Policiales la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana pasaron a denominarse Policía General, Policía Técnica y Policía de Seguridad hasta 1991 en que el Decreto Legislativo 744, emitido en el gobierno del Sr. presidente Alberto Fujimori Fujimori, de fecha 08 de Noviembre de 1991 adecua a la Policía Nacional a su nueva Estructura Orgánica.

⁵ Conjunto de normas que regulan por una parte, la función del Estado, orientada a asegurar su existencia en el orden interno y a proteger la integridad de las personas en su vida, honra y bienes, y por otra parte, la conducta humana, con el fin de evitar el abuso de la libertad en perjuicio de la colectividad y del ejercicio de los derechos de todos.

⁶ Pertenece al orden del derecho positivo y sus normas contienen siempre fuerza de ley (es decir generan obligación jurídica).

1.3 Cómo se manifiesta y que características tiene.

Entre los principales problemas que enfrenta la PNP tenemos:

- a) La falta de educación e instrucción, referido no solo al área de conocimientos propiamente dichos, sino principalmente a la que comprende los aspectos de ética, mística y de servicio; formándose un policía indiferente, desidioso, apático, sin iniciativa. Lo que obedece entre otros motivos a que existe una selección y un reclutamiento deficientes de los jóvenes que aspiran a ser cadetes o alumnos.
- b) Maltrato a la PNP por parte de los diferentes gobiernos de turno, con reorganizaciones, que no han tenido ningún resultado. Lo que equivale a la politización de la institución por parte del Ejecutivo.
- c) El apoyo estatal deficiente, con un tímido fortalecimiento de su trabajo y autoridad.
- d) El paulatino retiro de funciones propias de la Seguridad ciudadana⁸, situación que atenta contra el importante rol que debe cumplir en la puesta en ejecución del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP), instrumento jurídico cuya implementación exitosa debemos coadyuvar, ponderando sus aciertos y deficiencias para superarlas sin permitir retroceso alguno, desalentando rencillas internas de celo e indiferencia profesional como las de la Ex Guardia Civil (GC) con la Ex Policía de Investigaciones del Perú (PIP), que solo logran hacer quedar mal al efectivo PNP, que siente convertirse en un elemento negativo y deshonesto, frente a otros operadores⁹. Vale decir que la norma que rige la PNP se dio sin ningún estudio serio y objetivo de lo

⁷ Forma parte del orden de la política (discrecionalidad dentro de la legalidad) y de la ética pública (fundamentación cognitiva de las normas y de las decisiones). Mientras que la legalidad genera obligación, la legitimidad genera responsabilidad (política o ética) y reconocimiento. La legalidad tiene una racionalidad normativa acotada y la legitimidad tiene una lógica deliberativa abierta. Cualquier intento de suprimir esta diferencia lesiona gravemente a la democracia y al Estado de Derecho. Sin la diferencia entre legalidad y legitimidad el sistema político se torna fatalmente totalitario. El mantenimiento de esta frontera es una de las tareas más precisas y delicadas de todo sistema político democrático.

⁸ Es una situación social, donde predomina la sensación de confianza, entendiéndosela como ausencia de riesgos y daños a la integridad física y psicológica, donde el Estado debe garantizar la vida, la libertad y el patrimonio ciudadano. **Defensoría Pública** propone en su Informe Defensorial N° 142, como parte de la política de reforzamiento de la PNP, la implementación de: a) Política de fortalecimiento de Comisarías: como unidades básicas cercanas a la población y cara visible del Estado ante la ciudadanía. b) Política de profesionalización del personal policial: mediante la implementación de una ley de carrera policial que contemple sus objetivos y principios, así como cada uno de sus componentes (ingreso, formación, ascensos, incentivos y término). c) Política anticorrupción: mejorando los mecanismos de prevención y combate de la corrupción a partir de la identificación clara de las conductas indebidas. d) Política de control disciplinario: mejorando los mecanismos de control interno que permitan separar al personal no idóneo, luego de un procedimiento que respete las garantías del derecho constitucional a un debido proceso. e) Política de transparencia y respeto del derecho de acceso a la información pública: adecuando su organización y sus instrumentos de gestión a los requerimientos establecidos en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus modificatorias y disposiciones complementarias.

⁹ Jueces y fiscales.

que debe mantenerse de las ex instituciones policiales, ocasionando que la PNP nazca sin mística institucional propia, lo que se ha mantenido desde la Unificación por más de 30 años, hasta ahora se sigue hablando de Código 1, Código 2 y Código 3 en clara referencia a las ex instituciones policiales; más aun, en esos años los que han gobernado la PNP son oficiales provenientes de la ex Guardia Republicana (GR) la que únicamente tenía como función el resguardo de los penales y de nuestras fronteras.

- e) A lo mencionado se suman problemas de implementación como el acoplamiento PNP-Ministerio Público (MP), hasta ahora no se produce el empoderamiento del MP como Director Jurídico de la Investigación Policial, debido a que: la PNP no cumple con informar al Fiscal de Turno inmediatamente de tener conocimiento de un hecho delictivo (Art. 67 CPP), la PNP no cumple su función, la cual es cuidar la escena del crimen (Inc. 1.B del Art. 68 CPP), la elaboración de las Actas por parte de la PNP es defectuosa (Inc. 2 Art. 68 CPP), las evidencias no son recogidas como corresponde con la Cadena de Custodia (Art. 1.D del Art. 68 CPP), los peritos no llegan oportunamente a la escena del crimen, aprovechando estas deficiencias los agraviados o los testigos del MP varían su declaración, con relación a la primera en la que sindicaron a determinado sospechoso responsable, los agraviados, peritos o PNP no acuden al juicio oral, asimismo las pericias, documentos, así como los informes solicitados, se demoran mucho en llegar.

Sobre el particular Alcides Chinchay¹⁰ destaca dos cosas: la primera es que **las acciones investigativas se realizan bajo la conducción del Fiscal**, que es el que le otorga sentido a éstas; la segunda es que este enunciado **no es un *numerus clausus***, puesto que el inciso “n”, del artículo 68 del NCPP sobre Atribuciones policiales nos deja abierto un cajón de sastre; sin embargo, sí cabe la pregunta de esas “demás” diligencias y procedimientos se acometen por iniciativa ¿de quién? Luego la respuesta fluye por sí misma del punto anterior: brotan del Fiscal, que es quien conduce esta investigación; pasando a comentar algunas líneas fuerza del artículo:

¹⁰ Chinchay Castillo, Alcides. *La investigación preparatoria. Algunos comentarios críticos*. Recuperado el 17 de enero del 2017 a horas 19:06, de inbox.lc@DUbX. Con algunas modificaciones con fines académicos.

- i. **Recibir denuncias.**- Durante la primera reforma (1991) se discutió si en realidad debían mantenerse la atribución policial de recibir denuncias. Más allá la opción legislativa adoptada (que es favorable a esa medida), la doctrina es unánime o casi en el sentido de que así tiene que ser; como no estar de acuerdo si la entidad policial es la más cercana a la comunidad, pues la mera constatación empírica de que hay muchas más unidades de la Policía que del MP, y de que —por tanto— la población tiene usualmente más a mano la Comisaría local que a la Fiscalía competente, evidencia que no puede ser de otra manera; sin embargo la duda partió del temor a un supuesto abuso policial, que iría a consistir en “adueñarse” de la investigación y realizarla y “terminarla” sin dar cuenta al Ministerio Público, lo que evidentemente no puede generar la regla de privar a la Policía de esta función fundamental e imprescindible, máxime si es posible imponer la obligación legal de que cada vez que una persona se acerque a denunciar a la unidad policial, ésta debe comunicar (por teléfono o por la vía más rápida) esta concurrencia a la Fiscalía de turno, la cual al mismo tiempo que autoriza la recepción, toma conocimiento del hecho y en tal sentido puede empezar a conducir la investigación.
- ii. Sin embargo cuando no fuese posible, la comunicación se limitaría al acta a la cual se refieren los incisos “a” y “b” sobre *«Vigilar y proteger el lugar de los hechos a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito»*; “c” *«Practicar el registro de las personas»*; “i” *«Asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación»*; y “k” *«Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios»*. Incisos que aluden a un punto muy importante y debatible del proceso penal: la limitación de derechos (en este caso, básicamente reales) en nombre del interés estatal de investigar el delito. Algunos han sostenido que estas limitaciones requerían un mandato judicial. Según el Código, ello es así (art. 203°.1). Más no se encuentra un mandato constitucional que vede estas incursiones, o que diga que ellas requieren la autorización judicial. En lo que toca a casos de urgencia (y siempre en lo referido a afectación de derechos reales —arts. 203°.3; 206°.1 y 218°.2), el control judicial, por lo menos en lo que toca al imputado (quien es el mayoritariamente afectado por esta clase de medidas) es (debería ser) indirecto. Ello atendiendo a que: **a.** Nadie puede quedarse sin una tutela jurisdiccional efectiva (art. 8°.1 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos y arts. 14°.113 y 2°.3.a14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). **b.** Se supone que la Policía realiza sus labores de investigación bajo la conducción del Fiscal; por tanto éste toma conocimiento de ellas y en tanto que su misión es ser tutela de la legalidad, por lo que si en la intervención hubiese alguna irregularidad, tiene que poner orden. En el caso específico del imputado, el Fiscal tiene este deber: «*Garantizará el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales*»; y en términos generales, se especifica lo siguiente: «*así como la regularidad de las diligencias correspondientes*» (art. 65°.4). **c.** Por otro lado, el Juez de la Investigación preparatoria tiene una función tuitiva, por lo menos en lo que toca al imputado: «*Cuando el imputado considere que durante las Diligencias Preliminares o en la Investigación Preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidas o de requerimientos ilegales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan*» (art. 71°.4). Así que la opción del Código es bien clara: las vulneraciones antes dichas se pueden acometer, al menos en casos de urgencia y flagrancia (repito, ver los arts. 203°.3; 206°.1 y 218°.2), siempre que sean razonables y proporcionales para la tarea de investigación. Y si hubiese algo irregular, arbitrario o desproporcionado en ellos, el Fiscal primero y el Juez de la Investigación Preparatoria, después, son los llamados a poner las cosas conforme con el Derecho.

iii. **Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos.** —

No debe olvidarse que esta tarea no puede implicar recibir la confesión del imputado, puesto que ella sólo es válida con la presencia del Fiscal (cfr. el art. 160°.2.c)¹¹

El Código, como parámetro de racionalidad, da tres finalidades en estas actuaciones llamadas «de urgencia e imprescindibles»: 1. «impedir sus consecuencias» (del delito); 2. «individualizar a sus autores y partícipes»; 3. «reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la Ley penal». En

¹¹ Op. cit.

suma, la Policía debería realizar, antes de la asunción de la conducción por parte del Fiscal, en nombre del art. 67º, todas las actuaciones (pero también nada más que ellas) que tengan por finalidad alguno de los tres ítems antes citados; y sobre ellos debería haber una limitación autogenerada por los actores, mediante controles mutuos:

a. Los Policías deberían emprender sólo los actos que les permitan los tres fines del art. 67º.

b. Los Policías deberían acostumbrarse a acometer tal clase de acciones no en nombre de su “instinto policial” ni menos bajo el principio de que el fin justifica los medios, sino bajo parámetros racionales (y el primer criterio de racionalidad estaría dado por los tres fines). De esta manera en un escenario en el cual los abogados de las personas afectadas hagan reclamos ante el Fiscal y un Fiscal que pide cuentas de la actuación policial, los efectivos del orden podrían sustentar racionalmente (sobre la base de los tres fines) su proceder.

c. Los Fiscales deberán generar criterios de racionalidad en su control de esas medidas policiales tomadas sobre la base del art. 67º. Esto deberá generar, en la propia Policía, ajustes sobre cuáles de sus criterios acerca del art. 67º son apropiados o no.

d. Ante un reclamo de un abogado sobre por qué el Fiscal avaló ciertas actuaciones policiales sobre la base del art. 67º, el MP habrá de afinarse acerca de cómo sustentar ante el Juez su decisión de respaldo (o eventualmente, de no respaldo) sobre los actos policiales.

e. El Poder Judicial —atendiendo a las argumentaciones de las partes— deberá afinar todavía más los criterios de pertinencia del art. 67º, acerca de lo cual —y dado que se acudirá al Juez con la alegación de vulneración de derechos (como se ha visto a propósito del art. 71º.4), los parámetros de interpretación no se referirán sólo a una vulneración abstracta de los fines del art. 67º, sino a la relación de la vulneración de tales fines en función de la afectación o no de los derechos de los sujetos procesales.

f. Todo este circuito hará que sea cada vez más claro para todos (policías, abogados, fiscales y jueces) qué tipo de cosas se pueden hacer en nombre del art. 67º y cuáles no.¹²

La Policía abocada a la investigación del delito se ha dividido en los pesquisas y los peritos. Pues bien, se supone que la Dirección de Policía contra la Corrupción es de pesquisa, y no de pericias. Sin embargo, ha generado un nivel de conocimiento a nivel experto sobre los delitos contra la Administración Pública cometidos por funcionarios públicos, que el Legislador ha decidido adoptar esta salida, que no deja clara la distinción entre la pesquisa y la pericia.

La excepcionalidad está en que: en primer lugar la **Medicina Legal** ha pasado por el Poder Judicial, por el Ministerio de Justicia y finalmente ha sido adscrita al Ministerio Público, las razones de esta última medida se relacionan con los fines de conducción de la investigación del delito, que le corresponde al MP, y nos evidencia que hay una inclusión entre conducir la investigación e investigar, bajo la analogía *a fortiori*¹³; luego la **Contraloría General de la República, los Órganos de Control de cada entidad pública y las sociedades de auditoría externa independientes** (ver el art. 13º de la Ley N° 27785), y «consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción» (art. 6º de la Ley antes dicha). Su objetivo es *«prevenir y verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los recursos y bienes del Estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control»* (art. 2º)¹⁴.¹⁵

¹² Op. cit.

¹³ Es una locución latina que significa “con mayor motivo”, aquí decimos “con mayor razón”. En lógica se usa esta expresión para referirse a una forma de argumentación por la que se saca una consecuencia de una cosa en vista de la conclusión que se sacó de otra, para la cual había menor motivo.

¹⁴ i. **Primer paso de deber a poder.** —La redacción originaria del art. 321º.2 hacía obligatorio al Sistema Nacional de Control el colaborar con el Ministerio Público en la investigación del delito. La modificación establecida por la Ley N° 28697, publicada el 22 de marzo 2006, convierte esa obligación en una potestad: «La Contraloría General de la República, conforme a sus atribuciones y competencia, a solicitud del Titular del Ministerio Público, podrá prestar el apoyo correspondiente, en el marco de la normativa de control». Debe destacarse el cambio experimentado: cuando era obligación, lo era de todo el Sistema Nacional de Control; la potestad o colaboración voluntaria es sólo de la Contraloría General de la República.

Por su parte Mario Rodríguez Hurtado (2007) nos dice que: «La armoniosa actividad pesquisidora de fiscales y policías, dependerá en gran medida de que los representantes del MP sepan dirigir a todas las fuerzas útiles para el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades penales, desterrando la soberbia y displicencia en las cruciales fases de planificación estratégica y determinación de actuaciones, convocando, para ese propósito a los responsables del equipo policial que los apoyará. La dirección de una labor tan delicada como es la investigación no se concreta porque la ley así lo indica, se gana en la práctica y consolida cuando los agentes y partícipes de los delitos son encontrados culpables y condenados, según las pretensiones fiscales (arts. IV, 60, 61, 65, 334, 2, 336, 337, 344, 349, 399 del NCPP)». Agrega: «La policía, por su parte, contribuye con el proceso común cuando por propia iniciativa o noticia criminal toma conocimiento de los delitos y efectúa las actuaciones más urgentes e imprescindibles para elucidarlos, retransmite la información y da cuenta inmediata al Fiscal, para que éste asuma la conducción de la pesquisa, sin por ello dejar en suspenso sus atribuciones capitales como vigilar y proteger el lugar de los hechos, recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, propender la identificación física de los agentes y partícipes del hecho, recibir las declaraciones de los testigos, levantar planos, tomar fotografías y efectuar operaciones técnicas o científicas, capturar a los involucrados en delito flagrante, informándoles de sus derechos, asegurar los documentos privados útiles para la investigación, allanar locales de uso público y abiertos al público, secuestrar e incautar bienes en caso de delito flagrante o de peligro inminente de su perpetración, etc. (arts. 67 y 68 del NCPP)». Pasando a indicar que: «La actuación policial, habrá de plasmarse en un informe elaborado con sujeción al principio de objetividad que detalla los antecedentes que motivaron su intervención,

ii. **Segundo paso de deber a poder.** —El 08.ENE.2004 se promulgó la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 021-2004-MP-FN, que aprobó la Circular N° 001-2004-MP-FN, que regulaba la presencia del informe de control en la investigación fiscal en sus ítems N°s 2 y 3. *Aquí, en casos de mal uso de recursos estatales, el Fiscal tenía que recurrir al Sistema Nacional de Control.* El 17.NOV.2006 se promulgó la Resolución de Fiscalía de la Nación N° 1455-2006-MP-FN, que modificó el ítem 2 de la Circular antes citada, y colocó el Término **pueden** en su lugar: *Con esta modificación, consultar al Sistema Nacional de Control se vuelve optativo.* Hay un problema al haber mantenido en sus términos el ítem 3, pues su texto alude a una obligación, no a una facultad. Y esto podría traducirse —tomando al pie de la letra la actual configuración de la circular— que siempre va a haber examen de control: sea por iniciativa del Sistema, sea por pedido del Fiscal (según el ítem 3). Pero por cualquiera de las dos razones, así el fiscal mismo haya pedido el informe, no está obligado a tomarlo en cuenta.

¹⁵ Op. cit.

la relación de diligencias practicadas, incluyendo sus anexos (actas, manifestaciones y pericias) y el análisis de los hechos, sin calificarlos jurídicamente y sin imputar responsabilidades (art. 332 NCPP)». Para finalmente anotar: «El desempeño de este binomio fiscal-policial no sólo se manifestará durante la investigación, sino también en el juzgamiento, pues será muy frecuente que entre los medios de prueba de cargo actuados por el fiscal se incluyan los testimonios y exámenes de agentes y peritos policiales (art. 378 NCPP)».¹⁶

Jorge Rosas Yataco (2008) comenta sobre el particular que falta apoyo presupuestario, logístico, personal humano y tecnológico. Esta situación incide en el personal policial. Asimismo, la Policía debe de interiorizarse con el nuevo modelo procesal penal. Pues, el éxito o fracaso de una investigación depende de la relación o binomio policía-fiscal, y ambos deben estar compenetrados con este sistema de justicia penal. Tal como expone Lorena Gamero Calero (*La Policía Nacional y la conducción de la investigación del delito*, Actualidad Jurídica N°140, p.105) el complejo escenario ofrecido hasta el momento por el modelo inquisitivo, varía sustancialmente con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, puesto que, se confiere por un lado, el monopolio del ejercicio de la acción penal al MP, y por otro lado, se le permite al fiscal asumir, en términos fácticos, la dirección funcional de la investigación en la denominada etapa preparatoria. De esta manera, se establece claramente que la policía constituye un auxiliar –en función judicial- importante para la labor del Ministerio Público en la definición y ejecución de estrategias de la investigación del delito.¹⁷

Para Víctor Burgos Mariños (2008) la Policía tiene el deber de cambiar sustancialmente sus prácticas de investigación y ser más profesional. El sistema no admite que la Policía, como el primer funcionario interviniente en la escena del delito, se desprestigie como testigo, o dañe la evidencia obtenida. Con el NCPP la policía tendrá que defender la legalidad de su intervención en el Juicio oral, y debe tener en cuenta, que de ello dependerá que se sancione a responsable de un delito. Aisladas posturas de oposición al Nuevo CPP, deben de ser dejadas de lado, así como

¹⁶ Rodríguez, Mario. *El proceso común, vía emblemática del Código Procesal Penal de 2004 (CPP) y su primera etapa la investigación preparatoria*. Recuperado el 18 de enero del 2017 a horas 18:49 de file:///C:/Users/INTEL/Downloads/13817-55018-1-PB.pdf

¹⁷ Rosas, Jorge. *El Sistema Acusatorio en el Nuevo Código Procesal Penal*. Recuperado el 18 de enero del 2017 a horas 19:00 de http://portal.mpfn.gob.pe/ncpp/files/dfbaaa_articulo%20dr.%20rosas%20yataco.pdf

reminiscencias hacia el viejo atestado policial, y comprender que con el NCPP se ingresa a la modernidad en materia de lucha contra la criminalidad, con investigación estratégica preventiva e investigación científica. Creemos que también se necesita de un liderazgo institucional que se identifique plenamente con la reforma procesal penal y permita así, realmente a la Policía, recuperar la credibilidad y el prestigio que se merece, tan igual como ocurre con otras policías en países donde opera con éxito el Nuevo Modelo Procesal.¹⁸

Al respecto José Neyra Flores (2010) explica que la policía constituye una institución encargada de tutelar la seguridad ciudadana y sobre todo colaboradora de la justicia penal, cuyas autoridades dependen funcionalmente del MP, en cuanto a la investigación de delitos y faltas, pues reúne los elementos de prueba obtenidos, además de cumplir órdenes de las autoridades judiciales dentro del proceso judicial. Asimismo la Policía Nacional, en su función de investigación, al tomar conocimiento de hechos de naturaleza delictiva deberá de inmediato llevar a cabo las diligencias imprescindibles para impedir que desaparezcan sus evidencias y, en caso de flagrante delito, proceder a la captura de los presuntos autores y partícipes dando cuenta sin mayor dilación, que el término de la distancia, al Fiscal Provincial para que asuma la conducción de la investigación.

Por ello señala el NCPP en su artículo 67° que "la Policía Nacional en su función de investigación debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al Fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la Ley penal". Y muy claramente establece en el apartado segundo que "los Policías que realicen funciones de investigación están obligados a apoyar al MP para llevar a cabo la Investigación Preparatoria", lo que respalda el hecho que quien dirige la investigación es el MP.

Sobre la relación de la Policía con el MP indica que la Policía Judicial cumple probablemente una de las más importantes y complejas funciones en cuanto consiste en investigar técnicamente el delito para auxiliar a la justicia penal en la elucidación de la verdad de los hechos, sin embargo, como se señaló, el Fiscal dirige la

¹⁸ Burgos, Víctor. El Nuevo Código Procesal Penal: realidad o ficción. Recuperado el 18 de enero del 2017 a horas 21:19 de [inbox.lc/BN5](mailto:inbox.lc@BN5)

investigación. Pero debe quedar claro que dirigir la investigación no implica de manera alguna que los Fiscales se conviertan en especialistas en criminalística, ni mucho menos que realicen pericias de diversa índole, (aunque si se requiere cierto "conocimiento básico) su función tal y como lo manda el texto constitucional y el nuevo ordenamiento procesal penal debe encuadrarse en diseñar el plano sobre el cual la policía deberá realizar las labores que requiere la investigación, es por ello que resulte de vital importancia que ambos actores se encuentren en estrecha relación.¹⁹

Florencio Mixán Mass (2008) nos dice que el deber de función de la Policía es poner en conocimiento inmediato de la Fiscalía la perpetración del delito y realizar los Actos necesarios de urgencia en el Caso y demás previstos en los Artículos 67 y 68 del CPP de 2004 y según el lineamiento o estrategia acordada con el Fiscal. Reitero, es necesario que Fiscal y Policía trabajen en Equipo, intercambiando experiencias, ideas, y diseñando la estrategia que conduzca a lograr la eficacia, pero, siempre en el marco constitucional y legal. Es necesario que el estado y la Sociedad organizada atiendan las necesidades de la Policía para que pueda prestar a cabalidad su valiosa cooperación en la investigación del dolo. Ese apoyo o cooperación jurídicamente debida de la Policía en la tarea de Investigación del delito en el procedimiento del Sistema Acusatorio consiste:

- a) Comunicar inmediatamente a la Fiscalía del conocimiento que tenga sobre la perpetración de un comportamiento delictivo. Este deber está previsto en el Art. 331.1 del CPP, concordante con lo prescrito declarativamente en el Art. IV del Título Preliminar y en el inc.1 del Art. 322 del CPP.
- b) "Aun después de comunicada la noticia del delito, continuará las investigaciones que hay iniciado" (Art. 331.2 CPP). Después practicará los demás Actos de Investigación previstos en los Arts. 67 y 68 del Código Procesal Penal, de acuerdo con la dirección jurídica del Fiscal, sea en cooperación directa con él o por delegación expresa y especificada del mismo;
- c) Mediante el empleo de la Ciencia Aplicada que se ha de concretar como Servicio Criminalístico, que tiene la cualidad de científico – técnico, debe ser oportuno, eficiente y eficaz. Ver, por ejemplo, lo previsto en el inc.2 del Art. 321, en el inc. 3 del

¹⁹ Neyra, José (2010). *Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral*. IDEMSA Editorial Moreno S.A. Lima. Pp. 223-228. Con algunas modificaciones con fines académicos.

Art. 322, en el inc.3 del Art. 330, en los párrafos. g) y m) del inc.1 del Art. 68 del CPP, la Resolución Directoral No. 406 – 2005- DIRGE/EMG, de la PNP, aprobando la “Guía de Procedimientos Criminalísticos”. Es lamentable que esta importantísima línea del rol policial aún no se concrete normalmente, por falta de implementación adecuada, en el actual ámbito de aplicación de la Reforma Procesal Penal.

d) Elaborar el Informe Final de su actuación (Art. 332 CPP)

e) Realizar la coordinación interinstitucional (Art. 333 CPP)

f) Ejecutar lo ordenado por el Juez de Investigación Preparatoria o por el Juez Penal o por la Sala Penal Superior.²⁰

Indica el autor asimismo, que resulta un tanto arbitrario o ingenuo reclamar a la Policía resultados óptimos sin dotarla previamente de la implementación necesaria. Actualmente, la Policía tiene muchas carencias que le dificulta cumplir a cabalidad su labor de Apoyo a la Reforma Procesal Penal. Que es deber del Estado y de la Sociedad Civil organizada que cuenta con recursos económicos proveer a la Policía, cuando menos de lo indispensable, para exigirle eficiencia y eficacia; de lo contrario, carecen de la fuerza moral para tal reclamo. Sus notorias carencias son:

a. Le falta dispone de una Red Integral de Comunicación Interinstitucional, moderna y expeditiva, que le permita una comunicación oportuna con el Ministerio Público, con la Defensoría Pública y con el Poder Judicial. Desde luego, que esta carencia también afecta a las demás Instituciones mencionadas;

b. Carece de movilidad motorizada apropiada para desplazarse con presteza a los lugares donde habrá de cumplir la misión encomendada por el Fiscal que dirige la Investigación;

c. Carece de equipos de comunicación de telefonía móvil:

d. Necesitan locales con ambientes y mobiliario adecuados para realizar algunos Actos de investigación, en el modo y forma previstos por el Código Procesal Penal de 2004; es decir, con sujeción a los cánones del Debido Proceso;

e. Es urgente la implementación adecuada del Servicio Criminalístico, siguiendo el ritmo del avance de la Reforma Procesal Penal. Es preocupante que el Estado, concretamente el Ministerio del Interior, no tenga un Plan Integral de Implementación

²⁰ Mixán, Florencio. *Fiscal y policía: Un binomio de la reforma procesal penal. Agenda Magna. El sitio de las soluciones justas.* Recuperado el 18 de enero del 2017 a horas 23:00 de <https://agendamagna.wordpress.com/tag/florencio-mixan-mass/>. Con algunas modificaciones con fines académicos.

del Servicio Criminalístico para apoyar la Reforma Procesal Penal. Esa carencia o deficiencia está generando dificultades e incluso imposibilidad en algunos Casos importantes para la identificación, acopio e interpretación de Fuentes de Naturaleza Indiciaria; obstáculo que implica el riesgo de que el delincuente quede impune porque no es descartada fehacientemente la Presunción de Inocencia.

La Policía, sí, es consciente de la importancia de la Criminalística; pues, así lo demuestra el siguiente párrafo de la Introducción de su “Guía de Procedimientos Criminalísticos”: “... la presente Guía tiene como finalidad unificar y difundir en el personal PNP, los conocimientos y métodos técnico científicos básicos para combatir eficientemente la criminalidad y la violencia en nuestro país. Su contenido es un compendio de Manual del Procedimientos Periciales de Criminalística PNP, con la inclusión de Directivas Institucionales relativas a la especialidad y aspectos esenciales del Manual de Criminalística PNP: “... consta de tres Capítulos: Criminalística de Campo (Investigación en la Escena del Delito), Criminalística de Laboratorio e Identificación Criminalística...”.

Falta construir o adecuar locales para la instalación de equipos de tecnología avanzada que se adquirieren y para conservación de instrumentos e insumos.

Se necesita incrementar el número de especialistas que deben integrar el Conjunto plural de criminalistas.

Falta adquirir Laboratorios Móviles en número suficiente para que cubran las necesidades de las distintas provincias de cada Distrito Judicial en el que se está aplicando la Reforma Procesal Penal; e, igualmente, es necesario la adquisición e instalación de Laboratorios (centrales) fijos en algunas sedes Regionales.

Es verdad que en Lima existe y funciona el núcleo principal del Servicio Criminalístico pero está comprobado que debido a los múltiples requerimientos no se abastece.

Igualmente, es verdad que el Ministerio Público cuenta con el apoyo del Instituto de Medicina Legal pero también sólo cubre requerimiento de su área.

Muchos pesimistas dicen: “que nada se pudo hacer porque no hay presupuesto” (sic). Ese pesimismo es infantil. Existen alternativas como, por ejemplo, de que el Ministerio del Interior conforme un Equipo de Expertos para que formulen Proyectos de Implementación del Servicio Criminalístico y con ese Proyecto, el Gobierno gestione ayuda de la Cooperación Internacional. También considero factible, que con Proyectos de Implementación a la vista, poder gestionar el apoyo de los Gobiernos

Regionales y de los Gobiernos Locales así como del sector empresarial de la sociedad civil.²¹

- f) La austera y crítica economía del miembro PNP que no justifica pero sí favorece la pérdida de valores como honestidad y probidad, y participación en actos de corrupción, dada a su mala formación y situación coyuntural.

Incremento Remuneración Pensionable 2011-2015				
Evolución Ingresos Pensionables PNP				
GRADO	Remuneración Pensionable a Julio 2011	REMUNERACION Pensionable Diciembre 2015	Incremento remuneracion Pensionable	% Incremento
PERSONAL OFICIAL				
TTG	7,720	8,573	853	11%
GRAL	7,558	8,362	804	11%
COR	6,149	6,910	761	12%
COM	2,586	4,279	1,693	65%
MAY	1,958	3,254	1,296	66%
CAP	1,636	2,705	1,069	65%
TEN	1,281	2,258	977	76%
ALF	1,230	2,204	974	79%
PERSONAL SUBALTERNO				
SOSUP	1,681	2,668	987	59%
SOB	1,642	2,561	919	56%
TC1	1,506	2,382	876	58%
TC2	1,221	2,228	1,007	82%
TC3	1,187	2,104	917	77%
SO1	1,150	2,043	893	78%
SO2	1,140	2,005	865	76%
SO3	1,135	1,976	841	74%

Fuente: <http://larepublica.pe/sociedad/739044-estos-son-los-salarios-de-los-policias-en-peru-se-justifica-una-protesta>

- g) La pésima Logística PNP, partiendo de sus uniformes, armamento, munición, vehículos, comunicación virtual, etc., etc. Situación que pasa por el acrecentamiento de la corrupción desde los altos mandos policiales, sin dejar de lado al propio Ministerio del Interior.
- h) En la Ley de la Carrera Policial, existen vacíos, como el del cargo de la Dirección General (DIRGEN), que es un cargo de confianza de los gobiernos de turno, realizando los nombramientos sin respetar la antigüedad. Entidades que cuentan con normas bastante recientes como los Decretos Legislativos 1267, 1150 y 1151, y Decreto Supremo 013-2016-IN, que se refieren a la nueva ley de la PNP, a su

²¹ Op. cit.

régimen disciplinario, a su régimen educativo y reglamento del 1150, respectivamente; normas cuya implementación deberemos observar y analizar en el corto plazo. Aspectos que indudablemente afectan la autonomía de la institución policial.²²

Ante estas deficiencias existen propuestas como:

- 1) El fortalecimiento del principio de autoridad y el reconocimiento del derecho del policía, al ser la autoridad que representa la ley y el orden ante la sociedad, otorgándole las funciones para la cual fue creada, en cumplimiento de la Constitución Política del Perú, específicamente en la misión de prevenir, investigar y combatir la delincuencia. Obviamente esto tiene que ir aparejado con un cambio de actitud del miembro policial; aspectos que determinarán el ingreso a un círculo virtuoso de excelencia y probidad.
- 2) El repotenciamiento de las escuelas de formación, partiendo de una buena selección; insistiendo sobre todo en la mística y deontología policial, para un buen servicio a la sociedad; no centrarse en eliminar el servicio de 24 x 24, para el servicio de prevención, puesto que el servicio policial tradicional (retén – servicio – franco), es casi lo mismo, por la escasa cantidad de personal policial.

Actualmente se comenta en los medios, el cierre de las 27 escuelas técnico superiores PNP de policía y la creación de una mega escuela. Iniciativa que de plasmarse nos haría ingresar a una etapa de desatención, en cuanto a la formación, de las necesidades locales de cada jurisdicción, para dar paso a una de políticas generales impartidas sobre la base de requerimientos político-coyunturales.

- 3) Repotenciamiento de la aplicación de la Inteligencia Operativa, solo para efectos de la Seguridad Ciudadana.

Por su naturaleza y objeto de estudio, la Teoría de Inteligencia Operativa Policial es bastante nueva, así como el mismo término. Se introduce por primera vez y esto hace que su definición sea de carácter estipulativa, nominal o verbal. Esta teoría fue elaborada por policías antiterroristas como guía y sustento de las operaciones de inteligencia que se desarrollaban para combatir el terrorismo capturando a sus jefes, cabecillas y dirigentes. La idea era apuntar a la cabeza de las organizaciones terroristas y causarle mayor daño en más altos niveles. En la práctica, esta teoría comprende dos partes o fases: Inteligencia e Investigación. Es por eso que se afirma

²² Op. cit.

que la teoría es un proceso cuyas dos fases (inteligencia e investigación) interactúan y se complementan. Lo novedoso en esta teoría y método es que las dos fases son cubiertas por la misma organización policial. Así se tiene a nuestro favor dos principios elementales en toda lucha: La oportunidad y la sorpresa. Trabajar así desconcierta al enemigo y se le coge desprevenido. Esto también permite disminuir los riesgos reducir los "costos" en cuanto a vidas e integridad física, tanto de los agentes como del adversario. La inteligencia operativa policial se ubica dentro de la Ciencia Policial y constituye en una nueva y superior forma de combatir el crimen organizado. Es una teoría y método de investigación contra el delito organizado que busca desarticular o neutralizar las organizaciones terroristas a través de la detención o captura de sus jefes, cabecillas o dirigentes a través de operaciones de inteligencia policial. Debe fundarse en:

- i) Objetivo.- Proporcionar a la policía un conjunto de conocimientos sistematizados, técnicos y científicos, con aplicación práctica, para que puedan desarrollar y ejecutar operaciones de inteligencia con éxito, minimizando los riesgos.
 - ii) Finalidad.- Desarticular las organizaciones criminales, de todo tipo capturando a sus jefes, cabecillas, dirigentes, etc., aplicando el principio de "vencer sin luchar"(sin costos, reduciendo los riesgos).
 - iii) Método.- Sigue un planeamiento minucioso, por fases y etapas que empieza desde la selección de un objetivo, el conocimiento de la estructura orgánica, contactos, inmuebles, indicios y evidencias, niveles dentro de la organización, modus operandi, etc. Luego viene las intervenciones y capturas, levantamiento de actas, manifestaciones, pericias, comprobaciones, análisis de lo incautado, responsabilidades, hasta la puesta a disposición de los implicados ante la autoridad del Fiscal con el informe, el parte o atestado respectivo.²³ Hablamos de investigar para detener, en contraposición a detener para investigar.
- 4) Incremento razonable de los sueldos en la PNP, sin dejar de lado el infundir la mística de servicio que debe guiar el accionar de todo miembro policial.
- Lo cierto es que, en lo que se verifica hasta el momento, se tiene al miembro policial como un ciudadano de segunda y como tal cada vez merecería menos respeto; pues

²³ Jiménez, Benedicto. *La inteligencia operativa policial*. Recuperado el 12 de junio del 2017 a horas 17:58 de <https://www.patrulleros.com/articulos/61-policiales13/3401-la-inteligencia-operativa-policial>

éste último hace mucho tiempo que ha dejado de ser un elemento consustancial a la condición de miembro policial, para dejar su lugar a un creciente sentir de desaprobación y descrédito; respeto que solo podrá recuperar mediante el paulatino fortalecimiento de la convicción y auto sugestionamiento de que el cambio es el único camino para remontar la inseguridad ciudadana y agenciarnos de un clima adecuado para ingresar a una etapa de franco desarrollo económico y social.

- 5) Implementación de sanciones drásticas al personal que comete actos de corrupción, sin derecho a reingreso, bajo situaciones judiciales. Aquí partimos de que un debido proceso que sirva de sustento a la sanción, garantizará que no haya vuelta atrás por inobservancia del contenido esencial de los derechos fundamentales-
- 6) Reestructuración de la carrera policial, sobre todo en lo relacionado a cambios y ascensos del personal policial, que no está de conformidad a la buena administración de personal; el cargo de Director General de la PNP, no debe ser cargo de confianza del gobierno de turno, por cuanto se pierde el liderazgo de una Institución, en todo caso deberá ser nombrado conforme otros funcionarios (Fiscal de la Nación, Presidente de la Corte, etc.), logrando así la despolitización de PNP. Dicho de otra forma; la implementación y asignación de cargos al personal policial debe darse atendiendo exclusivamente a las necesidades institucionales y a las estrategias de corto mediano y largo plazo para el cumplimiento de sus objetivos, y no sobre la base de la disponibilidad de personal. Lo que viene revelando un alto grado de improvisación en la asignación de cargos, lo que permitiría la politización de la institución en este sentido.
- 7) Y finalmente la unificación de criterios, en la formulación de planes estratégicos y operativos propios para combatir la delincuencia, de acuerdo a la realidad de cada ciudad.

1.4 Planteamiento del Problema

En el sentido propuesto debemos destacar que en el distrito judicial de Lambayeque en el año 2009 se implementó el Código Procesal Penal del 2004 y durante los años 2011 a 2015 al seno de la Policía Nacional del Perú han venido surgiendo una serie de inconvenientes que sumados a la problemática descrita y ya existente en este sentido, determinaron una situación bastante complicada para lograr la aplicación de esta norma con todas las innovaciones que implica su adopción. Problemática cuya superación viene requiriendo del apoyo decidido y

motivante de quienes vemos en esta norma adjetiva una solución adecuada para la creciente amenaza que representa el incremento vertiginoso de la criminalidad en el distrito en mención.

Aspectos que requieren de un análisis integral sobre cada uno de los ejes problemáticos y el estudio de las diferentes propuestas representadas en otras realidades para el afrontamiento de la criminalidad en sus respectivos países por parte de los más importantes cuerpos policiales del mundo.

El espacio de ese contexto es la Región Lambayeque desde el año 2011 hasta el 2015, en el que surgen las interrogantes de si:

¿La problemática que trae consigo el concurso de la PNP en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal es susceptible de superarse mediante la implementación de cambios inspirados en el desempeño funcional de los cuerpos policiales de élite a nivel internacional?

¿La actitud asumida por nuestra policía durante los años 2011 a 2015 en Lambayeque a propósito de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal podrá reconducirse con una reforma de sus estamentos y la demostración de que los inconvenientes no radican en la forma de implementación sino en el reconocimiento de la eficacia de sus instituciones?

¿Existe comprensión e interiorización por parte de los miembros policiales de Lambayeque y de todo el país de los principios pilares²⁴ del modelo procesal que trae consigo nuestro NCPP?

¿La capacitación que recibe nuestra policía está orientada a formar los investigadores que requiere la aplicación del NCPP?

¿Podremos lograr contar con un cuerpo policial que de manera uniforme sea capaz de afrontar el reto de una implementación eficaz del NCPP?

Con respecto a las **consideraciones o estudios previos** sobre problemática tenemos que Enrique Muller Solón, ex Defensor del Policía en <http://pe.globedia.com/codigo-procesal-penal-policia-investigacion-delito> precisa que una policía que no se adapta a las transformaciones sociales y a los nuevos desafíos que presenta la actividad delictiva, está destinada a la ineficiencia y a la pérdida constante de su capacidad institucional. Por eso este trabajo de investigación, se plantea el reto de colaborar con la Policía Nacional del Perú, con el sistema de

²⁴ Principios de oralidad, contradicción, inmediación y contradicción.

Justicia nacional y con la sociedad peruana en general, aportando alternativas como esta, que permitan resolver los problemas de acceso a la justicia, en particular de la población rural, partiendo de la experiencia local en la resolución pacífica de conflictos, dentro del respecto a los derechos humanos y la necesidad de establecer articulaciones entre los sistemas de justicia estatal, público no estatal y la justicia comunitaria. Por lo tanto esta iniciativa se enmarca en una estrategia de trabajo personal del autor, orientada a colaborar con el proceso de modernización y profesionalización de la Policía Nacional, haciendo énfasis en el desarrollo del nuevo sistema de justicia que se viene aplicando progresivamente a nivel local, regional y nacional.

Nuestro resultado final nos deberá proporcionar una alternativa viable para que el aporte funcional de la PNP a la implementación del nuevo CPP sea eficaz para el desarrollo socioeconómico de nuestro país, pasando por el cabal mejoramiento del sistema penal y judicial. Logrando identificar y diagnosticar los principales impedimentos para que la institución policial cumpla el rol que le asigna el nuevo modelo, asimismo generar una alternativa de respuesta que logre allanar el impase. Investigación que resulta importante para precisar los alcances del problema en mención y contribuir a su solución.

1.5 Descripción la metodología

Se trata de una investigación mixta o cualitativo cuantitativa pues paralelamente los datos de campo son recogidos en el lugar desde las apreciaciones de los operadores jurídicos, quienes experimentan el fenómeno o problema de estudio, y a la vez nos mantenemos distanciados del objeto de estudio para influir lo menos posible en los datos que a levantar; asimismo nuestras fuentes de información son secundarias, nuestra técnica de investigación es la encuesta y utilizamos la observación, que es previa a las hipótesis y tuvo un lugar central, tanto para la definición de los objetivos como para la selección de la estrategia metodológica a utilizar. Logrando al concluir producir la descripción y la explicación de los fenómenos sociales en cuestión desde una mirada objetiva y estadística, revelando las relaciones entre variables.

En la tarea de obtener conocimiento científico, destacan modelos metodológicos que, en razón del abordaje de sus objetos de estudio, a través de técnicas e instrumentos específicos, se conocen como cualitativos. Esas técnicas e

instrumentos logran obtener información directamente de los sujetos implicados en el fenómeno, recabando sus experiencias, opiniones, historias de vida particular, etc., o simplemente mediante el análisis de documentos, informes, normas o leyes escritas, archivos y todo aquel material fehaciente que contenga información tendiente a describir puntualmente alguna situación o fenómeno en particular.²⁵

²⁵ Croda, José. Abad Eric. *Modelos de investigación cualitativa y cuantitativa y su aplicación en el estudio del Derecho*. Revista Universita Ciencia. Año 4, núm. 12, enero – abril 2016, Universidad de Xalapa. México. P. 17.

CAPÍTULO II: METODOLOGÍA INVESTIGATIVA

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo general

En el marco del Rol de la Policía desde la perspectiva de nuestro nuevo sistema acusatorio garantista, adversarial se erige nuestra PNP como una institución encargada de tutelar la seguridad ciudadana y sobre todo colaboradora de la justicia penal, cuyas autoridades dependen funcionalmente del MP, constituyéndose de manera efectiva en el brazo operativo de éste, en cuanto a la investigación de delitos y faltas, pues reúne los elementos de prueba requeridos, además de cumplir órdenes de las autoridades judiciales dentro del proceso judicial. Lo que no sería viable si se trata de un brazo “inútil” o “putrefacto”, producto de la corrupción o de la inoperancia. Debemos asumir por lo tanto que el Rol fundamental de la Policía Nacional como aparece descrito en el Art. 166° de la Constitución de 1993, que indica: "La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental, garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras".

En consecuencia el objetivo general de nuestro trabajo es establecer los factores negativos de la PNP y su influencia en el desempeño funcional del MP en el proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal en la región Lambayeque durante los años 2012-2015, partiendo de que esta problemática es la misma que se verifica a nivel nacional, salvo aspectos muy excepcionales que iremos anotando.

2.1.2 Objetivos específicos

2.1.2.1 Determinar los factores negativos de que adolece la PNP, previo análisis de las diferentes posiciones de doctrinarios, jurisprudencia, diagnósticos de entidades nacionales e internacionales en este sentido.

2.1.2.2 Puntualizar la forma cómo los factores en mención influyen en el desempeño funcional del MP en el proceso de implementación del

nuevo Código Procesal Penal en la región Lambayeque durante los años 2012-2015.

- 2.1.2.3 Describir el tratamiento que reciben cada uno de los factores negativos de que adolece nuestra PNP, de acuerdo a los diferentes aportes doctrinarios nacionales y extranjeros, y a la legislación comparada.
- 2.1.2.4 Comparar el efecto que tiene el actual desempeño funcional de la PNP, a propósito de la implementación del NCPP, con el que tendría de implementarse los aportes de este trabajo.
- 2.1.2.5 Explicar la forma como los aportes de este trabajo contribuirán al mejoramiento de la implementación del NCPP, asegurando previamente un óptimo desempeño funcional de la PNP en este sentido.
- 2.1.2.6 Proponer *de lege ferenda* la modificación del D. Leg. 1267, Ley de la PNP, en algunos de sus artículos relacionados con el presente trabajo.

2.2 Hipótesis

2.2.1 Formulación de la hipótesis

SI SE MEJORARAN LOS FACTORES NEGATIVOS DEL DESEMPEÑO FUNCIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE PREDOMINANTES DURANTE LOS AÑOS 2012-2015, ENTONCES REDUNDARÍA EN EL FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y POR ENDE EN EL DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.

2.2.2 Identificación de variables

De la relación entre el tema, los objetivos y el marco teórico conceptual, se hace la formulación de las hipótesis como supuestos que quiere dar respuestas tentativas a nuestro objeto de estudio. Tiene singular importancia en la medida en que representan figurativamente un puente entre la teoría existente y la que se encuentra en construcción. Según algunos autores **es el motor de desarrollo de la ciencia**. Consecuentemente de las hipótesis identificaremos las variables que en algunos casos son dependientes e independientes, y los indicadores que son más puntuales. En nuestro caso las variables operan de manera muy sencilla pues el mejoramiento de los factores

negativos del desempeño funcional de la PNP determinarán el fortalecimiento de la función del MP y por ende del proceso de implementación del NCPP; este mejoramiento estará dado por la efectiva superación de los factores en mención como son: el fortalecimiento de las unidades de élite de alto nivel, la especialización, la implementación de tecnologías de la información de vanguardia, nueva estructura de la PNP, heterogenización nacional, participación ciudadana (proximidad social), inteligencia operativa, control psicológico del personal policial (baremación de los test), directrices orientadoras, coordinación interregional y resolución de la relación de la policía con los gobiernos locales, la Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Lambayeque; siendo que cada uno de estos indicadores tendrán a su vez sub-indicadores que los condicionen, los mismos que se describen en el cuadro el siguiente:

VARIABLES	INDICADORES	SUB_INDICADORES	DIMENSIONES	TÉCNICAS
2.2.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE Mejoramiento de los factores negativos del desempeño funcional de la PNP.	• Fortalecimiento de unidades de élite de alto nivel.	Su entrenamiento debe darse de acuerdo a la zona y materia de su accionar.	CORRUPCIÓN Y CRIMEN ORGANIZADO	Cuadros estadísticos
	• Especialización.	Cada efectivo policial debe pertenecer a un cuerpo especializado que pueden ser: orden público o comunitario, investigación y seguridad.	ORDEN PÚBLICO, INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD.	
	• Tecnologías de la información.	Ninguna unidad policial debe carecer de recursos informáticos de vanguardia.	IMPLEMENTACIÓN TECNOLÓGICA DE VANGUARDIA	
	• Nueva estructura.	El Director de la PNP debe ser un oficial de carrera que cuente con el respaldo de los miembros policiales.	ORDEN PÚBLICO, INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD.	
	• Heterogenización nacional	Las unidades de cada región policial deben tener características propias, acorde con los requerimientos	UNIDADES LOCALES ESPECIALIZADAS	

		del lugar.		
	• Participación ciudadana (proximidad social)	El binomio policía-ciudadano debe estar fortalecido en cada zona.	COMITÉS VECINALES	
	• Inteligencia	La implementación de recursos tecnológicos debe ir de la mano con un desarrollo operacional respetuoso de los DDHH.	INTELIGENCIA OPERATIVA	
	• Control psicológico del personal policial (baremación de los test)	La incidencia de casos de efectivos PNP que delinquen debe ir decreciendo por detectarse al momento de la selección.	DETECCIÓN TEMPRANA	
	• Directrices orientadoras	La comunicación oportuna entre comando y personal PNP debe ser fluida y servir efectivamente para fines institucionales.	OFIMÁTICA	
	• Coordinación interregional y resolución de la relación de la policía con los gobiernos locales	El desempeño policial debe estar acorde con los intereses de la comunidad local, los que están representados sin duda por su comuna.	COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA	
2.2.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE Fortalecimiento de la función del MP y por ende del proceso de implementación del NCPP.	• La Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Lambayeque	Su éxito estará dado por la disminución de la sobrecarga procesal, lograda con el apoyo decidido del Estado.	EFICIENCIA PROCESAL	Cuadros estadísticos

2.3 Técnicas y metodología

2.3.1 Diseño de investigación

Se tratará de una investigación básico-dogmática²⁶ en tanto tiende a proporcionar alternativas de solución al álgido problema de la eficiencia del trabajo policial como elemento del éxito en la implementación del Código Procesal Penal del 2004 en nuestro país, mediante un diagnóstico que permita construir una propuesta concreta a un problema vigente y sin solución; y de una investigación fáctica en la medida en que se demostrará analíticamente que en los lugares donde se encuentre regularmente implementado el nuevo modelo con un sistema funcional policial eficiente y eficaz, la incidencia de hechos delictuosos será menor que en aquellos donde no existe tal sistema.

2.3.2 Instrumentos

Datos estadísticos recientes, encuestas concebidas desde el punto de vista de la Ciencia Estadística, y bibliografía actualizada sobre el tema.

2.3.3 Procedimiento

Se estructurará la investigación partiendo de aspectos investigativos de orden puro, teórico o dogmático sobre los logros en otras realidades y la nuestra a nivel de manejo policial de su institución y del delito, y de la aplicación de encuestas sobre el tema aplicadas a los principales operadores jurídicos de nuestro sistema penal; luego se ingresará a una etapa de análisis con aplicación de los principios de gestión policial y dogmático-penales ya establecidos dentro del marco teórico. Para finalmente ingresar a la consolidación de los aspectos conclusivos y enunciamiento de las recomendaciones pertinentes, sobre la base de los planteamientos esbozados con motivo de nuestra indagación.

²⁶ También denominada investigación pura, teórica o dogmática. Se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él; la finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico.

CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO

3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Los Pobladores de la Ciudad de Chiclayo y en general de la Región Lambayeque, durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 hasta la actualidad, vienen experimentando un incremento en el accionar de la delincuencia generalizada, quienes actúan en bandas organizadas bien equipadas, con armamento moderno, caracterizándose por la forma cruenta, violenta e inescrupulosa como vienen operando; causando una significativa sensación de inseguridad entre los vecinos de la Ciudad.

El incremento de estas formas de violencia social extrema, dio lugar a la adopción de medidas de emergencia por parte de Gobierno Central, diseñando una estrategia integral de seguridad ciudadana encuadrado en la Ley N° 27933 – Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

No obstante, el crecimiento de las actividades económicas y comerciales que se registran en la Provincia de Chiclayo, asociados a otros factores socio económicos, originaron que en esta importante ciudad se incremente la delincuencia en todas sus formas, determinando la diseminación de la sensación de inseguridad en toda la ciudadanía, con hechos como la extorsión a empresarios de establecimientos comerciales y empresas de transportes, etc. Ante esta situación la Policía Nacional del Perú ha intensificado la ejecución de diversos operativos; no obstante la inseguridad ciudadana continua siendo preocupación para todas las autoridades en general.

El tráfico ilícito de drogas, es una actividad ilícita, que moviliza millones de dólares con ingentes ganancias ilegales a sus agentes, a pesar que cada año se decomisan cantidades de drogas, especialmente de cocaína y látex de opio.

El Departamento de Lambayeque por sus características geográficas, particularmente las localidades de Chiclayo y Cajamarca, favorecen a los traficantes para el cultivar, elaborar, transportar y comercializar drogas ilícitas con tendencias al incremento de estas actividades por su alta rentabilidad económica que generan un álgido problema policial – social.

La provincia de Chiclayo está considerada como una zona de tránsito terrestre y marítimo para la comercialización de drogas tóxicas, como son PBC, marihuana, clorhidrato de cocaína y látex de opio.

Los consumidores de droga en Chiclayo, son abastecidos por una multitud de micro comercializadores que usualmente administran cantidades que no exceden unas decenas de

gramos. Los micro comercializadores o también llamados “paqueteros”, a su vez son abastecidos por traficantes mayoristas que suelen manejar entre 10 y 20 kilogramos de droga como máximo. Estos han encontrado su campo de acción desde hace un buen tiempo en AAHH, PPJJ y zonas periféricas de las principales ciudades del ámbito jurisdiccional. Dentro del contexto de la micro comercialización, existe una serie de mecanismos para distribuir las mismas. La venta callejera es la modalidad más tradicional; siendo la venta a domicilio (“*delivery*”) una de las modalidades que en los últimos tiempos se ha intensificado.

Es decir; la Ciudad de Chiclayo se enfrenta a una realidad polimorfa de violencia, en efecto a la delincuencia común (robo y hurto) se suman:

- La violencia de “proximidad” (robos, asaltos, estafa, violencia sexual) que corresponde a la delincuencia en la ciudad y los barrios de diferentes Pueblos Jóvenes, Asentamientos humanos, Centros poblados, etc. siendo ésta, la más peligrosa y lo que más teme la población.
- La violencia juvenil involucradas también, en consumo de drogas y su captación y conexión con la micro-comercialización de estupefacientes.
- La Violencia familiar.
- La extorsión siendo sus principales víctimas; empresarios, comerciantes, etc.
- Narcotraficantes con zonas de acopio, transporte, incremento del consumo de drogas, etc. y la micro-comercialización de drogas.
- Incremento de la prostitución clandestina y proxenetismo.
- Incremento desmesurado de locales nocturnos y licorerías.
- Consumo desmedido de licor en la vía pública especialmente los fines de semana.
- Desorden y falta de control en el parque automotor trae como consecuencia actos ilícitos.²⁷

Resulta notorio el rápido incremento del delito de Extorsión Agravada en Obras de Construcción, cometiéndose contra los responsables, contratistas o propietarios de la ejecución de obras de construcción civil tanto de índole pública o privada, formales o informales, así como trabajadores que laboran en dichas obras, mediante una modalidad conocida como “*cupos*” ya sea por puestos de trabajo o por montos elevados de dinero aduciendo que les corresponde, siendo que el tipo penal ha sufrido varias modificaciones, sin embargo éste no está cumpliendo con su rol punitivo ni sancionador identificándose por lo tanto que en nuestra realidad la norma no se cumple.

²⁷ Municipalidad Provincial de Chiclayo (2016). Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2016. Comité Distrital De Chiclayo.

3.2 BASE TEÓRICA

Lo policial nace, crece y se desarrolla muy íntimamente ligado a lo jurídico. El policía vive en el derecho y por el derecho. El policía es un jurista en acto y en potencia. El análisis jurídico, realizado con el prisma de lo policial, aunque vasto, busca con particular empeño todo aquello que se encuentra vinculado e interrelacionado con las materias de su conocimiento y con los propósitos prospectivos e interdisciplinarios que se han venido explicando.²⁸

Lo jurídico es un tema extenso y desarrollado y no todo lo vamos auscultar y estudiar. El enfoque debe estar centrado tan sólo al aspecto jurídico en los campos social, político e institucional y dentro de éste en el funcional, tercer aspecto que debemos enfatizar como parte vital de la dogmática general (institución).

Desde el punto jurídico institucional, la Policía es un órgano del Derecho, que se fundamenta en la razón de ser un organismo ejecutivo del poder de policía²⁹ que posee el Estado. Estado-Derecho-Institución Policial conforman un complejo conceptual, consolidado por fines y valores comunes.³⁰

El proceso de estudio de lo jurídico institucional debe adoptar un sistema de categorías y conceptos que orienten de conformidad con una teoría para el efecto. Y partir de que la entidad policial se debe a la concepción normativa de su nación, enunciada por los poderes Constituyente y Legislativo, y es parte del Poder Ejecutivo del Estado que la gobierna, debiendo responder a sus necesidades de seguridad y de prevención, complementando la función del Poder Judicial y del Ministerio Público como organismo autónomo y director jurídico de la investigación, titular de la acción penal pública y detentador de la carga de la prueba.

3.2.1 Aspecto policial

A. ANTECEDENTES DE LA POLICÍA

Nuestra historia desde la perspectiva policial se desarrolla de manera más notoria desde la época incaica ya que el Inca Pachacútec, para mantener el desarrollo social del imperio, así

²⁸ Manosalva, José (2009). *Doctrina policial*. Monografías. com. Recuperado el 22 de noviembre del 2017 a horas 10:03 de <http://www.monografias.com/trabajos68/doctrina-policial/doctrina-policial2.shtml>

²⁹ Para Bielsa el poder de policía implica establecer limitaciones a través de servicios dependientes de la Administración Pública, para lograr la integridad física y moral de las personas y el orden público. Asimismo el poder de policía protege y defiende a los individuos, pero también les impone restricciones. Por otro lado en ejercicio de este poder de policía, el Estado reglamenta y controla la prestación de los servicios públicos, reglamenta el derecho de reunión pública para garantizar el orden, controla la difusión por la prensa de actos delictivos a posterior de su emisión (antes sería censura previa), ejerce la policía de seguridad en casos de alteración del orden o comisión de delitos, reglamenta la venta de bebidas alcohólicas a menores, ejerce la policía de higiene, controlando por ejemplo la sanidad escolar, comercial e industrial, prohíbe la venta de productos alterados, etcétera.

³⁰ Op. cit.

como la armonía de sus súbditos, contaba con la participación plena y activa de los Tucuyricus (que todo lo ven y todo lo oyen), que tenían a cargo la supervigilancia del orden público y el cumplimiento de las leyes del Inca. Asimismo producida la conquista del imperio incaico, e iniciada la administración de territorios americanos por los españoles, fueron los cabildos quienes sintetizaron las funciones de los poderes públicos modernos, éstos fueron el centro de todas las actividades sociales y el motor de todos los iniciales esfuerzos en la actividad creadora de un orden nuevo. Sus múltiples y variadas atribuciones y facultades que abarcaban desde el gobierno de la ciudad y sus distritos, hasta la administración de justicia y organización de los cuerpos militares en el territorio de su jurisdicción, hicieron de los cabildos la fuente y el centro del movimiento político y administrativo de aquel entonces. La función policial aparece como una actividad comunal.³¹ Según refiere Humberto Ugolotti, "Las ordenanzas de policía emanaban de los cabildos: son ellos los que nombran e invisten de autoridad a los funcionarios que con el nombre de alguaciles fueron los encargados de vigilar el orden público, velar por la prevención de los delitos y aprehensión de los delincuentes en ciudades y campos"³². Sin embargo la mayor autoridad de estas organizaciones la tenían los virreyes ya que conforme se fueron sucediendo los gobiernos se les establecieron términos como "veedores" (versión española de los Tucuyricus), "guardia de alabarderos"; quienes en diferentes turnos cumplían la misión encomendada por las autoridades locales y que igualmente no se realizaban de manera eficiente porque en la ciudad capital muchos criollos no aceptaban responsabilidades por diversos motivos como el pago de sus haberes, que en un determinado momento se tuvo que recurrir a los ingresos de la lotería pública que se realizaba en aquellos años³³. John Fisher (2009) lo describe de la siguiente manera:

"La élite criolla estaba ansiosa por acertar privilegios y puestos de honor, pero menos dispuesta a asumir responsabilidades, sin embargo Escobedo preservó y bajo su constante presión se logró una mejora considerable. Después de recibir la aprobación real para el establecimiento de los alcaldes de barrio, procedió a preparar un nuevo reglamento para la policía de Lima, estableciendo alguaciles pagados con los ingresos de la lotería pública, para ayudar a los alcaldes. Más aún en un intento radical de dar una dirección central decidió nombrar a uno de

³¹ *Historia de la policía peruana en el siglo XX*. Recuperado el 23 de mayo del 2017 a horas 17:00 de <http://www.monografias.com/trabajos84/historia-policia-peruana-siglo-xx/historia-policia-peruana-siglo-xx.shtml>

³² Ugolotti Dansay, Humberto. (1963). *La cultura como causa determinante de la independencia de América 5 ensayos históricos. Historia de la policía en el Perú. Del Incario a la república*. Talleres del Departamento de Prensa y Publicaciones de la Guardia Civil. Lima P. 117-118.

³³ Fischer, Jhon. (1981). *Gobierno y sociedad en el Perú colonial*. Pontifica Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima. P. 204.

los más distinguidos alcaldes de barrio José María Egaña, al nuevo cargo de teniente de policía con los honores de un regidor y un salario de 3 000 pesos al año”.

Posteriormente en los gobiernos de Don Gabriel de Avilés 1801-1806, se estableció un servicio de celadores nocturnos a serenos, efectuándose el primer ensayo en el barrio de Montserrat. Finalmente y en el periodo de Don José Fernando Alonso de Abascal 1806 - 1816, correspondió el aumento y el cuerpo de serenos generalizando su servicio a toda la ciudad y dictando un nuevo reglamento.³⁴

Estos antecedentes por cierto no son los más antiguos pues los egipcios y los hebreos fueron los primeros pueblos que incluyeron medidas policiales en sus legislaciones; la terminología "polis", es de donde deriva la palabra "policía", surge así en la antigua Grecia, con el significado de ciudad, administración, gobierno. Mientras tanto, solamente en Roma, en el tiempo del Emperador Augusto (63 A.C. a 14 D.C.), fue que adquirió realmente forma de organización; en Roma, había un jefe de policía denominado "Edil", que usaba indumentaria de magistrado, poseía amplia soberanía para decidir sus actos. Desde esa época en adelante, se siguieron periodos oscuros, como el de las invasiones bárbaras, hasta surgir el sistema anglosajón de la organización policial, en Inglaterra.³⁵

El concepto de policía, en épocas pasadas representaba una fuerza en la que se fundaban el poder y la estabilidad de los gobiernos. Actualmente es considerada como una función administrativa de los mismos; algunos tratadistas coinciden en que la función de policía tiene como objeto principal proteger el orden y el bienestar social contra todo acto que atente quebrantarlo, en lo individual como en lo colectivo y sometida a las órdenes de las autoridades policiacas.³⁶

La función de policía es la potestad jurídica que tiene el Estado para afirmar el derecho individual y colectivo velando por el orden, la moral, la seguridad pública y en general, por respecto al Ordenamiento Jurídico. El ámbito constitucional establece dicha afirmación. El poder Estatal manifiesta, en una serie de medidas preventivas y persecutorias, encaminadas a conservar y garantizar la libertad, el orden, la moral, la seguridad de las personas y en general,

³⁴ *Historia de la policía peruana en el siglo XX*. Recuperado el 23 de mayo del 2017 a horas 17:00 de <http://www.monografias.com/trabajos84/historia-policia-peruana-siglo-xx/historia-policia-peruana-siglo-xx.shtml>

³⁵ García Ortiz, Enrique Carmelo. *Historia de la Policía*. Recuperado el 22 de mayo del 2017 a horas 22:21 de <http://www.ipesad.edu.mx/repositorio1/BG-B23-2.pdf> San Luis Potosí, S.L.P., México 2009.

³⁶ Op. cit.

advirtiéndole que dichas medidas sufren cambios constantes de acuerdo con las necesidades del momento.³⁷

La Policía Nacional francesa, es el primer cuerpo legalmente constituido y la creación de este cuerpo de estado deriva de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que forma parte de la Constitución francesa:

«Artículo 12: La garantía de los derechos humanos y del ciudadano requiere una fuerza pública: esta fuerza se instituye pues para la ventaja de todos, y no para la utilidad particular de aquellos a los que se confía.

«Artículo 13: Para el mantenimiento de la fuerza pública, y para los gastos de administración, es indispensable una contribución común: también se debe distribuir entre todos los ciudadanos, debido a sus facultades.»³⁸

La noción de policía es antigua, aunque la palabra no lo es; por ello aquí nos referimos a la noción de “policía” (es decir, la parte de la potestad estatal posteriormente denominada “policía”) y no a la palabra en sí, que es de uso moderno. Ésta deriva del idioma francés y su uso data del siglo XVIII. De una manera indirecta deriva del latín *politiā*, y ésta del griego *polis*, “ciudad”, que significa ciudad, o ciudad-estado. De ahí derivó “*politeia*”, palabra que define lo relativo a la constitución de la ciudad, el ordenamiento jurídico del Estado, conducta arreglada de los ciudadanos, gobierno, calidades cívicas del individuo.³⁹

En los inicios del período helenístico, la policía fue el equivalente del gobierno del Estado, cualquiera fuera su régimen y se identificaba con el Estado. En la Edad Media, la noción de policía fue definida como “el buen orden de la sociedad civil presidida por la autoridad estatal, quedando el buen orden moral y religioso a cargo de la autoridad eclesiástica”. Después, durante el siglo XIV, apareció la palabra “pólice” con la que se designó el orden de los negocios públicos en las doctrinas jurídicas de Francia. Así, llegado el Renacimiento, el término “policía” pasó a entenderse como “el buen orden en la cosa común”.⁴⁰

Partiendo de esta idea, policía y gobierno de Estado eran conceptos idénticos. El Estado podía utilizar la coerción para buscar el bien común, bajo el total arbitrio del soberano, todo ello sin limitaciones jurídicas, por lo que esta forma de entender el derecho de policía llevó al absolutismo. Este concepto se transformó a mediados del siglo XVII: el monarca mantenía bajo

³⁷ Op. cit.

³⁸ Op. cit.

³⁹ Recuperado el 23 de mayo del 2017 a horas 17:20, con algunas modificaciones con fines académicos de https://es.wikipedia.org/wiki/Polici%C3%ADa#Evoluci.C3.B3n_hist.C3.B3rica_de_la_noci.C3.B3n_de_polic.C3.ADa

⁴⁰ Op. cit.

su control lo relativo a la policía propiamente dicha, mientras que las funciones del Estado fueron divididas. Así, dentro del ámbito del derecho, la justicia pasó a ser una función especial.⁴¹ La crisis de la noción de Estado en el siglo XVIII fortaleció la libertad individual, apareciendo la doctrina de los derechos humanos. A partir de entonces, al considerarse que dichos derechos son superiores al Estado, la noción de policía se limita a mantener la seguridad y el orden público, así como a la garantizar la protección del orden jurídico.⁴²

En España donde encuentra sus antecedentes nuestro cuerpo policial más antiguo que es la Guardia Civil, sin dejar de lado que en 1845, Ramón Castilla, durante su primer gobierno, dispuso de una nueva organización de la Guardia Nacional, distribuyéndola en todos los departamentos, dictó nuevas normas y una reglamentación encaminada a delimitar funciones de las autoridades Políticas y de la Inspección General de la expresada fuerza; y en 1851, José Rufino Echenique reorganizó las Fuerzas de Policía en un solo cuerpo y creó la Gendarmería Nacional del Perú; como decíamos en España, en su época moderna, la primera institución armada con competencias en materia de seguridad pública fue la Santa Hermandad, instituida por Isabel la Católica en las Cortes de Madrigal de 1476, ésta es considerada como una antecesora de las actuales Fuerzas de seguridad, sin embargo, solo tuvo jurisdicción sobre los territorios que componían la Corona de Castilla, siendo que en los siguientes siglos en otros territorios de la Monarquía Hispánica actuaron varias milicias armadas de carácter rural: los «Migueletes», «Somatenes» o las «Escuadras de Paisanos Armados» en Cataluña, los «Guardas del Reino» en Aragón, o los «Miñones» y el «Centenar de la Ploma» en el Reino de Valencia. En otros territorios también se formaron milicias de carácter más local o provincial, como los «Escopeteros voluntarios de Andalucía», las «Compañías de Milicia Honrada» en Galicia, o la «Compañía suelta de Castilla la Nueva». En Álava también actuó una milicia denominada «Miñones».⁴³

No obstante, todas estas unidades armadas tuvieron un carácter más rural que urbano y su composición varió mucho con el tiempo. El 8 de enero de 1824, durante el reinado de Fernando VII, por una real cédula se creó la Policía General de Vigilancia y Seguridad Pública del Reino, con una Superintendencia general de Policía situada en Madrid. En un primer momento quedó configurado como un organismo de seguridad de carácter urbano, dependiente del Ministerio de Justicia y Gracia. Su ámbito de actuación se extendía todo el territorio nacional y por ello se

⁴¹ Op. cit.

⁴² Op. cit.

⁴³ Recuperado el 23 de mayo del 2017 a horas 17:35, con algunas modificaciones con fines académicos de https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_policía_en_España

crearon 126 subdelegaciones en las capitales de provincia y las localidades más importantes. Entre las primeras funciones que le fueron encomendadas se encontraban el velar por la seguridad en las ciudades o la prevención y persecución del delito; también desempeñaba labores de información, vigilancia y control tanto de pasaportes como de viajeros en Madrid.⁴⁴

Tras la muerte de Fernando VII, un real decreto con fecha de 28 de septiembre de 1833 reorganizó la policía y estableció una Fuerza armada de policía urbana. Fue, sin embargo, una instrucción gubernamental de Javier de Burgos —firmada el 30 de noviembre de 1833— la que sentó las bases de lo que iba a ser la policía en la España del siglo XIX. En ella se establecía que las funciones de la policía serían "la vigilancia y seguridad de las personas y bienes, sujetando su acción al respecto a la propiedad y con diferencias, atenciones y obsequios hacia las personas con quien tenga que tratar, desterrando los abusos, y asentando su acción en los preceptos legales". La misma directiva establecía que la policía dependiera del Ministerio de Fomento (posteriormente renombrado como Ministerio de la Gobernación), y en las provincias, de los «jefes políticos» o gobernadores civiles. Esta iniciativa coincidió en el tiempo con otros importantes cambios realizados en la organización administrativa del Estado.⁴⁵

Sin embargo, durante los siguientes años las primeras fuerzas de policía sufrieron numerosas transformaciones orgánicas. Un Real decreto de 1840 disolvió la «Fuerza armada de policía» (uniformada) por motivos económicos, aunque en 1844 se creó el «Cuerpo de Protección y Seguridad». Esta fuerza dependía directamente del Ministerio de la Gobernación, y en las provincias lo hacía de los gobernadores civiles. Poco después se instituyó dentro del cuerpo a los que serían los integrantes del mismo: comisarios, "celadores" de Seguridad pública y los agentes [uniformados]. Los comisarios serían los jefes de policía en las capitales de provincia, los "celadores" estarían a cargo de la vigilancia y las labores de policía urbana, mientras que los agentes ejercían como una fuerza de seguridad. Posteriormente se instituyó la figura del inspector, que quedaría a cargo de la seguridad en los distritos urbanos. El cuerpo, sin embargo, no disponía de una fuerza armada propia.⁴⁶

A partir de 1852 las funciones del cuerpo se ampliaron a todo el país. También en ese año el Cuerpo de Protección y Seguridad establece una división básica en su organización: aquellos policías que fueran de paisano constituirían el «Cuerpo de Vigilancia» mientras que los policías uniformados constituirían el «Cuerpo de Seguridad». El Cuerpo de Vigilancia quedó a cargo de

⁴⁴ Op. cit.

⁴⁵ Op. cit.

⁴⁶ Op. cit.

las labores de información, investigación de los delitos, la expedición de documentos de identidad, control sobre el movimiento de personas e inspección de los locales de espectáculo. Por su parte, los policías uniformados del Cuerpo de Seguridad quedaron a cargo de las labores de vigilancia y prevención de delitos, así como la represión de los tumultos callejeros. Estos cuerpos policiales actuarían bajo la jurisdicción del Ministerio de la Gobernación.⁴⁷

Sin embargo, durante los siguientes años la Policía española sufrió diferentes reorganizaciones, como ocurrió en los años 1858, 1863 y 1868. Desde la década de 1850 la policía comenzó a desplegar su actividad en el ámbito urbano. A partir de 1870, durante el Sexenio Revolucionario la sección de la policía encargada de la seguridad pública fue uniformizada y militarizada — pasó a denominarse Cuerpo de Orden Público—, de acuerdo con la Ley de Orden Público de 1870. Otro cambio importante fue que desde 1863 funcionaron en el seno de la policía los Facultativos forenses, especialistas de la medicina legal y forense que constituyeron una primitiva policía científica.⁴⁸

El Real decreto del 18 de octubre de 1887 aprobó el reglamento de los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia, lo que constituyó un hecho importante porque supuso dotar de una estructura orgánica clara a estos dos cuerpos que venían funcionando desde antiguo. Algo parecido ocurría ya con la Policía gubernativa en Madrid, que en se había reformado internamente y había adoptado este modelo de división orgánica en dos cuerpos (Seguridad y Vigilancia), amén de otros cambios. Así, de acuerdo a la estructura orgánica adoptada, estos cuerpos a nivel provincial estaban bajo las órdenes de los Comisarios jefes o de los Jefes de Seguridad, que a su vez dependían de los gobernadores civiles —la máxima autoridad de la administración estatal en cada provincia—. El Cuerpo de Vigilancia tenía carácter civil y sus miembros vestían de paisano, mientras que el Cuerpo de Seguridad tenía una estructura orgánica militarizada — aunque no era una unidad militar— y sus miembros vestían uniforme; esto supuso que el Cuerpo de Seguridad dependiera del Ministerio de la gobernación en cuanto a sus funciones policiales, aunque dependiera también del Ministerio de la Guerra en lo referente a la estructura orgánica, a los mandos y oficiales, etc. Este iba a ser el modelo que iba a imperar en la policía española durante las siguientes décadas.⁴⁹

En las colonias españolas también existieron cuerpos policiales. Por ejemplo, en Cuba existió el «Cuerpo Militar de Orden Público», que operó en la isla desde 1875 hasta 1898; estaba

⁴⁷ Op. cit.

⁴⁸ Op. cit.

⁴⁹ Op. cit.

constituido por miembros del Ejército y sus funciones eran la vigilancia y seguridad en las ciudades de la isla —primero en La Habana y posteriormente también en otras urbes—. En Puerto Rico existió un «Cuerpo de Policía y Seguridad Municipal y Orden Público», que empezó a operar a partir de 1878 y el cual tuvo un carácter militar.⁵⁰

En la década de 1890 hubo una campaña de atentados de signo anarquista, de entre los cuales destacaron el Atentado contra el general Martínez Campos (1893), la Bomba del Liceo (1893), o el Atentado de la Procesión del Corpus (1896). Este último provocó numerosas redadas policiales contra grupos anarquistas, y una investigación policial que no estuvo exenta de críticas por el uso de la tortura en los interrogatorios. Además, el 2 de septiembre de 1896 el gobierno liderado por Antonio Cánovas promulgó una nueva ley antiterrorista que agravaba los efectos de la anterior norma aprobada en 1894 y amplificaba la persecución contra el anarquismo. La respuesta, sin embargo, fue un falso espejismo. El gobierno creyó erróneamente que mediante estas medidas, así como la clausura de los centros de reunión anarquistas, lograría aplacar el peligro de nuevos atentados. Por el contrario, no dedicó esfuerzos realistas a la creación de una fuerza policial capaz de enfrentarse con la nueva amenaza que suponía el terrorismo. Esto quedó en evidencia cuando un año más tarde el presidente Cánovas fue fácilmente asesinado por el anarquista italiano Michele Angiolillo.⁵¹

El asesinato del presidente José Canalejas en 1912 supuso un revulsivo. El gobierno tomó conciencia de la situación real, lo que le llevó a una profunda reorganización de la policía y las fuerzas de seguridad. Esto incluyó la creación de la nueva Dirección General de Seguridad —cuyo primer director fue Ramón Méndez Alanís— y la creación de unidades específicas para combatir el terrorismo anarquista: la «Brigada de Informaciones» y la «Brigada de Anarquismo y Socialismo». Dentro del Cuerpo de Vigilancia los servicios policiales se reorganizaron con la creación de varias unidades operativas nuevas. Se creó una Brigada de Investigación Criminal, cuyos antecedentes estaban en las "rondas especiales" que operaban en Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia, y que dependían directamente de los gobernadores civiles. En algunos casos estos grupos se subdividían en "rondines" especializados en delitos determinados como homicidios, estafas, timos, etc. También se creó una Brigada de Viajeros y de Extranjeros, que tenía sus orígenes en las delegaciones policiales que operaban en las estaciones de ferrocarril desde el año 1876. En 1906 se aprobó otra importante medida como fue la constitución de una Academia Teórico-Práctica para la formación de Policías; esta tuvo su sede en Madrid —no

⁵⁰ Op. cit.

⁵¹ Op. cit.

sería inaugurada hasta 1908— aunque pronto se autorizó la apertura de otra sede en Barcelona.⁵²

En julio de 1936, tras el comienzo de la Guerra Civil Española, los efectivos de la Policía gubernativa quedaron divididos entre las fuerzas leales al gobierno y las fuerzas sublevadas. En la zona sublevada los militares asumieron las competencias de orden público, por lo que la policía tuvo un papel menos relevante; ello no significó que no siguieran ejerciendo sus funciones de preguerra. Efectivos del Cuerpo de Investigación y Vigilancia se manifestaron mayoritariamente partidarios de la sublevación militar, mientras que los efectivos del Cuerpo de Seguridad y Asalto se alinearon en mayor medida con el Gobierno republicano. Durante la contienda los cuerpos policiales en la zona sublevada sufrieron pocos cambios orgánicos. Con el primer gobierno de Franco en 1938 se creó el Ministerio de Orden Público, que quedó a cargo de los servicios de seguridad y la Guardia Civil, y se creó el Servicio Nacional de Seguridad. El Ministerio de Orden Público tuvo una corta vida, ya que a finales de año pasaría a integrarse en el Ministerio de la Gobernación, y en 1939, tras el final de la contienda, el Servicio Nacional de Seguridad se reconvirtió en la Dirección General de Seguridad. En la zona republicana la organización policial se vio gravemente alterada con la situación revolucionaria que se vivía en aquella zona, dado que las estructuras del Estado habían colapsado tras la sublevación militar. Posteriormente los servicios policiales se reorganizaron en la zona republicana: avanzada la contienda, dentro el Cuerpo de Investigación y Vigilancia coexistía un importante número de militantes comunistas, aunque en modo alguno constituían una mayoría. La influencia de los comunistas sí era más significativa entre los mandos policiales en Madrid. La situación bélica implicó un aumento de los efectivos policiales con que contaba la República. El historiador Hugh Thomas⁵³ estimó que en 1937 sólo en la zona republicana había 4.000 efectivos de policía más que en toda España antes del comienzo de la guerra. El director general de Seguridad Carlos de Juan intentó en la medida de lo posible reducir el número de policías republicanos y desvincularlos de las fuerzas políticas.⁵⁴

El 26 de diciembre se constituyó en la zona republicana un «Cuerpo de Seguridad» que unificaba en una sola organización a los antiguos cuerpos de Vigilancia y de Seguridad, aunque con dos ramas: la civil o de «paisano» y la militarizada o «uniformada». Algo parecido ocurrió con la Guardia Civil, que desde agosto de 1936 fue disuelta y reconvertida en Guardia Nacional

⁵² Op. cit.

⁵³ Historiador e hispanista británico, con Raymond Carr y Paul Preston formó un grupo de hispanistas británicos dedicado al estudio de la historia reciente de España.

⁵⁴ Op. cit.

Republicana. La vida operativa de estos cuerpos, sin embargo, sería breve, ya que desaparecieron al final de la contienda.⁵⁵

En el territorio republicano controlado por el Gobierno Provisional del País Vasco las fuerzas de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto fueron disueltas. En su lugar se creó la denominada Ertzaña o «Policía Militar de Euzkadi», que estaba compuesta por nacionalistas vascos y con el requerimiento de que sus miembros tuvieran una altura superior a 1,80 metros. La Ertzaña desapareció tras la campaña de Vizcaya en 1937. Algo parecido ocurrió con los Mozos de Escuadra tras la Campaña de Cataluña en 1939.⁵⁶

Tras el final de la contienda y la instauración del régimen franquista, los organismos estatales de seguridad fueron reorganizados. La ley del 23 de septiembre de 1939 reorganizó la estructura de la Dirección General de Seguridad y se creó un nuevo cuerpo de seguridad, la Policía Armada, bajo la dirección del general Antonio Sagardía. Por la misma ley las competencias de los Vigilantes de Caminos pasan a la Policía Armada —que posteriormente sería renombrada como Cuerpo de Policía Armada y de Tráfico—, por lo que desaparece el Cuerpo de Vigilantes de Caminos. El 8 de marzo de 1941 se aprobó la «Ley de Reorganización de los Servicios de Policía», mediante la cual fueron reorganizadas las fuerzas policiales, como elemento de represión y mantenimiento del orden público. El Cuerpo de Seguridad y Asalto fue absorbido por la Policía Armada, mientras que el antiguo Cuerpo de Investigación y Vigilancia se reconvirtió en el nuevo Cuerpo General de Policía. Otra norma legal aprobada ese año, la «Ley para la Seguridad del Estado», vino a complementar la ley anterior e impregnó a los nuevos cuerpos policiales de la ideología fascista imperante en esa época.⁵⁷

La formación de los cuadros policiales se hizo entre los antiguos miembros de la policía que hubieran superado la depuración, y también a través de una nueva selección de candidatos que se hizo al final de la guerra: el perfil de los candidatos aceptados para ingresar iba desde los veteranos de guerra a los militantes del «movimiento».⁵⁸

Con la instauración del régimen franquista también desaparecieron cuerpos policiales de carácter regional, como la Ertzaña o los Mozos de Escuadra. No obstante, el régimen sí mantuvo a los «Miñones» de Álava y al Cuerpo de Policía de Carreteras de Navarra —territorios donde había triunfado la sublevación militar—. Progresivamente, el régimen toleró a pequeña escala la existencia de otros cuerpos. En 1945 autorizó la reimplantación del Somatén catalán,

⁵⁵ Op. cit.

⁵⁶ Op. cit.

⁵⁷ Op. cit.

⁵⁸ Op. cit.

extendiendo además su estructura a todo el país. En 1950 un decreto del Ministerio de la gobernación autorizó a la Diputación de Barcelona la organización de una sección de Mozos de Escuadra.⁵⁹

En tanto en nuestro país en 1855, Castilla, al iniciar su segundo gobierno procedió a reorganizar la Gendarmería, fusionando en ella los Cuerpos de Policía existentes, estableciendo estrictos requisitos de ingreso e incrementando sus efectivos. Manuel Pardo y Lavalle, asumió la presidencia el 2 de agosto de 1872, siendo una de sus primeras acciones reorganizar las Fuerzas Policiales, así fue como nació la Guardia Civil del Perú. La conformación de esta antigua policía duró hasta 1919, año en el que durante el Oncenio de Leguía se decidió reorganizarla mediante dos decretos supremos expedidos el 7 de agosto de 1919.⁶⁰

Leguía, a sugerencia del General del Ejército Gerardo Álvarez, dispuso, emulando a la Guardia Republicana de Francia, que el Batallón de Gendarmes de Infantería N° 1 se denominara Batallón de Gendarmes de Infantería Guardia Republicana del Perú N° 1, dándole como misión la seguridad del Palacio de Gobierno y del Congreso de la República. El 15 de septiembre de 1948, José Luis Bustamante y Rivero otorgó autonomía al Cuerpo de Investigación y Vigilancia y el 3 de junio de 1960 cambió su nombre por el de Policía de Investigaciones del Perú. Desde entonces en el país existieron tres cuerpos de seguridad: la Guardia Civil del Perú, la Policía de Investigaciones del Perú y la Guardia Republicana del Perú.⁶¹

Situación que se prolongó hasta que el presidente Alan García, durante su primer gobierno, inició el 14 de septiembre de 1985, al amparo de la ley 24294 aprobada por el Congreso de la República, un proceso de reorganización de las Fuerzas Policiales. El 4 de febrero de 1986, continuando con el proyecto emprendido, se expidieron los Decretos Legislativos Nros. 370, 371, 372 y 373 referentes a la Ley Orgánica del Ministerio del Interior, la Ley de Bases de las Fuerzas Policiales, Leyes Orgánicas de la Guardia Civil, de la Policía de Investigaciones y de la Guardia Republicana.⁶²

El decreto legislativo N° 371 Ley de Bases de las Fuerzas Policiales sentó los pilares para la creación definitiva de la Policía Nacional del Perú. La citada ley estableció un comando único (esto es la Dirección General de las Fuerzas Policiales) y la formación también de un solo centro de estudios para la preparación de los oficiales policías (denominado Escuela de

⁵⁹ Op. cit.

⁶⁰ Recuperado el 23 de mayo del 2017 a horas 17:43, con algunas modificaciones con fines académicos de https://es.wikipedia.org/wiki/Policía_Nacional_del_Perú

⁶¹ Op. cit.

⁶² Op. cit.

Oficiales de las Fuerzas Policiales con sede en el antiguo Centro de Instrucción de la Guardia Civil Mariano Santos del distrito de Chorrillos) y de una escuela nacional para los guardias y agentes (denominada Escuela Nacional de Policía con sede en el antiguo Centro de Instrucción de la Guardia Republicana del distrito de Puente Piedra).⁶³

El 7 de diciembre de 1988 fue publicada la ley 24949 del 6 de noviembre de 1988 que modificando los artículos pertinentes de la Constitución de 1979 creó definitivamente la Policía Nacional, dicha ley fue dada y promulgada el 25 de noviembre de 1988. Los objetivos que se buscaron fueron, entre otros, integrar las tres Fuerzas Policiales, hacer un mejor uso de los recursos económicos, desaparecer los conflictos que existían entre ellas originados por dualidad de funciones y, sobre todo, ofrecer un mejor servicio a la sociedad. Con motivo de la unificación de las Fuerzas Policiales la Guardia Civil, la Policía de Investigaciones y la Guardia Republicana pasaron a denominarse Policía General, Policía Técnica y Policía de Seguridad hasta 1991.⁶⁴

Luego de la creación de la Policía Nacional, se designó a Santa Rosa de Lima, por decreto supremo N° 0027-89-IN, publicado el 18 de septiembre de 1989, como su Patrona. En 1995 Santa Rosa de Lima fue condecorada con la Orden al Mérito de la Policía Nacional en el grado de Gran Cruz otorgándosele además la Banda Honorífica de Generala de la Policía Nacional del Perú, en su condición de Patrona del Instituto. En el Calendario Anual de Festividades Institucionales de la Policía Nacional, se designó al 30 de agosto de cada año como el Día de Santa Rosa de Lima y de la Virtud Policial, conforme a lo establecido en el decreto supremo N° 0027-89 y la resolución directoral N° 3550-92 del 6 de agosto de 1992.⁶⁵

Lo cierto es que como país latinoamericano, hemos heredado de España y Portugal estructuras judiciales y policiales de tradición romano-germánica, que se caracteriza por ser centralizado, militarista y cercano al gobierno, con una división en la estructura de rangos, que ofrece distintas oportunidades de reclutamiento, entrenamiento y promoción a oficiales de alto y bajo rango (oficiales, suboficiales y agentes). Asimismo en la policía peruana está prohibida la sindicalización pues apenas se ganó el derecho a votar en el año 2003. Hasta hace muy poco los procesos legales eran por lo general escritos y formales, a pesar de que se habían iniciado reformas judiciales en diferentes países de la región que apuntaban a modelos

⁶³ Op. cit.

⁶⁴ Op. cit.

⁶⁵ Op. cit.

semicontenciosos con mayor uso de juicios orales. Por lo que tanto la reforma policial como la judicial habían avanzado poco en Perú.⁶⁶

En otros términos la Policía Nacional del Perú (PNP) fue creada en el año 1988 a través de la integración de tres fuerzas ya existentes: la Guardia Republicana (la más militarizada de las tres); la Guardia Civil (que también contaba con una estructura jerárquica militar); y la Policía de Investigación (claramente la más civil). Sin embargo, en el proceso de unificación prevalecieron las tradiciones más militaristas. La policía peruana cuenta con una historia sombría. Entre 1968 y 1980, la institución sufrió un intenso proceso de militarización durante los gobiernos militares de este periodo.⁶⁷

Todo ello dado que en los años ochenta y noventa la policía debió enfrentar al brutal movimiento guerrillero maoísta Sendero Luminoso y a otra guerrilla más pequeña, el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru). Durante más de una década, la policía actuó bajo órdenes directas del ejército, en zonas de emergencia que cubrían casi la mitad del territorio peruano.⁶⁸

Surgió entonces que tanto la policía como las fuerzas armadas fueran responsables de atroces y sistemáticas violaciones de derechos humanos (Comisión de la Verdad y Reconciliación 2003), aunque algunos de sus miembros también fueron víctimas de la violencia terrorista, por lo que se mantienen concepciones profundamente moldeadas por la experiencia antiterrorista, que incluyen una tendencia a asociar derechos humanos con comunismo y movimientos guerrilleros.⁶⁹

En 1990, bajo el primer gobierno de Alberto Fujimori, se utilizaron las fuerzas de inteligencia para controlar las fuerzas armadas, el Ministerio del Interior y la policía y se convirtieron a estas instituciones en los pilares de un gobierno autoritario, manejado a través del chantaje y la corrupción sistemática. Hasta que en el año 2000 colapsara su gobierno y el mandatario se vio obligado a exiliarse del país, luego de que salieran a la luz una serie de videos que mostraban los sobornos sistemáticos ofrecidos a la elite política y comercial de Perú durante su período presidencial, sucediéndolo un gobierno provisional, presidido por Valentín Paniagua, pues ocho meses más tarde, el 28 de julio de 2001, Alejandro Toledo asumió la presidencia del país.⁷⁰

⁶⁶ Costa, Gino y Neild, Rachel. *La reforma policial en el Perú*. Artículo publicado originalmente en inglés en la revista *Australian & New Zealand Journal of Criminology*, Volumen 38, N° 2, agosto de 2005. Recuperado el 03 de julio del 2017 a horas 19:02 de <http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/112-126/976> .

⁶⁷ Op. cit. p. 115, con algunas modificaciones con fines académicos.

⁶⁸ Op. cit. p. 115, con algunas modificaciones con fines académicos.

⁶⁹ Op. cit. p. 115, con algunas modificaciones con fines académicos.

⁷⁰ Op. cit. p. 115, con algunas modificaciones con fines académicos.

En su discurso de posesión, Toledo anunció reformas en el sector militar y policial, a pesar de no haber planteado, él ni su partido Perú Posible, propuestas concretas para las reformas, ni existiera un debate significativo sobre el tema en las elecciones de los años 2000 y 2001, o en campañas anteriores. Quedando como único antecedente para una reforma, un documento desarrollado por un pequeño grupo de oficiales de la policía durante el gobierno de Paniagua, presentado en julio del año 2001 con el título de “Fundamentos de la Reforma Policial”. Ello y la naturaleza de la transición en Perú debido al colapso repentino del gobierno no permitió una negociación o llegar a acuerdo alguno en el diseño de las reformas institucionales. Lo que contrastaba diametralmente con otros contextos, como los Acuerdos de Paz de El Salvador o, en otras regiones, la reforma constitucional de Sudáfrica, así como su Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Carta Blanca en Seguridad Pública, lo cual limitó la apropiación del proceso por parte del gobierno peruano.⁷¹

Siendo ésta la situación en que un equipo de reformadores llegó al Ministerio del Interior en julio del año 2001, compuesto por actores civiles y defensores de los derechos humanos, ello debido a que las autoridades de esta cartera del gobierno de Fujimori estuvieron profundamente implicadas en actividades ilegales y, por lo tanto, se encontraban completamente desacreditadas. Encabezaba el equipo el nuevo Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, prominente periodista especializado en relaciones cívico-militares y en temas de inteligencia, el viceministro, luego ministro Gino Costa, que había liderado la unidad de las Naciones Unidas encargada de implementar la reforma policial en El Salvador y trabajó posteriormente en la Defensoría del Pueblo del Perú, un asesor clave, después viceministro, Carlos Basombrio, ex director de una de las organizaciones de derechos humanos más importantes del Perú, el Instituto de Defensa Legal (IDL).⁷²

También fue del equipo Susana Villarán, ex-Ministra de la Mujer del gobierno de Paniagua, líder de una coalición de ONG defensoras de los derechos humanos y activista en un partido pequeño de oposición. Ellos con más de 20 asesores y directivos civiles adicionales conformaron el equipo que emprendió la reforma del segundo ministerio más grande de Perú (después del Ministerio de Educación), con un personal de 93.000 oficiales juramentados y 5 600 civiles, acostumbrado a llevar a cabo sus actividades prácticamente sin ningún tipo de supervisión o control civil, lo que se vio profundamente amenazado por el proceso de reforma.⁷³

⁷¹ Op. cit. p. 116, con algunas modificaciones con fines académicos.

⁷² Op. cit. p. 116, con algunas modificaciones con fines académicos.

⁷³ Op. cit.

Dado que el equipo no mantenía ningún lazo político con el partido de gobierno, por presentar un perfil general de tecnócratas y activistas de los derechos humanos, pese a su dinamismo en el gabinete, adoptaron una política de “participación mínima” en el partido oficialista y en el congreso, ello tratando de resguardar el avance de la reforma, de evitar el micro manejo político y vincular la cara pública de la reforma directamente con el equipo de reformadores. En consecuencia el apoyo público que recibió el proceso no se tradujo en beneficios para el partido del presidente, pues más bien hacía sobresalir la incompetencia de los demás ministerios que estaban siendo manejados por representantes de Perú Posible. De allí que la estrategia no permitió construir un apoyo político y gubernamental más amplio, minándose la posibilidad de contar con los recursos financieros necesarios para dar sostenimiento a la reforma, lo que sumado a que en los años 2003 y 2004, los préstamos externos pedidos para el sector de la seguridad fueron asignados exclusivamente al Ministerio de Defensa, impidió avanzar rápidamente en los aspectos de la reforma que exigían más recursos (aunque se lograron producir algunos ahorros al optimizar el manejo interno de los recursos: 8 millones USD en 2002) no se logró contar con incentivos presupuestarios para aumentar la cooperación de la policía.⁷⁴

La reforma también carecía de apoyo internacional, tanto político como financiero⁷⁵. No obstante, el equipo del ministerio mantenía contacto e intercambios constantes con expertos regionales en el tema. En un seminario internacional realizado en noviembre del año 2001 se presentaron datos comparados de experiencias de reforma policial ante 250 oficiales de alto rango de la policía peruana y muchas de sus objeciones al proceso de reforma fueron reveladas en la hostilidad de los comentarios que hicieron durante las discusiones^{76,77}. Es así que mientras

⁷⁴ Op. cit.

⁷⁵ Otras fuentes de financiamiento provinieron del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, que apoyó la Unidad de Asuntos Internos; y del gobierno británico, que financió la labor de la Defensoría del Policía. El Ministerio también inició las negociaciones para un préstamo de 20 millones USD del Banco Interamericano de Desarrollo, pero el proceso de preparación fue lento y se postergó aún más por cambios en el ministerio. A inicios del año 2005 el préstamo aún estaba en la fase preparativa. Los gobiernos de Canadá, Alemania y el Reino Unido también apoyaron el trabajo de la Comisión de Reestructuración.

⁷⁶ La conferencia fue organizada por el Ministerio del Interior de Perú, el Woodrow Wilson Center (Washington DC) y el Centro de Estudios para el Desarrollo (Santiago, Chile). Entre los participantes se incluyeron académicos como Joseph Tulchin, Hugo Frühling y Claudio Beato, y el ex director de la Policía Nacional de Colombia, el general retirado José Rosso Serrano, quien lideró el exitoso proceso de modernización de la policía colombiana entre 1994 y 2000. La experiencia colombiana fue particularmente útil, pues sirvió para demostrar al equipo del ministerio que los cambios institucionales que buscaban no eran poco realistas, siempre y cuando contaran con un fuerte liderazgo y voluntad política para combatir la corrupción y mejorar el manejo de los recursos.

⁷⁷ Op. cit. p. 117, con algunas modificaciones con fines académicos.

el equipo de Rospigliosi se embarcaba en el proceso de reforma, parte de los esfuerzos iban dirigidos a obtener un mejor entendimiento de esta opaca institución.⁷⁸

El documento “Bases para la Reforma Policial” contenía propuestas sólidas, pero no lograba articularlas a un análisis del problema. El equipo buscó producir un diagnóstico a través de un proceso participativo en el que se tomarían en cuenta diversos puntos de vista, lo cual les permitiría conocer mejor la institución policial. Los oficiales superiores de la policía no estuvieron de acuerdo con esta estrategia, pues creían que los problemas y las soluciones eran obvios; se requería principalmente de mayor financiamiento y un marco constitucional y legal más sólido para el desempeño de las actividades policiales. La posición civil predominó. Rospigliosi creó la Comisión de Restructuración para definir objetivos, cronogramas e indicadores del proceso de reforma. La comisión incluía a oficiales de la policía de todos los rangos y civiles de dentro y fuera del ministerio. La inclusión de oficiales de bajo rango probó ser uno de los aspectos más productivos en el proceso, pues proveyeron información sobre las prácticas corruptas de sus superiores, propusieron medidas concretas y finalmente se convirtieron en los más importantes portavoces de la reforma al interior de la institución.⁷⁹

La comisión dividió el trabajo en nueve grupos de trabajo que abordaron diferentes temas: doctrina policial; marco regulatorio; sistemas internos y externos de control; manejo de personal; administración de recursos materiales y logísticos; bienestar y salud del personal policial; organización y estructura; educación; y mujeres policías. Cada grupo desarrolló amplias consultas con miembros de la policía, expertos externos, autoridades civiles y el público en general.⁸⁰

La consulta pública se realizó a través de una serie de visitas a poblaciones de todo Perú (lo cual permitió a su vez consultar a oficiales locales que generalmente están muy aislados y mal informados de las actividades que se desarrollan a nivel nacional), a través de una línea telefónica de atención gratuita y con la ayuda del Colegio de Abogados. Finalmente, se realizó una encuesta entre la ciudadanía y la policía. Cinco meses después, el 22 de febrero de 2002, la comisión presentó ante el presidente Toledo el Informe de la Comisión Especial para la Restructuración de la Policía Nacional del Perú, en el que se hizo un análisis de los problemas que enfrentaba la institución policial y una lista de objetivos prioritarios para los próximos dos años, vistos como los primeros pasos en un proceso de cambio institucional de largo plazo.⁸¹

⁷⁸ Op. cit. p. 117, con algunas modificaciones con fines académicos.

⁷⁹ Op. cit. p. 117, con algunas modificaciones con fines académicos.

⁸⁰ Op. cit. p. 117, con algunas modificaciones con fines académicos.

⁸¹ Op. cit. p. 118, con algunas modificaciones con fines académicos.

El seguimiento del proceso fue asignado a la Comisión de Modernización, encargada de supervisar la implementación de las reformas recomendadas. Esta comisión se organizó alrededor de las mismas subcomisiones temáticas anteriores y trabajó nuevamente con representantes de la policía de todos los rangos y actores civiles. Por un tiempo jugó un papel vital en facilitar los cambios, sin embargo, en la implementación de las reformas, muchas de las decisiones cruciales tuvieron que tomarse en el nivel ministerial, por lo que la comisión comenzó a perder importancia. Esta tendencia se profundizó al mismo tiempo que las subcomisiones entraron en terreno difícil, cuando las manifestaciones de oposición por parte de la policía empantanaron el proceso de toma de decisión.⁸²

El modelo policial propuesto por la Comisión de Reestructuración se concentró en los siguientes elementos:

- Un mandato policial que permitiera ir más allá de las actividades de cumplimiento de la ley con fines disuasivos y abarcara la solución de problemas y el compromiso comunitario.
- Descentralización y devolución de responsabilidades y mayor rendición de cuentas ante la comunidad.
- Incremento de la eficiencia y transparencia administrativa.⁸³

Esta última prioridad estratégica tuvo un rol preponderante en la agenda. A través del proceso de diagnóstico, el equipo reveló situaciones de corrupción institucionalizada y estructural que generaban condiciones de trabajo adversas y minaban profundamente el profesionalismo policial y la confianza ciudadana en la institución. Para poder implementar nuevas estrategias operacionales, las deficiencias estructurales debían ser atendidas, en parte, a través de medidas anticorrupción.⁸⁴

Al mismo tiempo, el equipo de reformadores esperaba generar ahorros significativos a través de estos esfuerzos y, consecuentemente, ganar más apoyo público para lograr un incremento presupuestario que permitiera aumentar los salarios, mejorar el equipamiento y la infraestructura. Estas iniciativas representaban una amenaza directa a los intereses particulares de algunos grupos de oficiales superiores, por lo que generaron gran resistencia entre la cúpula policial, a pesar de que otras reformas estaban comenzando a mostrar mejoras en las condiciones laborales de los oficiales de bajo rango y ganaban gradualmente su apoyo.⁸⁵

⁸² Op. cit. p. 118, con algunas modificaciones con fines académicos.

⁸³ Op. cit. p. 118, con algunas modificaciones con fines académicos.

⁸⁴ Op. cit. p. 118, con algunas modificaciones con fines académicos.

⁸⁵ Op. cit. p. 118, con algunas modificaciones con fines académicos.

Mientras el combate a la corrupción y el mal manejo administrativo dominaban la agenda de la reforma, también se hicieron esfuerzos por mejorar la provisión del servicio policial. Posterior a su arribo al ministerio, Rospigliosi revisó los operativos policiales y redujo el número de miembros asignados a actividades de guardianía, colocando más oficiales en las calles y en las conflictivas zonas de cultivo de coca. Asimismo, en un esfuerzo por ensayar nuevas prácticas y ofrecer modelos mejorados para la administración de las comisarías, se inició un programa piloto seleccionando a una “comisaría modelo” en un barrio pobre de Lima (Surquillo). La instalación de computadoras liberó al jefe de la comisaría de las horas diarias que debía invertir en la firma de libros de registro; redujo el tiempo en que se entregaban copias de reportes policiales a los ciudadanos (de 72 horas a 15 minutos); y la emisión de reportes georeferenciales de delitos permitió diseñar intervenciones focalizadas. La inversión fue relativamente pequeña, pero replicar la experiencia en el resto de las comisarías de Perú sigue siendo una tarea pendiente, al igual que otras mejoras básicas, como proveer acceso a las bases de datos nacionales a todas las comisarías del país (actualmente solo tienen acceso las unidades especializadas).⁸⁶

Lo referido a la inseguridad ciudadana ocupa un lugar preponderante dentro de la problemática coyuntural vigente en nuestro país, lo que trae a colación la implementación paulatina de nuestro NCPP; a propósito de lo cual el Ex-Coronel PNP Benedicto Jiménez Bacca en su comentario realizado con relación al libro “Informe Policial” presentado por él en el año 2011 por el Mayor PNP José Enrique Enriquez Chipana sostuvo entre otros aspectos que en Lima, se había adelantado su aplicación para los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos a nivel nacional (Secciones II, II y IV del artículo 382° al artículo 401° del Capítulo XVIII del Libro II del Código Penal), mediante Ley N° 29574 del 17 de setiembre 2010 y Ley N° 29648 del 3 de enero 2011. Es así, según refiere, que de un recuento objetivo podemos afirmar que la aplicación del NCPP en los distritos judiciales ha tenido resultados satisfactorios, evidenciándose procesos sin dilaciones y dando lugar a sentencias oportunas, gracias a aplicación de mecanismos de simplificación procesal y negociación penal que permiten una rápida administración de justicia, a decir del jurista Percy García Caveró: *“no se ha discutido en qué medida los aspectos garantistas reconocidos en el NCPP pueden mellar la eficacia de la persecución penal, así como la simplificación del proceso penal puede haber reducido algunos mecanismos de defensa”*. Por otro lado sostuvo el autor que, en los lugares donde se viene implementando la norma adjetiva se observa que el fiscal desvirtúa la función de investigación

⁸⁶ Op. cit. p. 119, con algunas modificaciones con fines académicos.

de la policía y bajo el pretexto que son los directores de la investigación del delito, emplean a los policías como secretarios, choferes, citación de personas, traslado del fiscal al lugar de las diligencias, no lográndose articular un trabajo coordinado de policía–fiscal, incluso, se dan enfrentamientos estériles.⁸⁷

Otro problema que se plantea es el de la llamada confusión del rol de los fiscales y de la policía en el NCPP que se desencadena cuando el fiscal asume no solo la conducción jurídica del delito, sino incluso la investigación de manera directa, relegando a la policía a un papel de apoyo en su función investigadora, que ocasionaría que la policía disminuya de manera significativa su capacidad de control y seguimiento de la actividad criminal al no poder participar directamente en la investigación del delito. En tanto por otro lado, los fiscales y abogados de oficio, en su afán de ser garantistas de los derechos del imputado, ponen en tela de juicio la idoneidad de las intervenciones policiales, en perjuicio de su dignidad y prestigio del personal policial.⁸⁸ Aspectos que se verán reducidos a su mínima expresión cuando se decida por una capacitación integral e interiorice el sentido de la norma penal adjetiva, asimismo que se opte por una aplicación conjunta y con conocimiento funcional de la posición del operador y del desarrollo eficaz de la misma.

Lo cierto es que nuestro NCPP se refiere taxativamente a que el Ministerio Público conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional.

Lo singular, continúa diciendo, es que si el fiscal pretende hacerse cargo de la dirección de la investigación sin tomar en cuenta que esta dirección es para efectos de “conducción jurídica de los actos de investigación”, entonces, se convertiría en un testigo, y por ende, podría ser sometido a interrogatorio y contrainterrogatorio; por otro lado es imposible que el fiscal pueda dirigir, orientar, vigilar, la investigación del delito desde el inicio si es que no está presente físicamente en el escenario de los hechos. Luego la investigación criminal no es sinónimo de conducción jurídica y ya que en la exposición de motivos del anteproyecto del NCPP se expuso que tal cuerpo normativo tenía como fin lograr el equilibrio de seguridad ciudadana y garantía, contribuyendo a la seguridad ciudadana dándole a la PNP para efecto del control de identidad, el de videovigilancia, intervención de las comunicaciones en el caso que fuera necesario y

⁸⁷ Jiménez Bacca, Benedicto (2012). *Comentarios sobre el libro "Informe policial" escrito por el Mayor PNP José Enriquez Chipana*. Revista el Pacificador 2011. Recuperado el 17 de octubre del 2017 a horas 15:14, de <http://elpacificador2011.blogspot.pe/2012/08/comentarios-sobre-el-libro-informe.html>.

⁸⁸ Op. cit., con algunas modificaciones con fines académicos.

autorizado, se requiere urgentemente un estudio acucioso que sustente la afirmación resultados satisfactorios, relacionado con la seguridad ciudadana.⁸⁹

Debemos asumir, refiere, que la policía es la parte más débil del proceso de reforma porque no está preparada para el nuevo modelo acusatorio adversativo; sin embargo su apreciación tiende a relieves las supuestas bondades del atestado policial frente al informe policial, puesto que según se afirma muchas veces ha servido para que fiscales y jueces se basen en él para sus denuncias y procesos penales, frente a lo cual el doctor Alonso Peña Cabrera Freyre sostiene que la policía no pierde nada con su desaparición sólo que ahora no podrá emitir en sus conclusiones un juicio de valor jurídico penal, facultades exclusivamente reservadas para los órganos que oficialmente administran justicia penal en nuestro país. En tanto el doctor Víctor Cubas Villanueva explica que con su desaparición el sólo pierde el poder de facto que nadie le había conferido que consistía en investigar autónomamente, controlar la investigación, criminalizar, y calificar jurídicamente la investigación, y en el sector corrupto la posibilidad de negociar el resultado de las investigaciones.⁹⁰

Asimismo se critica la desaparición de lo conclusivo del atestado sosteniendo que esto, alterará gravemente la metodología de investigación criminal porque no existe investigación científica sin conclusiones, confundiendo el sentido de la investigación policial; más aún al señalar que el Ministerio Público pasaría un órgano investigador y acusador, sustituto del juez instructor, en tanto la Constitución sólo le reconoce funciones de orientación y control.⁹¹ Pues nada más alejado de la verdad ya que la naturaleza del órgano jurisdiccional está cada vez más distante de su papel de ente acusador o investigador, dada su labor eminentemente deliberativa.

Confusión que se mantiene cuando se afirma:

1. La importancia del atestado policial ha variado con el tiempo.
2. El art. 62 del Código de Procedimientos Penales consideraba a los atestados policiales sólo como mera denuncia, y como tal sujeta a comprobación judicial.
3. El Decreto Legislativo N° 126, que nos trae que la investigación policial contenida en el atestado policial constituye elemento probatorio que debe ser apreciado con criterio de conciencia.
4. Lo que terminaría siendo reforzado con la modificación introducida al artículo 72 del CdePP por la Ley N° 24338 cuando establece que las diligencias realizadas en la etapa policial con la

⁸⁹ Op. cit., con algunas modificaciones con fines académicos.

⁹⁰ Op. cit., con algunas modificaciones con fines académicos.

⁹¹ Op. cit., con algunas modificaciones con fines académicos.

intervención del MP y las practicadas por el propio fiscal con asistencia del abogado defensor, que no fueran cuestionadas, mantienen su valor probatorio para efectos del juzgamiento.

Aspectos últimos que obedecen en nuestra opinión a un desconocimiento de la esencia de los actos de prueba y de su sentido dentro del proceso penal al confundírseles con los actos de investigación.

Asimismo al referirse al informe policial, se le considera:

- Una narración escrita que contiene los hechos y los datos recopilados durante el curso de una investigación, y una comunicación que utiliza el investigador acerca de sus procesos y hallazgos.
- Un documento técnico que resume las actividades de investigación efectuadas y se ofrece un análisis de lo conseguido, para la calificación de la autoridad que corresponda.
- Un detentador de los antecedentes que motivaron la intervención policial, de la relación de diligencias efectuadas, y del análisis de los hechos investigados, estando prohibido calificar jurídicamente los hechos e imputar responsabilidades.⁹²

Lo que quiere decir que el análisis de los hechos es una evaluación que debe efectuarse teniendo como límites evitar la calificación jurídica, la imputación del presunto autor y la adopción de conclusiones. Requiriéndose únicamente de simples constataciones de los hechos registrados en actas, de modo pormenorizado y encaminados a verificar la realización del hecho y tendiente, también a individualizar a su presunto autor. Pues existe jurisprudencia que deja por sentado que la calificación jurídica de los hechos no es competencia de la policía; y las actuaciones persecutorias policiales y fiscales, se realizan en verdad bajo la presunción de culpabilidad que se desprende de la denuncia, de los elementos corroborantes de la misma e indicios concretos, por lo que solamente la aparición de tales indicios justifican el accionar policial y fiscal. Es el ámbito de mayor recorte del poder ejercido por los operadores policiales⁹³. Sobre la temática que corresponde a la Policía Judicial (PJ), en el comentario se llega a señalar que nunca se realizó un intento serio para contar con una verdadera PJ y que no existe en realidad una Policía Judicial. Y que el autor es uno de los pocos que sale en defensa del atestado policial como documento de excelencia y cabecera de proceso y que siempre ha formado parte de la cultura organizacional policial. Sin embargo aquí el problema radica en que dicho documento forma parte de una cultura investigativa que dio sus frutos en su momento, cuando la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) estuvo a cargo de la investigación criminal.

⁹² Op. cit., con algunas modificaciones con fines académicos.

⁹³ Op. cit., con algunas modificaciones con fines académicos.

Labor que cubrió con gran éxito, no solo a nivel nacional sino a través de las fronteras, ya que sus efectivos escribieron libros sobre la especialidad y ejercieron docencia en escuelas de policía latinoamericanas.

Reforzando lo dicho nuestro Fiscal de la Nación Dr. Pablo Sánchez Velarde viene mencionando las bondades de este Nuevo Código Procesal Penal pero ha advertido que se necesita tiempo y recursos para su implementación efectiva en Lima; ya que una medida como la planteada no se puede poner en marcha de la noche a la mañana pues se requiere capacitar a policías, fiscales, jueces y abogados en el manejo de la nueva herramienta legal. Siendo la tendencia es implementar de una vez por todas en todo el país el NCPP para evitar la confusión que existe en algunos distritos judiciales en donde se aplica ambos códigos.

Entrando en materia debemos relieves que:

“De acuerdo al inciso 4 del artículo 159 de nuestra Constitución Política, el Ministerio Público ‘conduce desde su inicio la investigación del delito’. En tal sentido, se entiende que el Ministerio Público tiene el monopolio de la acción penal pública y por ende, de la investigación del delito desde que ésta se inicia, cuyos resultados como es natural determinará si los Fiscales promueven o no la acción penal. Esta disposición constitucional ha sido objeto de desarrollo en el Código Procesal Penal (CPP), de modo que en el artículo IV del Título Preliminar se establece con nitidez, entre otras facultades: el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal pública y asume la investigación del delito desde su inicio. Luego, en el inciso 2 del Art. 60 CPP, se reitera que el Fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito, con tal propósito o finalidad los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) están en la obligación de cumplir los mandatos de los Fiscales en el ámbito de la investigación del delito.”⁹⁴

Dicho de otra forma, los fiscales y la PNP forman un solo equipo, de un lado la dirección jurídica de la investigación y del otro el brazo ejecutivo de esta dualidad. Asimismo no es para nadie ajeno que nos encontramos en un grado de implementación tal del CPP en el que solo resta su aplicación en Lima capital.

“En el nuevo modelo procesal penal se precisa el rol o funciones que desempeña la Policía Nacional del Perú en la investigación del hecho punible, ello bajo los parámetros ineludibles que la Constitución de 1993 establece en forma expresa en el inciso 4 del artículo 159; es decir, la Policía Nacional está en la obligación de cumplir con los mandatos u órdenes que imparta el

⁹⁴ Salinas Siccha, Ramiro. *Conducción de la Investigación y Relación del Fiscal con la Policía en el Nuevo Código Procesal Penal*. Publicado en la Revista JUS-Doctrina N° 3, Grijley. Lima, marzo 2007. P. 02. Recuperado el 17 de octubre del 2017 a horas 15:14, de http://portal.mpfm.gob.pe/ncpp/files/c12171_articulo%20dr.%20salinas.pdf

Fiscal en el ámbito de su función de investigación del delito. De ese modo, el artículo 67 CPP establece en forma general para todos los efectivos de la Policía Nacional: en su función de investigación, por propia iniciativa debe recibir o tomar conocimiento de los delitos con la obligación de dar cuenta inmediata al Fiscal. En tanto se demora en dar cuenta al Fiscal del hecho punible que ha tenido conocimiento, por circunstancias geográficas o porque aquel se encuentra participando en diligencias de otra investigación en lugar diferente por ejemplo, el Policía está en la obligación ineludible de realizar los actos de investigación (diligencias) de urgencia e imprescindibles para evitar o impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para esclarecer los hechos, cuidando siempre de las formalidades al levantar las actas haciendo participar al sospechoso y a su abogado por ejemplo, a fin de no hacer ineficaz su trabajo. (Véase: Incs. 2 y 3 art. 68 CPP).⁹⁵

Es así que la PNP tiene autonomía y capacidad decisoria en el interín del conocimiento de la noticia criminal y en momento de dar cuenta al Fiscal de todas sus actuaciones iniciales de investigación y de aseguramiento, realizadas con miras al esclarecimiento de los hechos.

“Por división de trabajo, sabemos que la PNP tiene una jefatura que se dedica exclusivamente a la investigación de hechos delictivos. Estos efectivos policiales, según prevé el inciso 2 del artículo 67 CPP, están en la obligación de apoyar a los Fiscales para viabilizar la investigación del delito. De primera intención es común pensar que en nuestra Policía Nacional hay especialización, es decir, existen miembros de la PNP capacitados, entrenados y especializados en técnicas de investigación delictiva, sin embargo, al indagar al respecto con sorpresa tomamos conocimiento que no existe tal especialización basados en la concepción errónea (teórica y práctica) en el sentido que todos los Policías al egresar de la Escuela, están capacitados para efectuar una investigación sobre la comisión de un delito. La realidad nos demuestra lo contrario y ello genera la materialización de deficientes investigaciones que realiza nuestra PNP. Debemos ser conscientes desde el inicio: si un Fiscal competente y responsable con su labor no cuenta con un buen equipo policial de apoyo en la investigación del delito muy poco podrá hacer. El nuevo modelo procesal del CPP del 2004, exige que un buen grupo de miembros de nuestra Policía Nacional se especialice en criminalística y en técnicas de investigación del delito, los mismos que deben estar adscritos en las diversas comisarías del Perú. Este aspecto primordial deben tenerlo claro los responsables del Ministerio del Interior y volver

⁹⁵ Op. cit.. P. 06.

a la idea que dio origen por ejemplo a la desaparecida Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Caso contrario, existe el peligro latente que se imponga la impunidad.”⁹⁶

Y con ello obviamente el fracaso en la implementación del CPP.

La posición de la Policía en los sistemas comparados de justicia criminal es de tal entidad, que se la define como “verdadera gestora de la investigación”, destacando su “dominación fáctica” de la fase preparatoria del proceso frente a la amplia autonomía del ministerio público, a pesar que, en general, el texto del NCPP la subordina, ya sea orgánica y/o funcionalmente al ministerio público. Así, el Artículo 68 del NCPP establece las atribuciones de la Policía, precisando, no obstante, su subordinación al Fiscal en lo concerniente a las distintas diligencias a llevar a cabo dentro del proceso de investigación entre las que resaltan: a) Recibir las denuncias escritas o sentar las actas de las verbales, así como tomar declaraciones de los denunciantes.; b) Vigilar y proteger el lugar de los hechos, a fin de que no sean borrados los vestigios y huellas del delito; c) Practicar el registro de las personas, así como prestar el auxilio que requieran las víctimas del delito; d) Recoger y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueda servir a la investigación; e) Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito; f) Recibir las declaraciones de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos; g) Levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas; h) Capturar a los presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia, informándoles de inmediato sobre sus derechos; i) asegurar los documentos privados que puedan servir a la investigación.; j) Allanar locales de uso público o abiertos al público; k) Efectuar, bajo inventario, los secuestros e incautaciones necesarios en los casos de delitos flagrantes o de peligro inminente de su perpetración; l) Recibir la manifestación de los presuntos autores o partícipes de delitos, con presencia obligatoria de su abogado defensor.; m) Reunir cuanta información adicional de urgencia permita la criminalística para ponerla a disposición del fiscal, y, n) Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados; observándose que esta última atribución asigna a la Policía Nacional un rol importante e imprescindible para el logro de los objetivos de la función de investigación, por cuanto es abierta y deja a la imaginación del investigador policial la utilización de procedimientos policiales adecuados con el fin de llegar a la verdad. En todo caso la Policía juega un rol de auxilio investigativo siendo el Ministerio Público la institución que imparte –como directora de la investigación– las estrategias investigativas que serán ejecutadas

⁹⁶ Op. cit. Pp. 10 y 11.

por el órgano policial en el ámbito de su función. Sin olvidar que la Policía tiene facultades de poner en conocimiento de la fiscalía si hay algún elemento que le obligue a investigar. (Artículo 60.1 NCPP).⁹⁷

La imaginaria policial, que permitiría que el resto de ciudadanos podamos cumplir nuestras horas de descanso y cumplir sin novedad nuestro periodo laboral, les permite ser los primeros en manejar la noticia criminal hasta dar cuenta al Ministerio Público, además de ello gran parte de los casos son encargados a la entidad policial; aspectos por los que el NCPP le atribuye más de diez variantes de actuación dentro de sus atribuciones, además de concederle: “Las demás diligencias y procedimientos de investigación necesarios para el mejor esclarecimiento de los hechos investigados”; lo que sin lugar a dudas hace que nuestra policía tenga un lugar preponderante en la indagación del delito, en la averiguación temprana y en la investigación científica del caso y por ende en el resultado de todo ello que se condice con el éxito o fracaso del encaminamiento propuesto por nuestro modelo procesal.

Es así que la participación policial durante el proceso penal se va concretizando a través del desarrollo de las diferentes etapas del nuevo proceso penal.

B. EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR:

Aquí lo más importante es la relación funcional que se establece entre la Policía y el Ministerio Público, sobre la que se escrito mucho dejando entrever que sería el impase más importante para el fracaso de la implementación del NCPP.

Para muestra un botón; analizada la problemática en la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, respecto la relación funcional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en la etapa de la investigación preliminar en los delitos de crimen organizado, en la jurisdicción de Lima Metropolitana en el periodo 2014-2016, en un estudio de carácter descriptivo, con diseño explicativo de corte transversal y enfoque cualitativo con muestra de 247 efectivos de la policía y 21 Fiscales, utilizando la técnica de análisis documental y la encuesta. Se concluyó que la aplicación del NCPP influye en la relación funcional entre el MP y la PNP en la investigación del delito en la etapa preliminar, y que con tal propósito conforme a datos obtenidos, la relación funcional no es buena, por lo que se requeriría: a) poner en práctica los lineamientos, protocolos interinstitucionales de trabajo, b) mejorar la confianza entre integrantes de ambas instituciones,

⁹⁷ Cisneros Ibaña, Luís. *El rol del Ministerio Público en la investigación penal de acuerdo al NCPP*. Pp. 10 y 11. Revista de actualidad jurídica: La tribuna del abogado. Año V, edición 07 de julio del 2014, Lima. Recuperado el 18 de octubre del 2017 a horas 10:14, de <http://www.icafe.com.pe/imagen/Revistas%20ICADE/6%20Revista%20Julio%20-%202014.pdf#page=45>

ello con la finalidad de coadyuvar y realizar investigaciones eficientes con elementos de convicción que acreditaran el ilícito penal, debiendo ser un dúo en la investigación del delito, con conocimiento jurídico por parte del Fiscal y la Policía con conocimiento técnico especializado en campo de investigación criminal e criminalística.⁹⁸

Luego conforme a la experiencia adquirida en este sentido podemos señalar que desde la entrada en vigencia del NCPP se han presentado una serie de inconvenientes y de problemas relacionados a su aplicación y sobre todo a la mala coordinación de sus actividades entre los encargados de la investigación preliminar. Es así que en el mes de abril del 2009, cuando entró en vigencia en el Departamento de Lambayeque el NCPP no fue ajeno a problemas, siendo lo que más destacan la mala coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú es aún falta de apoyo logístico para adecuar la infraestructura y capacitar al personal policial; toda vez que ambas Instituciones deben de trabajar estrechamente para poder reunir los elementos probatorios suficientes para presentar un "caso" ante el Juez de Investigación Preparatoria y todo el esfuerzo desplegado por los actores judiciales se va a valorar cuando el denunciado sea sancionado dentro de los parámetros constitucionales. Con la implementación del NCPP, podemos comprobar que en los lugares donde se viene aplicando el nuevo sistema la Policía Nacional ya no investiga los delitos, o por lo menos ya no lo hace en la forma tradicional como lo ha venido haciendo, pues en principio ya no existe la investigación policial y formalmente dentro del proceso penal tampoco existe una etapa de investigación preliminar, habiéndose establecido solamente la existencia de tres etapas procesales consistentes en: la etapa de investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juzgamiento; siendo que dentro de la primera de ellas, etapa preparatoria, se incluye la actuación de "diligencias preliminares". En ese sentido, la investigación realizada y denominada: " *El rol de la Policía Nacional en la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en la investigación del delito de extorsión en la ciudad de Chiclayo periodo 2011*" abordó como problemática identificada la influencia del NCPP en la investigación del delito de extorsión, para lo cual se planificó la gestación de un Plan de Investigación para establecer el grado de influencia. Por lo que se asumió una investigación de tipo y diseño Descriptivo – Causal, para luego poder establecer el grado de influencia de la variable independiente en la dependiente y dar cumplimiento a la hipótesis de investigación que infería que: *El Nuevo Código Procesal Penal influye negativamente en la investigación del delito*

⁹⁸ Ciriaco Caqui, Jeferson Jesús. *La influencia del nuevo código procesal penal en la relación funcional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en la etapa de la investigación preliminar en los delitos de crimen organizado en Lima Metropolitana, periodo 2014-2016*. Recuperado a horas 08:36 del día 19 de octubre del 2017 de <http://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/123456789/545>.

de extorsión que realiza la PNP – DIVICAJ. Así mismo se asumió como problema general: ¿De qué manera la Aplicación del Nuevo Código Procesal Penal influye en la Investigación del delito de extorsión que realiza la PNP – DIVICAJ- Chiclayo - 2011?, consecuentemente el objetivo general: Determinar el grado de influencia que ejerce el NCPP en la investigación del delito de extorsión que realiza la PNP.

Se trabajó con una población de 140 efectivos Policiales de la dependencia descrita en el tema, cuya muestra fue elegida mediante la técnica del muestreo probabilístico en la forma de muestreo aleatorio simple para lo cual se utilizó la estrategia del sorteo; resultando para tal fin 20 efectivos policiales a quienes se les suministró una encuesta por Cuestionario debidamente estructurada con 21 preguntas, cuyo instrumento fue validado por la opinión y juicio de expertos. Finalmente se pudo concluir que la aplicación del nuevo código procesal penal influye de manera negativa en el desarrollo de las diligencias preliminares para la investigación del delito por extorsión que realiza la PNP. Esta información se corrobora ya que un alto porcentaje (95 %) señala que dicho código limita su trabajo como investigador en este rubro.⁹⁹

Sin embargo debemos hacer notar que desde que se estaba preparando la implementación del NCPP en nuestro país, es decir antes de su aplicación había una opinión generalizada en la PNP en el sentido que el nuevo instrumento normativo fracasaría al ser implementado, evidenciándose que tal criterio obedecería a que la norma adjetiva entregaba la dirección jurídica de la investigación al Ministerio Público y que para ello contaría con la PNP como brazo ejecutivo, por lo que los miembros policiales asumían que desaparecería la autonomía con que contaban hasta ese momento, sin advertir que la dirección jurídica de la investigación no es otra cosa que la capacidad de tomar decisiones que permitirán enlazar las indagaciones preparatorias con la estrategia del Ministerio Público para sustentar la pretensión punitiva que deberá determinar que su teoría del caso salga adelante, tomando en cuenta para ello la labor investigativa policial y su iniciativa, de ser el caso.

C. EN LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA:

La labor en esta etapa estará determinado por el hecho de que nos encontramos en una misma coyuntura o nivel con relación a la primera etapa y por lo tanto mismas exigencias, sin embargo debemos tomar en cuenta que la investigación científica juega un papel preponderante en la consecución del resultado exitoso pretendido; es así que existen trabajos como el denominado:

⁹⁹ Cabrera Huertas, Cristian (2011). *El rol de la Policía Nacional en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en la investigación del delito de extorsión en la Ciudad de Chiclayo periodo 2011*. Tesis presentada en la Universidad Señor de Sipán para optar el título de abogado, en Chiclayo, 2013. Recuperado a horas 08:36 del día 19 de octubre del 2017 de <http://repositorio.uss.edu.pe/handle/uss/1578>.

Investigación criminalística para el esclarecimiento del hecho punible y su contribución a la administración de justicia de acuerdo al Código Procesal Penal, realizado con los objetivos de: medir el nivel de eficacia, calidad y actividad técnica y científica de la investigación criminalística a fin de contribuir a la Administración de Justicia en la ciudad de Puno, tomando como referencia el año 2010 y 2011, empleando el método de investigación explicativo y el diseño no experimental y correlacional, como estrategia para determinar el grado de relación entre las variables, identificando los factores y las características. Ello para determinar como objetivos específicos, el nivel de eficacia, calidad y actividad técnica y científica de la investigación criminalística. Permitiendo inferir que durante el desarrollo de la investigación, la información recolectada ha permitido visualizar la diversidad de expresiones de los sujetos de la muestra (Magistrados, Abogados, policías y Litigantes), y demostrándose el nivel de eficacia, calidad y actividad técnica y científica de la investigación criminalística es regular en un 67 % con tendencia a deficiente con ausencia de la alternativa muy bueno, lo que tiene consecuencias jurídicas muy graves no permitiendo esclarecer el hecho punible para determinar la culpabilidad o inocencia de un sujeto determinado, porque la investigación criminalística no tendrá efectos positivos en la valoración induciendo a cometer errores al juzgador (Magistrados), y que no existe crimen perfecto si no una mala investigación.¹⁰⁰

D. EN LA ETAPA INTERMEDIA Y JUZGAMIENTO:

Existen deficiencias a este nivel que pasan por diferentes temas como son: a) ausencia o no incorporación al proceso de análisis técnicos importantes: bario y plomo, búsqueda, obtención recolección o comparación de huellas dactiloscópicas, serológicos o reconocimientos médicos de lesiones; b) no se practicaron pruebas balísticas incluso en casos donde se tuvo material para comparación; c) testigos que no fueron identificados, localizados o fueron asesinados antes de declarar; d) la fiscalía prescindió de los únicos testigos que tenía sin dar explicaciones o motivos para ello; e) en el acto de la inspección ocular: deficiente manejo de la escena del delito respecto a la búsqueda, localización y recolección de evidencias, no se identifican o no se entrevistan a todos los testigos hallados en la escena, etc. Sin dejar de lado que en muchos casos la movilidad de los miembros policiales a diferentes zonas del país dificultan su participación como testigo en el juicio; todo ello contribuyendo a un clima de impunidad que cada vez cobra más protagonismo.

¹⁰⁰ Huayta Ali, Cesar (2012). *Investigación criminalística para el esclarecimiento del hecho punible y su contribución a la administración de justicia de acuerdo al código procesal penal*. Recuperado a horas 08:36 del día 19 de octubre del 2017 de <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/339>

Debemos asumir en consecuencia que el Ministerio Público es el único organismo que puede ocurrir ante el Poder Judicial para reclamar que se declare culpable y se sancione a un procesado. Cuando se trata de delitos de persecución oficial o pública, ninguna otra entidad, por más encumbrada que sea, puede desconocer esta vía, ello por la sencilla razón de que todo proceso penal, para ser debido, necesita recorrer una etapa inicial o preparatoria (la investigación) de cuyo resultado dependerá el planteamiento o no de una acusación.¹⁰¹

La Constitución de 1979, felizmente repetida en este punto por la vigente de 1993 (159.4), al diseñar el proceso penal democrático dispuso que el Ministerio Público se encargue de conducir desde su inicio la investigación del delito, a la vez que determinó un cierto tipo de relaciones entre las fiscalías y la policía, e indicó que con este propósito esta última está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función.¹⁰²

Desde la perspectiva constitucional no existe base alguna, entonces, para equiparar los roles de un organismo con el del otro. Es cierto que la pesquisa del delito requiere, casi siempre, la actuación del binomio fiscal-policía, pero de ahí no se puede concluir que la estrategia y el planeamiento de la investigación le competan tanto a la policía como al fiscal, o que existen dos conductores o direcciones. El NCPP es terminante.¹⁰³

La estrategia es prerrogativa fiscal y de nadie más. El Ministerio Público ordena, cuando corresponde, la intervención policial (NCPP art. 65). La policía da cuenta inmediata a la fiscalía de las noticias criminales (NCPP arts. 60, 331.1), adelanta ciertos actos de investigación urgentes e imprescindibles (NCPP art. 67) y formula un informe objetivo que recoja, ante todo, las intervenciones practicadas, y se abstiene de calificar jurídicamente los hechos y de imputar responsabilidades (NCPP art. 332).¹⁰⁴

Nada de lo dicho se contradice con la previsión del Código en el sentido de que el Ministerio Público conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la policía (NCPP IV2) porque con ello se cubre la misión fiscal dirigente de las actuaciones operativas de la fuerza pública, así como la legalidad o la regularidad jurídica de ellas, con el interés de que toda intervención policial esté rodeada de legitimidad y escrupuloso respeto de la ley. Tal el caso de los cuidados que deben tomarse cuando se procede a detener a una persona (NCPP arts. 259,

¹⁰¹ Rodríguez Hurtado, Mario. *Los sujetos procesales en el código procesal peruano de 2004*. Recuperado a horas 08:36 del día 19 de octubre del 2017 de file:///C:/Users/INTEL/Downloads/3140-11802-1-PB.pdf.

¹⁰² Op. cit., con algunas modificaciones con fines académicos.

¹⁰³ Op. cit., con algunas modificaciones con fines académicos.

¹⁰⁴ Op. cit., con algunas modificaciones con fines académicos.

263), cuando se registra la escena del crimen o cuando se elabora la cadena de custodia de la evidencia (NCPD arts. 220.5, 318.1).¹⁰⁵

3.2.2. Hacia un nuevo modelo policial

Deberá adscribirse al modelo de seguridad ciudadana, el cual plantea un cambio estructural en la relación del Estado con la sociedad: protección de las personas, respeto a los derechos humanos, ejercicio de la ciudadanía y participación social, solución pacífica de problemas, fortalecimiento de las instituciones y obtención de impactos duraderos en el mediano y largo plazos.

- Adscribirse a un modelo de prevención de las violencias y la delincuencia, que sea coherente con los objetivos de cohesión social y calidad de vida de las personas y las ciudades, y no a uno de disuasión de los delitos (más patrullas y más armas).
- Asumir la perspectiva de los derechos humanos como un eje transversal de la actividad policial. Esta perspectiva se deberá considerar en la definición de objetivos y en los estándares de actuación como instrumentos normativos y deontológicos.
- Fortalecer la transparencia policial y la rendición de cuentas.
- Desmilitarizar, despolitizar y democratizar a la policía: configurarla como una institución civil que debe refundarse colocando como valores principales una esencia civilista y una capacidad para resolver conflictos con participación ciudadana sin influencia de los intereses estatales políticos.
- Redefinir la integración de principios, valores y normas sobre su rol constitucional, vinculado a la defensa de los derechos humanos, la ley, el orden y la seguridad, así como a la vocación de servicio, a la promoción de la cohesión social, la cultura de la legalidad y la cultura de paz.
- Se requieren políticas públicas que dignifiquen a la policía.
- La reforma policial debe contar con el respaldo y aceptación de los miembros de la organización policial en la que se llevará a cabo el proceso.
- El nuevo modelo policial deberá considerar la prevención del delito, así como la inteligencia policial y de contención.
- Es necesario el desarrollo de una política contundente de coordinación intrainstitucional y con otras instituciones de seguridad y policiales que permita la creación de espacios de

¹⁰⁵ Op. cit., con algunas modificaciones con fines académicos.

análisis estratégico donde sea posible reformular los problemas comunitarios y lograr precisión, eficiencia y profesionalismo en el tratamiento.¹⁰⁶

Viabilidad de su modernización integral. Requerimientos mínimos:

- Gestión profesional de los recursos institucionales.
- Capacidad policial operativa y fortalecimiento de unidades de élite de alto nivel.
- Especialización previa capacitación tecnológica integral en áreas forenses.
- Tecnologías de la información y telecomunicaciones
- Nueva estructura; que implica:
 - Despolitización y desmilitarización. El director general debiera ser un civil o un ex policía que dirija los destinos de la institución de manera autónoma y priorizando los intereses de la comunidad por sobre aquellos de índole político encaminan a la administración estatal.
 - Privilegiar el mérito frente a la antigüedad. Mérito de los que ocupan posiciones difíciles, referidas no solo a riesgo físico personal.
 - Aspectos tecnológico, operativo y de infraestructura renovados.
 - Relanzar una policía de prevención o comunitaria, que es la encargada del orden público e interno.
 - Apostar por una policía de investigación, a la que le corresponde la indagación de los hechos delictuosos, ya sea por intervención directa o por delegación del MP.
 - Incidir en una policía de seguridad, que está encargada del resguardo de las fronteras y de los establecimientos penitenciarios.
 - Prevenir la sobrecarga laboral, debiendo existir una relación racionalizada sostenida entre el número de efectivos policiales y la cantidad de denuncias o casos por atender.
- Heterogenización nacional. Aquí se trata de atender a las diferencias que existen entre las características de cada región y área, haciendo que el enfoque sobre sus requerimientos logísticos, tecnológicos y de recursos humanos varíe de acuerdo a ello.
- Participación ciudadana (proximidad social). El binomio policía-ciudadano debe funcionar para efectos de mejorar el encaramiento de la acometida criminal, y las capacitaciones vecinales para difundir una cultura de prevención del delito.
- Hacer de la prevención del delito una alternativa eficaz y eficiente para combatir el mismo.

¹⁰⁶ Programa para la Convivencia Ciudadana. *Policía Comunitaria: Conceptos, Métodos y Escenarios de Aplicación*. USAID. Recuperado el 23 de enero del 2017 a horas 17:08 de [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7A9ADDCC923BC03C05257F45005F29E6/\\$FILE/POLICIA_COMUNI.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7A9ADDCC923BC03C05257F45005F29E6/$FILE/POLICIA_COMUNI.pdf)

- Lograr que todo lo señalado determine un sistema de desarrollo del efectivo policial y por consiguiente un nuevo perfil de policía.

Procesos de la carrera policial

- ✓ **Reclutamiento:** en materia de reclutamiento y formación de personal, se viene privilegiando a un policía que se profile más como un generalista que como un especialista; más como un comunicador que como un “informante”, más como un gestor social que como un agente del orden.
- ✓ **Selección:** en este proceso debemos: 1. Definir el cargo precisando los pormenores del quehacer policial. 2. Levantar el perfil policial. Con relación a la estatura los requerimientos deberán establecerse de acuerdo a la labor a desempeñar, en el caso del porte militar exigible para los encargados de la seguridad y el orden interno hablamos de 1.75 m. a más; y para la Policía de investigación de 1.60 a más. 3. Realizar acciones de reclutamiento para conseguir hojas de vida, así mismo, es necesario hacer una primera selección de las hojas de vida para mantener las que corresponden al perfil. 4. Realizar pruebas psicotécnicas y entrevistas con psicólogos profesionales. 5. Hay que volver a apostar por atraer profesionales y técnicos ya formados a la Policía Nacional, haciéndole al Estado un ahorro significativo y captando personas que por su formación y experiencia previa puedan avocarse exclusivamente a la formación como policías, haciendo su carrera en la mitad del tiempo previsto.
- ✓ En este sentido, se estudian los atributos de compatibilidad que tiene el individuo y se tienen en cuenta los siguientes aspectos:
 - Estilo de comportamiento: este aspecto analiza la competitividad y asertividad de la persona. Así mismo, cuál es la capacidad para motivar a la gente y encaminarla al logro de los objetivos; se tiene en cuenta cómo es la iniciativa y la habilidad para actuar de manera independiente.
 - Valores, intereses y vocación: se observan cómo es el respeto a la gente y el interés en su desarrollo, así como la inclinación por actualizarse y ser innovador.
 - Estilo de pensamiento: este punto examina cómo es la creatividad y el espíritu emprendedor del candidato, de qué manera soluciona los problemas y cómo los controla.
 - Inteligencia emocional: presta atención en la energía positiva, el control emocional y el manejo de la objetividad que tiene la persona.
- ✓ **Ingreso:**

Se realizará a través de un concurso público de méritos a cargo del Comité de Admisión respectivo, de acuerdo a las vacantes establecidas por la Dirección General de la Policía Nacional del Perú. Pasando a publicar el número de vacantes, requisitos generales y específicos, fases, costos, exámenes, obligaciones de los postulantes e ingresantes, beneficios y bonificaciones, cronograma con las fechas del concurso de selección que se iniciará con la inscripción, seguido del examen médico, el físico, psicológico, aptitud académica, conocimientos, entrevista, luego la inscripción del postulante y finalizará con la publicación del Cuadro de Mérito.

✓ **Asimilación:**

El Proceso de Asimilación de Oficiales y Suboficiales de Servicios de la PNP, es y deberá mantenerse como un concurso entre los postulantes en las carreras profesionales y técnicas que requiere la Institución Policial, para cubrir las vacantes asignadas en cada carrera.

✓ **Permanencia:** Este aspecto está regulado por la Ley de la carrera y la situación del personal de la Policía Nacional Perú, D. Leg. 1149.

✓ **Promoción y estímulos:**

La promoción es el proceso dentro de la Carrera Policial a través del cual el personal operativo participa en un concurso que convoca la institución para obtener un ascenso en los grados de las jerarquías correspondientes.

Los estímulos consisten en el otorgamiento de incentivos en numerario y en especie al personal policial, fin de lograr la disminución de los índices delictivos y la remisión de presuntos responsables por la comisión de delitos. Estimular el desempeño del personal policial.

Su objetivo radica en motivar a los policías a colaborar activamente en la disminución de los índices delictivos así como el incremento de remisiones de presuntos responsables.

✓ **Reconocimientos:** Competencias policiales

✓ Incorporación de profesionales y técnicos ya formados que harán su carrera en la mitad del tiempo previsto con el respectivo ahorro de recursos.

✓ Impartición de una formación policial y no militar, con cursos, valores, destrezas, disciplina y otros propios de un policía.

▪ Reglamento disciplinario

Se trata del D. Leg. 1150 que regula el régimen disciplinario de la PNP, desde el 11 de diciembre del 2012, y que cuenta con 73 artículos, sin embargo insistimos en que no se trata de buenas normas, sino de operadores eficientes y eficaces que las hagan cumplir.

- Estandarización salarial

Este es un aspecto que ha sido enfocado con una óptica interinstitucional PNP-Fuerzas Armadas. Sin embargo como ya hemos anotado la naturaleza de la PNP no es la misma que las de las Fuerzas Armadas, por lo que los criterios remunerativos debieran atender a ello.

- Prestaciones sociales

Los numerales 12, 13 y 14 del artículo 5 del D. Leg. 1267 hacen referencia a: 12) Reconocimiento, sólo para efectos previsionales, como tiempo de servicios, del período de formación como cadete o alumno para el cómputo de los años de servicios a los Oficiales y Suboficiales de armas respectivamente. Este reconocimiento será hasta de cuatro (04) años por la formación profesional para los Oficiales de servicios y el tiempo del curso de adaptación institucional para los Suboficiales de servicios. Se aplica cuando el personal masculino ha cumplido veinte (20) años de tiempo de servicios y diecisiete (17) años y seis (06) meses para el personal femenino; 13) Reconocimiento de beneficios económicos por cambio de residencia cuando pase a la situación de retiro; 14) Reconocimiento de los beneficios sociales que correspondan por pase a la situación de retiro conforme a ley. Sin embargo dichas prestaciones atienden a la generalidad de los miembros PNP y no toman en cuenta sus necesidades concretas.

- Sobrepeso del efectivo

La obesidad es un problema acuciante en algunas sociedades desarrolladas. Las fuerzas policiales de esos países no son ajenas a esta circunstancia y muchos de los policías que integran dichas fuerzas sufren de un exceso de peso que dificulta el adecuado desempeño de su trabajo.

La función policial presenta unas características que lo hace diferente a muchos otros trabajos. El estrés, el trabajo a turnos, los horarios cambiantes y otras particularidades de este oficio hacen que, en muchas ocasiones, los agentes descuiden su alimentación. Si a esto añadimos que muchos de ellos, con el paso del tiempo, renuncien al ejercicio físico y un entorno social donde el consumo excesivo de grasas y proteínas animales sea la norma habitual podemos comprender sin mucha dificultad el origen de este problema de obesidad policial.

Las comisarías y otras dependencias policiales deberían contar con instalaciones deportivas o debería facilitarse el acceso a gimnasios para ayudar a los agentes a mantenerse en forma. Si el aspecto deportivo falla, se les podría enviar a cursos de adelgazamiento o podrían recibir consejos nutricionales y sobre salud.

Resulta muy recomendable que los policías mantengan unas mínimas capacidades físicas que les permitan realizar sus tareas con eficacia a la vez que transmiten confianza y seguridad a los ciudadanos. Pero esta capacitación no puede recaer exclusivamente sobre los propios agentes, siendo necesario que las propias corporaciones policiales establezcan programas, rutinas e incentivos que favorezcan el hecho de que los agentes tengan unas adecuadas condiciones físicas. No sería justo exigirles ser superhombres con unos infra sueldos. Al igual que tampoco se les debería castigar con bajadas salariales u otro tipo de sanciones por ser gordos en una sociedad de gordos. Al fin y al cabo los policías no dejan de ser un fiel reflejo de la sociedad en la que viven, con sus virtudes y sus miserias.

Experiencias exitosas por país:

1. La Legión (España)

La Legión o Tercio de Extranjeros, nace como fuerza de choque para la dura Guerra de Marruecos¹⁰⁷; su propósito, evitar el empleo de Unidades de conscriptos¹⁰⁸ cuya pobre preparación era motivo de gran número de bajas y dificultades en el desarrollo de las operaciones terrestres. Las ventajas que ofrecía era la posibilidad de alistamiento de españoles y extranjeros sin mayores exigencias que ser sanos, fuertes y aptos para empuñar las armas, ofreciendo, a cambio, la posibilidad de hacer carrera militar en el seno de la Legión. Su primera base fue el Acuartelamiento García Aldave en Ceuta, situado sobre un monte desde el que se controla todo el Estrecho de Gibraltar, y que el ejército español comenzó a ocupar en 1860. La primera expedición de caballeros legionarios ocupó el cuartel a finales de 1920, manteniéndose en el mismo hasta el 2008.¹⁰⁹ Lo rescatable de esta fuerza es su extracción y formación militar, que le asigna la ventaja de enfrentar de igual a igual a las fuerzas de choque de la criminalidad organizada.

2. Navy SEALs (EE.UU.)

¹⁰⁷ Conflicto bélico que enfrentó a España con el sultanato de Marruecos entre 1859 y 1860, durante el período de los Gobiernos de la Unión Liberal del reinado de Isabel II de España.

¹⁰⁸ Integrantes de lo que era el Servicio Militar Obligatorio (SMO) en nuestro país.

¹⁰⁹ Recuperado el 22 de mayo del 2017 a horas 15:13 de <http://listas.20minutos.es/lista/cuerpos-y-fuerzas-especiales-en-el-mundo-326891/>

Los *Navy Seal* reciben este nombre por los entornos en los que se desenvuelven: mar, cielo y tierra (Sea, Air and Land). Tienen su origen en los *Scout and Raiders*¹¹⁰, las Unidades de Demolición de Combate de la Armada, los buzos de combate del OSS, los Equipos de Demolición Submarina y los Escuadrones de Torpederos a Motor de la 2GM. Los *Seal* vieron la luz en 1962 como consecuencia del fracaso estadounidense, un año antes, en el desembarco en Bahía de Cochinos (Cuba). Tuvieron su bautismo de fuego en Vietnam, donde empezaron a tejer una leyenda de silenciosa e implacable eficiencia que continuó en conflictos posteriores.¹¹¹ La destreza de este equipo en mar, aire y tierra garantiza un desempeño eficaz al enfrentar al crimen organizado.

3. Spetsnaz (Rusia)

La *Spetsnaz* GRU es la unidad de operaciones especiales de la Dirección General de Inteligencia de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Formada el 24 de octubre de 1950, la *Spetsnaz* GRU fue la primera unidad que recibió el nombre de *spetsnaz*. No solamente es una de las mejores infanterías, ellos también usan uno de los mejores métodos de combate en el mundo. Debido a su carácter secreto, las unidades de *Spetsnaz* GRU no tienen nombres como los *spetsnaz* del FSB o el MVD, sino que solamente tiene una numeración (como por ejemplo «18ª Brigada Spetsnaz»). La información que se conoce acerca de las operaciones de los *Spetsnaz* GRU es muy reducida, pero se sabe que han participado ampliamente en conflictos como los de Afganistán y Chechenia.¹¹²

Este gran grupo y desconocido por muchos, es una de las fuerzas de élite más duras que existen hoy día. Trabajan en unas condiciones que muchos pueden encontrar inhumanas.¹¹³ Lo particular de estas tres últimas fuerzas y las consideradas en los puntos 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 en el enfrentamiento contra la criminalidad radica en su autosuficiencia táctica y formación para el combate, lo que sumado a un adiestramiento de incorporación a medios civiles lograría conjuntamente con la preparación en el uso herramientas criminalísticas de última generación, cuadros idóneos para combatir el delito en todos sus frentes.

4. GEOS (España)

¹¹⁰ Se estableció el 16 de abril de 1987 en la Base Anfibia Naval Coronado en San Diego, California. Su misión es proporcionar liderazgo, orientación doctrinal, recursos y supervisión a operaciones especiales llevadas a cabo en ambientes marítimos y litorales. [4] NSWC se especializa en una amplia gama de áreas tácticas, incluyendo la guerra no convencional, la acción directa, el contraterrorismo, el reconocimiento especial, y la recuperación del personal

¹¹¹ Op. cit.

¹¹² Op. cit.

¹¹³ Op. cit.

Creado en 1978 siguiendo el ejemplo del GSG-9 alemán, el GEO nació para luchar en medios urbanos contra el terrorismo y para intervenir en todas aquellas acciones criminales (especialmente toma de rehenes) para las que requería un equipo muy especial. Están especialmente preparados para misiones de escolta y protección de personalidades y el control de zonas especiales. El Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado 35 «comandos» de bandas terroristas y ha rescatado a 400 personas que habían sido secuestradas o tomadas como rehenes.¹¹⁴

5. G.A.F.E. (México)

El antecedente a la creación del GAFE¹¹⁵, data de 1986 con la Fuerza de Intervención Rápida (FIR), cuyo objetivo era el de movilizar unidades completas de reacción/combate, con el apoyo de logística, sistemas de comunicación, transporte y armamento ante cualquier eventualidad durante la Copa Mundial de Fútbol llevada a cabo en México. Posteriormente es durante el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en enero de 1994, que toma mayor importancia en acciones. Varias unidades fueron enviadas para suprimir el levantamiento del EZLN en Chiapas, en la denominada Operación Arcoíris.⁴ Formalmente el GAFE surge en el año 1990. En enero de 2002, 56 grupos fueron reorganizados en las distintas Áreas y Regiones Militares, destacando la organización de 73 unidades del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES) y 36 del Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (GANFES), especializados en guerra de jungla, alta montaña, desierto, anfibia y submarina.¹¹⁶ En los dos últimos casos resultaría interesante realizar algún convenio que involucre la formación y preparación de nuestra PNP.

6. EZAPAC (España)

El Escuadrón de Zapadores¹¹⁷ Paracaidistas (EZAPAC) tiene dependencias orgánica y operativa de los mandos Aéreo General y de Combate. Es una unidad de élite del Ejército del Aire, responsable de la ejecución de operaciones especiales aéreas, tanto de combate (acción directa: golpes de mano, neutralización y destrucción de objetivos del poder aéreo enemigo, rescates de combate en territorio enemigo), como de apoyo al combate (infiltración de patrullas de reconocimiento e información en zona enemiga para misiones de observación, información, conducciones de aviones, para desembarco o lanzamientos

¹¹⁴ Op. cit.

¹¹⁵ Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales

¹¹⁶ Op. cit.

¹¹⁷ Zapadores o trabajadores de combate son los soldados que se dedican a la construcción de puentes y otras estructuras en tiempos de guerra. Su misión principal es facilitar el movimiento de los ejércitos propios o aliados y dificultar el de los enemigos.

paracaidistas, señalización de objetivos tácticos y estratégicos, defensa puntual de zonas de despliegue de Unidades Aéreas.¹¹⁸

7. Kaibil (Guatemala)

Los kaibiles son soldados de élite del ejército de Guatemala preparados para llevar a cabo operaciones especiales y de inteligencia y actualmente operaciones contra la delincuencia terrorista. El Centro de Adiestramiento y Operaciones Especiales de Guatemala fue fundado el 5 de diciembre de 1974 por iniciativa del entonces Mayor de Infantería Pablo Nuila Hub, quien propuso al Ministerio de la Defensa Nacional la creación de un entrenamiento tipo comandos para ser impartido al ejército debido a las amenazas de la época dentro del contexto de la guerra fría. Los kaibiles son entrenados en el caserío "El Infierno", llamado así por la abundante plaga de insectos en esa parte de la aldea la Pólvora del Municipio de Melchor de Mencos, Petén, en plena selva tropical. Desde 1988 la escuela Kaibil se encuentra ubicada en la Brigada de Fuerzas Especiales, Poptún, Petén a 400 kilómetros al Norte de la Ciudad de Guatemala.¹¹⁹

8. S.A.S.¹²⁰ (Inglaterra)

La creación del SAS se remonta al año 1940 cuando la *Layforce*, una brigada de comandos británicos, fue enviada al norte de África con la misión de realizar incursiones contra las tropas italianas, pero a mediados de 1941 la *Layforce* quedó prácticamente destrozada y fue obligada a disolverse. Con la creación del SAS en el año 1941 por David Stirling, se marca el punto de partida en lo referente a Fuerzas Especiales, y no solo en la creación de estos grupos, sino en su composición y actuación. Un grupo que ha servido de base en la formación de los grupos de Operaciones Especiales del resto del mundo.¹²¹

9. Rangers (EE.UU.)

Sus orígenes los encontramos en el siglo XVIII, gracias a su fundador, Robert Rogers. Es el regimiento más antiguo de los EEUU y también con seguridad la primera unidad de Fuerzas Especiales (SF). El regimiento, con sede en *Fort Benning*, Georgia, opera como una fuerza de elite de infantería ligera, dentro de las fuerzas de operaciones especiales pertenecientes al Mando de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos.¹²²

¹¹⁸ Op. cit.

¹¹⁹ Op. cit.

¹²⁰ Servicio Aéreo Especial (*Special Air Service*)

¹²¹ Op. cit.

¹²² Op. cit.

10. SWAT¹²³ (EE.UU.)

Este tipo de unidad surge a finales de los años 60 en Los Ángeles, tras una serie de acontecimientos sangrientos ante los que la Policía no tuvo capacidad de respuesta. El Oficial de la policía de los Ángeles, John Nelson, presentó, al Inspector Darryl F. Gates, la idea de la creación de un pequeño grupo de policías altamente disciplinados que utilizaran armas y tácticas especiales para hacer frente a estos inusuales y complejos ataques contra el orden. Al principio el SWAT del Departamento de Policía de Los Ángeles se formó y entrenó bajo la supervisión de veteranos miembros de las Fuerzas Especiales del Cuerpo de *Marines* de los Estados Unidos, que agrupaban a las pequeñas pero muy altamente cualificadas unidades de operaciones especiales de los *Marines*, encargadas de las misiones de reconocimiento, sabotaje y lucha de guerrillas. De éstas obtuvieron la mayor parte de sus tácticas y armamento, aunque teniendo que adaptarse a las necesidades y peculiaridades de la actuación policial para que prevaleciera el lema "Salvar vidas".¹²⁴ Capacidad de respuesta de la que deberíamos dotar a nuestra PNP.

11. BOPE (Brasil)

El Batallón de Operaciones Policiales Especiales generalmente conocido por su acrónimo BOPE, es la tropa de élite de la policía militar de Río de Janeiro, Brasil. Su entrenamiento se asemeja al de los Rangers, el SWAT y otro tipo de brigadas especiales. Se caracterizan por realizar incursiones en las *favelas* del país contra el narcotráfico reinante en las mismas con una estrategia y armamento importante y potente. Cuentan con el apoyo del gobierno brasileño ya que en algunos casos, por su entrenamiento especial es el único grupo capaz de resolver conflictos que la policía convencional no puede. Actúa en operaciones de alto riesgo, incluidas las redadas en los barrios de *favelas* y las situaciones de enfrentamiento con los narcotraficantes utilizan armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Por ese motivo, el grupo está equipado con armas de uso restringido a las Fuerzas Armadas brasileñas.¹²⁵ Muy a propósito de nuestra realidad.

12. Gaula (Colombia)

Son unidades elite creadas exclusivamente dedicadas a evitar y actuar en contra del secuestro y la extorsión. Está conformado por personal altamente calificado para llevar a cabo operaciones de rescate de secuestrados y desmantelamiento de bandas criminales

¹²³ Armas y Tácticas Especiales (*Special Weapons And Tactics*)

¹²⁴ Op. cit.

¹²⁵ Op. cit.

causantes de los delitos que menoscaban la libertad personal de los colombianos. De igual modo, existe una interinstitucionalidad en los GAULA¹²⁶ que garantiza una auto-fiscalización de los procedimientos, ya que está conformado por personal del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad -policía para la seguridad del Estado-), CTI (Cuerpo Técnico Investigativo -Policía Judicial), FISCALIA y Fuerzas Militares. En este momento el país cuenta con 16 GAULA del Ejército y dos de la Armada Nacional.¹²⁷ Con el BOPE colombiano y la Brigada Halcón argentina nos presentan alternativas eficaces para enfrentar la delincuencia común y organizada.

13. Brigada Halcón (Argentina)

La Unidad fue creada en el año 1986 con el nombre de G.O.E.(Grupo de Operaciones Especiales), por el entonces Subcomisario Julio César y el Oficial Principal Claudio Rafael Pereyra, del cual dependía el entrenamiento y capacitación del Grupo, y de los tres primeros Jefes de Grupo (Alfa) Mario Caballero, (Bravo) Alejandro Volpe y (Charlie) Oficial Bonfilio, quienes realizaron cursos en el extranjero (S.W.A.T) y gracias a su entusiasmo y formación se llegó a crear la que con mucho sacrificio hoy es una de las unidades policiales más importantes de Latinoamérica, rebautizada después de los combates de la tablada en la cual tuvo su bautismo de fuego con el nombre de Brigada especial Operativa Halcón y posteriormente en el año 1996 fue necesario aumentarle el rango a División Especial de Seguridad Halcón. Cabe acotar que en realidad los primeros integrantes ingresaron en el año 1984 y luego de dos años de formación y sacrificio y tras su primer bautismo de fuego en los sucesos de la alcaldía de Mercedes, donde el escalón a cargo del Oficial Inspector Alejandro Volpe (Esc. Bravo), tras largas horas de negociación logran rescatar a los tres rehenes que habían sido capturados por tres homicidas peligrosos, todos con vida, siendo bautizados como G.O.E.- Estos Pioneros fueron los únicos que realizaron el verdadero curso de Comandos, autorizados a usar el *brevet* de comando de las Fuerzas Armadas (Ejército) con el color azul que identifica a la fuerza Policial.- De casi 1700 efectivos que se anotaron para el primer curso de formación, solo 27 lograron el tan ansiado escudo de comando.- El primer escudo utilizado por esta unidad especial fue hecho uno por uno pintado a mano, con la figura de la mujer alada de la batalla de samotracia (destinada a conmemorar una batalla naval en que los rodenses vencieron a Antíoco III de Siria. Simboliza el triunfo.) con una leyenda en su pie que rezaba "ME ATREVO", luego se

¹²⁶ Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal

¹²⁷ Op. cit.

cambio, por un tiempo nomas, la leyenda por otra que decia..."QUIEN DESAFIA AL VIENTO".¹²⁸

14. KSK (Alemania)

KSK (Kommando Spezialkräfte) es una unidad especial de la Bundeswehr compuesta únicamente por soldados de élite o más sobresalientes, escogidos uno a uno dentro de las distintas ramas del ejército alemán. Su sede principal está situada en la ciudad de Calw, estado federado de Baden-Wurtemberg. Es parte de la DSO (Division Spezielle Operationen) o División de Operaciones Especiales y Tácticas del ejército alemán, que también incluye a la Luftbrigade 26 y la Luftbrigade 31. Fue modelada a imagen y perfección del *Special Air Service* (SAS) británico y del (US SOF) *United States Special Forces* del ejército de los Estados Unidos. Actualmente el KSK figura dentro de las cinco divisiones más importantes en operaciones especiales, logística e inteligencia militar en todo el mundo.¹²⁹

15. El Grupo Alfa (Rusia)

Es la primera división especial de Rusia en la lucha contra el terrorismo. "A" fue creado el 29 de julio de 1974, dentro de la estructura del Comité de Estado de Seguridad de la URSS, bajo la iniciativa del presidente del KGB, Yuri Andropov. Desde octubre de 1991, paso a formar parte de la Dirección de Protección de Recursos, o del aparato del presidente de la URSS. Desde septiembre de 1995, forma parte de la estructura del FSB¹³⁰ de la Federación Rusa. En los inicios era el grupo "A" de la KGB de la URSS, ahora han cambiado un poco las cosas y es el Grupo "A" del FSB, de Rusia. Mundialmente es más conocido como grupo "Alfa". Se dice que oficialmente solo 4 de sus miembros han muerto en combate (hasta el Asalto al teatro de Moscú).¹³¹

16. Fernspäher (Alemania)

Los *Fernspähtruppe* son una rama del BW que forma parte de las Fuerzas Especiales. Su misión es adentrarse en territorio hostil, en profundidad, evitando entrar en combate. Las Fuerzas Especiales están especialmente entrenadas, organizadas y equipadas para realizar aquellas tareas que las fuerzas convencionales no pueden asumir. Estas tareas incluyen el

¹²⁸ Op. cit.

¹²⁹ Op. cit.

¹³⁰ Servicio Federal de Seguridad (Federálnaya sluzhba bezopásnosti)

¹³¹ Op. cit.

reconocimiento y la vigilancia; rescate de civiles, prisioneros, heridos y protección de personal VIP. Al día de hoy es la unidad más pequeña y exclusiva del ejército.¹³²

17. SASR (Australia)

El SASR (*Special Air Service Regiment*) es un regimiento de Fuerzas Especiales basado en el SAS británico y que además hereda las tradiciones de la Fuerza Especial Z y de otras unidades independientes que estuvieron operativas en el Pacífico sur durante la 2ª Guerra Mundial. Tiene su base en Campbell Barracks, Swanbourne, Perth, al Oeste de Australia y forma parte de los cuerpos de infantería australiana. Se les ha reconocido muchas veces ser una de las mejores fuerzas especiales del mundo. Su lema es “quien arriesga, gana”. Inicialmente tenía dos funciones principales, reconocimiento y acciones antiterroristas. A raíz de la desaparición de otros regimientos, también asumieron la responsabilidad de intervenir en cualquier tipo de acción directa. Durante las tareas de Reconocimiento, operan en pequeñas patrullas cuya misión es infiltrarse en territorio enemigo e informar de sus movimientos. Se evita entrar en contacto con el enemigo, aunque pueden solicitar apoyo aéreo o artillero para acabar con cualquier amenaza. Pueden infiltrarse vía aérea, marítima (submarinos incluidos) o terrestre, donde pueden cubrir largas distancias incluso en la selva o el desierto.¹³³

18. GROM¹³⁴ (Polonia)

Es la principal unidad de fuerzas especiales de las Fuerzas de Tierra polacas. Fue oficialmente establecido el 8 de julio de 1990. Puede ser desplegado en diversas operaciones especiales y tareas de guerra no convencional, incluyendo acciones antiterroristas y de proyección de poder detrás de las líneas enemigas. Es considerada la mejor fuerza de operaciones especiales de toda la nueva remesa de países que han entrado en la OTAN.¹³⁵

19. Col Moschin (Italia)

El 9º Reggimento d'Assalto Paracadutisti (9th Parachutist Assault Regiment) *Col Moschin* ("Pico Moschin") es la “niña de los ojos” o la unidad más prestigiosa del actual Ejército Italiano, en parte por su historia, pero también por el duro entrenamiento al que se somete a sus miembros. Su lema es *Della Folgore l'impeto*, que viene a ser “del trueno, la fuerza”. El

¹³² Op. cit.

¹³³ Op. cit.

¹³⁴ Acrónimo de Grupo de Respuesta Operacional que igualmente significa trueno. (Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego)

¹³⁵ Op. cit.

entrenamiento abarca unos dos años para los veteranos y unos cinco meses para los voluntarios (que tengan 1 o 2 años de servicio militar cumplidos). Equivalente en número, misiones y calidad al archifamoso SAS Británico, el 9º (o “*il nono*” como es conocido entre los militares italianos) tiene capacidad para operar en todos los entornos. Sus, más o menos, 700 miembros entrenan en montaña, bosque y desierto, así como en entornos anfibios. La especialidad del 9º es operar de manera independiente y alejado de las líneas enemigas. Desde el 2004, el *Col Moschin* está integrado en el *Comando Forze Speciali Interarma* (C.O.F.S.), el mando de las Fuerzas Especiales Italianas.¹³⁶

20. FSK (Noruega)

El FSK (*Forsvarets Spesialkommando*¹³⁷) es una unidad de operaciones especiales dependiente del Ministerio de Defensa de Noruega. La unidad como tal se constituye en 1981 para contrarrestar los ataques terroristas contra intereses noruegos, sobre todo para proteger las plataformas petrolíferas noruegas del Mar del Norte. Tiene su sede en la base militar de Rena Leir, donde comparte instalaciones con el HJK (*Hærens Jegerkommando*¹³⁸), que vendría a ser una especie de Cuartel General de grupos de operaciones especiales.¹³⁹

Notemos como los mejores grupos policiales del mundo combinan el entrenamiento militar de las fuerzas militares de élite con la adopción de tácticas especializadas para combatir la delincuencia organizada y tecnificada, dando lugar a las nuevas modalidades de prestación de servicio policial que involucra:

- Construcción de relaciones duraderas y fecundas con la comunidad.
- Manejo de grupos y formación de equipos de alta performance.
- Identificación y resolución de problemas.
- Negociación, mediación y remisión de conflictos.
- Comunicación efectiva.
- Capacitación permanente en nuevas problemáticas.

Además de las tareas tradicionales relacionadas con el cumplimiento de la ley, entre otras nuevas tareas podemos mencionar:

- Patrullajes direccionados y específicos, preferibles a los tradicionales al azar, o tipo cuadrícula.

¹³⁶ Op. cit.

¹³⁷ Comando Especial de las Fuerzas Armadas.

¹³⁸ Comando de Guardabosques del Ejército.

¹³⁹ Op. cit.

- Involucramiento con la comunidad.
- Organización de la comunidad.
- Relevamiento e información actualizada sobre la zona en que trabajan.
- Establecimiento y mantenimiento de un eficaz sistema de comunicación con las organizaciones e individuos de su zona.
- Trabajo y supervisión del voluntariado.
- Proyectos proactivos para la comunidad.
- Relación efectiva con grupos de especial atención (jóvenes, ancianos, niños, etc.).
- Prevención del desorden público.
- Construcción de redes con las ONG.
- Reunión, clasificación de información y remisión a otros organismos o agencias, sí corresponde.
- Trabajo asociativo y en red con otras instituciones del Estado provincial y municipal.¹⁴⁰

Howard Safir, quien fuera Jefe de la Policía de la ciudad de Nueva York entre los años 1996 y 2000, señala en su libro que “Los policías que recorren las calles respondiendo a la delincuencia y esperando que su presencia lo impida, están perdiendo su tiempo y nuestro dinero; mientras que los oficiales que conocen con profundidad sus vecindarios y saben dónde, cuándo y cómo se cometen los delitos pueden tener – y siempre lo han tenido – un efecto sobre la delincuencia”. Estas palabras reflejan inmejorablemente la importancia del conocimiento profundo del área de actuación, en tanto prerequisite fundamental para el buen funcionamiento de los nuevos modelos de policía.¹⁴¹

Los policías deben conocer las características socioeconómicas y humanas de su “territorio” y de las poblaciones que habitan en él. Para esto es preciso recolectar, analizar, evaluar y documentar toda la información posible. Hay que actualizar constantemente dicha información. Los Registros de Incivildad son en este sentido una excelente herramienta para la adopción de medidas. Esta sectorización debe tener en cuenta factores tales como: a) elementos históricos, sociológicos y demográficos; b) actividades económicas, comerciales e industriales y sus características en la zona; c) lugares de distracciones,

¹⁴⁰ Montbrun, Alberto. *El recurso humano de la Policía y su capacitación en el contexto de la complejidad*. Aporte al Consejo Provincial de Seguridad – Mayo, 2007, pp. 9-11. Recuperado el 22 de mayo del 2017 de http://www.albertomontbrun.com.ar/archivos/el_recurso_humano_de_la_policia_en_la_complejidad.pdf. a horas 20:00. Con algunas modificaciones con fines académicos.

¹⁴¹ Op. cit.

esparcimiento y recreación; y su estado; d) delincuencia en sus diversos aspectos; e) cuestiones urbanísticas, como tipo de edificios, ejes de tránsito, transportes públicos, etc.¹⁴² Conocimiento y establecimiento de relaciones con los actores de la comunidad local. En este rol, como en otros, los jefes y supervisores tienen que servir de motivadores, mentores, facilitadores y también como capacitadores. La asociación es necesaria porque la policía no puede hacer el trabajo sola; la prevención es más segura y efectiva; la información fluye más intensamente, el clima de trabajo es más agradable y estimulante y es la comunidad fortalece a la policía y no al revés.¹⁴³

Debemos tener presente que nuestra policía no ha sido tradicionalmente formada en una cultura de la colaboración, sino de la exclusividad en el manejo de los temas de seguridad y en un relativo aislamiento de la comunidad. Por ello, las principales barreras a la asociación son de carácter cultural, y pueden revertirse solo a partir de una revisión crítica de los “modelos mentales” imperantes.¹⁴⁴

En todo el proceso de las nuevas modalidades de policía es crucial el tema de la adecuada comunicación entre la policía y su comunidad. Esto permite construir confianza, identificación demandas de atención, generar diálogo y apertura y recibir información. El autor refiere que en Mendoza los policías –en todos los niveles– son constantemente trasladados de un lugar a otro sin posibilidad de arraigar o conocer en profundidad las situaciones locales que generan delito, desorden o temor. Además, su actuación sigue siendo absolutamente pasiva y dispersa, no concentrando efectivamente su atención y actuación en desalentar la comisión de delitos. Esto se puede observar actualmente con los policías que vemos en la vía pública.¹⁴⁵

La complejidad e interdependencia del mundo actual reclaman un policía adecuado a esas circunstancias, con capacidad para actuar de manera creativa e innovadora en la provisión de respuestas a los problemas de seguridad y combinando la formación profesional del generalista con las especialidades emergentes.¹⁴⁶

La tendencia a la profesionalización de la policía es un dato muy importante del mundo desarrollado. El nivel de complejidad de situaciones sociales que el policía debe enfrentar cotidianamente en su labor, sumado a su mayor nivel de protagonismo en los diagnósticos

¹⁴² Op. cit.

¹⁴³ Op. cit.

¹⁴⁴ Op. cit.

¹⁴⁵ Op. cit.

¹⁴⁶ Op. cit.

situacionales y en las decisiones operativas hacen que requiera un importante nivel de capacitación a lo que se suma el uso no traumático sino natural y normal de la tecnología.¹⁴⁷

También en este tema estamos muy atrasados. Decíamos hace poco en una nota periodística que para ser policía en Nueva York (ciudad recurrentemente utilizada por nuestros líderes como modelo a copiar, nosotros disentimos) se requiere un mínimo de sesenta créditos universitarios que es el equivalente a una licenciatura. Pero este requisito se ha generalizado en muchísimas policías en el mundo y parecía ser el modelo mental de los reformadores de 1998 – 1999.¹⁴⁸

Los estudios de campo llevados adelante en 2000, en el marco de la operatoria AR 0247 (Córdoba, Santa Fé, Mendoza, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, partidos de la provincia de Buenos Aires), como así mismo las investigaciones que viene desarrollando la Dirección Nacional de Política Criminal, permiten determinar una serie de espacios en los cuales es posible iniciar procesos de fortalecimiento institucional, actualización doctrinaria y capacitación y reciclaje del personal policial, pero para ello se considera necesario un proceso previo de decisiones políticas vinculadas al “modelo” de sistema de seguridad que se desea implementar.¹⁴⁹

Al mismo tiempo, en nuestro país se insiste tercamente en recetas notoriamente anacrónicas (más compra de vehículos, más penas en los códigos, más cárceles, más policías, más represión penal a niños y jóvenes disfuncionales) mientras se condena al actual recurso humano de la seguridad a situaciones de desasistencia y escasa capacitación y a seguir evolucionando en un modelo agotado.¹⁵⁰

Si no cambia el modelo mental de nuestros líderes y no se comienza a advertir que es imposible resolver un problema desde la misma lógica desde la cual el problema se ha generado, será tal vez nuestro destino seguir asistiendo al incremento de la inseguridad hasta niveles de metástasis social.¹⁵¹

¹⁴⁷ Op. cit.

¹⁴⁸ Op. cit.

¹⁴⁹ Montbrun, Alberto. *Policía y seguridad pública: Modelos en marcha*. LA LEY – Gran Cuyo, Mendoza, Argentina; año VI, N° 1, febrero 2002, p. 10. Recuperado el 22 de mayo del 2017 a horas 15:36 de http://www.albertomontbrun.com.ar/archivos/policia_y_seguridad_modelos_en_marcha.pdf. Con algunas modificaciones con fines académicos.

¹⁵⁰ Op. cit.

¹⁵¹ Op. cit.

Anexo: Cuadro comparativo Policía tradicional y nuevos modelos de policía

POLICIA TRADICIONAL	NUEVOS MODELOS
Reactiva	Proactiva
Centralizada	Descentralizada
Perfil militarista	Perfil civil: profesional de la disfunción
Respuesta unificada	Respuesta múltiple
Basada en números	Basada en conceptos
Trabajando "por" la comunidad	Trabajando "con" la comunidad
Aislada del poder civil	Integrada al poder civil
Provedora de respuestas	Articuladora de respuestas
Orientada a la acción postdelictual	Orientada a la prevención
Los jefes deciden	Los policías deciden
Actuación reglada	Actuación discrecional con código ético
Guiada por tareas	Guiada por obtención de resultados
Organización jerárquica / vertical	Organización heterárquica/chata, en red
Modelo de liderazgo: mando, autoridad, poder	Modelo de liderazgo: ejemplo, estímulo, facilitación
Exclusiva: ellos y nosotros	Inclusiva: todos (aún los que no nos gustan)
POLICIA TRADICIONAL	NUEVOS MODELOS

Recuperado de http://www.albertomontbrun.com.ar/archivos/policia_y_seguridad_modelos_en_marcha.pdf

Existen aspectos que deben considerarse para efectos de legitimación:

- Transparencia (legitimación procesal)

Uno de los conceptos fundamentales para el mejoramiento de la administración y eficacia de la policía es el de la rendición de cuentas, la policía debe responder a la ciudadanía por su manera de actuar. Bajo éste criterio es fundamental que la información sobre la policía sea pública y accesible, por lo que se debe permitir suficiente información para que el público sepa lo que pasa, pero sin violar los derechos humanos de los policías; por lo tanto no es aconsejable, por ejemplo, hacer público el nombre de un policía bajo investigación, debido a las posibles represalias sociales injustificadas que esto podría acarrear. Asimismo, para que la información pueda ser debidamente comprendida, es necesario educar a la población sobre la policía, su función y su trabajo. Esta educación, que tiene la virtud de promover la cooperación de la ciudadanía, puede tomar varias formas. Una de ellas es lo realizado por la policía de

Seattle (EE UU), que para mejorar la comunicación entre la policía y el público, realizan reuniones periódicas, lo que permite la interacción directa, el cuestionamiento y el contacto humano, estas juntas son muy baratas y muy efectivas para restablecer los vínculos de confianza, por lo que tienen gran sentido económico. Otra son las academias ciudadanas de policía, estrategia que consiste en invitar a la población a entrenamientos policiales cortos; no para hacer su trabajo, sino para generar empatía con los policías y comprensión sobre la complejidad y dificultad de su trabajo. Éste es un modo innovador de propiciar mayores niveles de cooperación ciudadana.¹⁵²

- Confianza en la PNP: la sociedad y el Estado no valoran lo suficiente la labor de la institución y de sus miembros.
- Control de confianza policial. ¿Cómo se mide?

Es útil conocer que en países con una realidad muy similar a la nuestra como México existe para este efecto el Centro de Evaluación y Control de Confianza, que es un órgano desconcentrado de la Procuraduría General de la República; se rige bajo los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, disciplina y respeto a los derechos humanos, con la finalidad de fortalecer la procuración de justicia. Tiene a su cargo la aplicación, calificación y valoración de los procesos de evaluación de control de confianza, del desempeño y competencias profesionales que se aplican para el ingreso y permanencia de los servidores públicos; dichas evaluaciones se aplican bajo la normatividad del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, la Ley Orgánica de la PGR y su reglamento.

- Criterios de medición. Las evaluaciones que realiza el CECC son:
 - **Evaluación de Control de Confianza;** consta de 5 exámenes:
 1. Entorno social y situación patrimonial: se verifica la congruencia en la información proporcionada y la documentación presentada, con el fin de analizar si el entorno en el cual se desarrolla el servidor público se apega a los principios que rigen a la institución.
 2. Psicológico: busca conocer e identificar las características de personalidad, inteligencia y habilidades generales del personal evaluado.

¹⁵² Dash, Scott. Álvarez, Álvaro. *Función policial y transparencia* (Conferencia). Serie Cuadernos de Trabajo del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde). Número 15. Octubre de 2006, Ciudad de México. Recuperado el 07 de marzo del 2018 a horas 11:39 de <http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2013/08/NO.-15.pdf>, con algunas modificaciones con fines académicos.

3. Poligráfico: a través de reacciones psicofisiológicas se detecta si el evaluado se conduce con veracidad en la información que proporciona y su conducta se rige por los principios constitucionales y legales del servicio público.
 4. Médico: se aplica para conocer el estado general de salud, detectar alguna enfermedad o padecimiento.
 5. Toxicológico: Determina si el servidor público ha ingerido o ingiere sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.
- **Evaluación de Competencias:** determina si los servidores públicos cuentan con los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes, necesarias para realizar una función en específico.
 - **Evaluación del Desempeño:** analiza la actitud y comportamiento en el ejercicio de las funciones realizadas por los servidores públicos, a fin de identificar aquellos factores que inciden en su desarrollo profesional y así establecer programas y acciones para mejorar su desempeño. Se aplica anualmente al personal activo, que cuente, por lo menos, con seis meses cumplidos laborando en la institución.
 - La certificación tiene una vigencia de tres años y se expedirá al concluir los procesos de evaluación y control de confianza, del desempeño y de competencias profesionales, y tendrá por objeto acreditar que la persona evaluada es aprobada para ingresar o permanecer en la Procuraduría (u otra entidad) y que cuenta con los conocimientos, perfil, habilidades y aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.¹⁵³
 - **Inteligencia.**

La inteligencia policial tiene como fin la obtención de información que ayude al Estado a combatir al crimen. Esto puede representarse en distintas formas, ya sea como espionaje, intervención, seguimientos, etcétera.

La inteligencia policial es muy útil cuando se trata de combatir al crimen organizado. Estas organizaciones (tales como la mafia, los narcotraficantes, las maras, las bandas dedicadas a trata de blancas, etc.) suelen ser organizaciones cerradas que cuentan con el apoyo de terceros, vía soborno o extorsión.

Esta inteligencia puede ser realizada bien por parte de los organismos policiales respectivos de cada país, bien por oficinas especializadas en temas específicos, como la DEA estadounidense, dedicada al combate de la droga.
 - **Operativa**

¹⁵³ Portal de la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos. *Centro de Evaluación y Control de Confianza*. Recuperado el 07 de marzo del 2018 a horas 12:13 de <http://www.pgr.gob.mx/Transparencia/Paginas/Evaluacion-y-Control-de-Confianza.aspx>, con algunas modificaciones con fines académicos.

La inteligencia operativa policial se ubica dentro de la Ciencia Policial y constituye en una nueva y superior forma de combatir el crimen organizado. Es una teoría y método de investigación contra el delito organizado que busca desarticular o neutralizar las organizaciones terroristas a través de la detención o captura de sus jefes, cabecillas o dirigentes a través de operaciones operativa de inteligencia policial.¹⁵⁴ Representa el nivel más visible de la inteligencia como actividad, y contempla un espectro menor de tiempo y espacio, ya que se enfoca a la intervención directa en un tema o fenómeno a corto plazo, para incidir directamente en él, de acuerdo con los planteamientos táctico-estratégicos.¹⁵⁵

- Social

Los ciudadanos son la inteligencia social de la policía para combatir a la delincuencia y a través de la denuncia, así como de la participación ciudadana, se generan acciones coordinadas que permiten inhibir el delito; la denuncia ciudadana permite a la dependencia policial generar modelos operativos para combatir a la delincuencia e inhibir la comisión de ilícitos.

- **Control psicológico del personal policial (baremación de los test)**

La Policía, como todas las entidades cuya labor tiene efecto sobre los demás, son objetivo lógico para la Psicología. Tanto en su funcionamiento interno, como si observamos su actividad hacia el exterior. Es así que podemos considerar cuatro grandes áreas de actuación psicológica en la Policía: 1ª) Selección. 2ª) Formación; y 3ª) Asistencia.

SELECCIÓN.- Es el primer momento en el que la Psicología, por su peso específico, interviene en el mundo policial. **En primer lugar se debe analizar la organización.-** Es decir, la organización policial actual, dentro de la disciplina, exige que todo funcionario disponga de una mayor capacidad de análisis de las situaciones para tomar decisiones, y para conseguir que sus interacciones sociales, mucho más amplias e inevitables, sean llevadas a cabo en forma positiva. Asimismo la selección no ha de utilizar un instrumento basado sólo en su fiabilidad, sino que ha de servir para detectar la idoneidad del sujeto para ejercer un trabajo policial. Esto ya nos da una pista respecto a

¹⁵⁴ Jiménez, Benedicto. *La inteligencia operativa policial*. Patrulleros.com. Recuperado el 07 de marzo del 2018 a horas 12:29 de <http://www.patrulleros.com/articulos-63633/61-policiales13/3401-la-inteligencia-operativa-policial>, con algunas modificaciones con fines académicos.

¹⁵⁵ Moloeznik, Pablo; Balcázar-Villarreal, Manuel. *Inteligencia operativa. Aproximación a la inteligencia policial (la Policía Federal de México, 2006-2012)*. Recuperado el 07 de marzo del 2008 a horas 12:38 de file:///C:/Users/INTEL/Downloads/Dialnet-AproximacionALaInteligenciaPolicialLaPoliciaFedera-4451470.pdf, con algunas modificaciones con fines académicos.

las demandas que una organización policial ha de buscar y descubrir en los aspirantes a formar parte de la misma. Psicológicamente, todo policía, por el hecho de serlo, y con independencia del puesto que ocupe, debe reunir una serie de características de personalidad, y de aptitudes psicofísicas para ejecutar su labor de forma adecuada.

Las aptitudes y rasgos exigibles son los siguientes:

Aptitudes: capacidad de análisis, capacidad de alerta y atención concentrada, capacidad de atención mantenida, capacidad para el análisis rápido de situaciones complejas, perseverancia, memoria visual, fluidez verbal, coordinación motora y destreza física.

Rasgos personales: autocontrol de los impulsos y emociones, sentido de la autocrítica, seguridad en sí mismo, sentido de la autoridad, firmeza personal, resistencia a la frustración, capacidad empática y manejo de la relación interpersonal, neutralidad afectiva en el ejercicio profesional, objetividad, iniciativa, capacidad de integración en el grupo y desarrollo de conductas cooperativas, capacidad de auto motivación.

Como complemento al análisis organizacional y sus demandas, también se han de **examinar las características del puesto a cubrir**. En este sentido, es de señalar que dentro de la Policía, son tantas las funciones a realizar, distintas y distantes, que este análisis resulta más complejo, e inicialmente al menos, debería quedar para más adelante, cuando el sujeto, ya dentro de la organización, tenga que ser destinado a un servicio concreto. Una primera división en el tipo de puestos de trabajo la descubrimos cuando vemos que el colectivo actúa en dos grandes áreas, una, de servicio en la calle, en primera línea, y otra, de servicio interior, que prácticamente no ha de contactar con el público, ya que desarrolla su labor a nivel interno. Aparte, dentro de cada área, son múltiples las funciones, como la de prevención, de uniforme (más pasiva), o grupos operativos (que se destacan por su comportamiento activo). Incluso en el área interior, no es asimilable la labor frente a un terminal informático, a la de realizar un análisis de sangre, o a la de recepción de denuncias.

Por otra parte, si contemplamos lo distinto que es ser mandado a mandar, también detectamos diferencias sustanciales en cuanto a las variables psicológicas necesarias para que el sujeto desempeñe sus tareas en función de su nivel jerárquico. Evidentemente, la Psicología es parte fundamental en el proceso selectivo de los policías, hasta el punto de que pocas profesiones son tan exigentes en este campo.

INGRESO.- Concretándonos al ingreso se puede realizar a dos niveles: el de la **escala general**, con funciones de vigilancia y prevención, de uniforme generalmente, y el de la **escala especializada**,

con funciones de investigación y dirección técnica. En ambos casos, entre las pruebas que han de superar los aspirantes figuran dos referidas a nuestro interés:

1ª.- De conocimientos.- Con temario de ciencias sociales. En el caso de la Escala Ejecutiva, prácticamente todos los temas son netamente psicológicos como nos lo muestran sus títulos: Concepto de la naturaleza humana, teorías explicativas del comportamiento humano, percepción, memoria, teorías de la personalidad, etc.

2ª.-Psicotécnica.- Con dos partes: a) Cumplimentar varios *tests* objetivos, para detectar aptitudes y actitudes para el desempeño de la función policial. b) Entrevista personal, en la que se han de investigar los factores de personalidad. Esta es llevada a cabo por psicólogos, bien funcionarios policiales, o bien contratados.

Dentro de la prueba médica, como es lógico, se consideran causas de exclusión determinadas enfermedades mentales como la depresión y la psicosis.

ASCENSOS.- Los ascensos dentro de la institución exigen también la superación de unos filtros. Por ejemplo, los componentes de la escala especializada, en cuanto a características de personalidad que les permitan ejercer como directores y gestores humanos, en la nueva responsabilidad a la que acceden.

FORMATIVA.- Las interacciones que los funcionarios policiales llevan a cabo con las personas de su entorno, exigen que dispongan de recursos psicológicos y conductuales para que esas intervenciones sean controladas y satisfactorias en su desarrollo y finalización, por lo que resulta imprescindible inculcarles esos conocimientos y técnicas a tres niveles:

1º nivel, de carácter interno: Referido al propio sujeto, y en él se tratan las actitudes personales, de forma que resultaran positivas hacia sí, hacia la institución y hacia la labor que realiza, así como la seguridad en sí mismo, el autocontrol emocional, etc.

2º nivel, de relación con los demás: Adquisición y dominio en habilidades sociales, en comunicación positiva, persuasiva, etc. Con estas técnicas se trata que el agente policial desempeñe su labor con una mayor eficacia, y menor conflictividad en todos los órdenes.

3º nivel, específico: Para saber afrontar demandas más complejas, tanto por las situaciones como por la responsabilidad del que actúe. Por ejemplo, entrenamiento en las técnicas más avanzadas en Resolución de Problemas, Intervención en Crisis, Toma de Decisiones, Gestión de Recursos Humanos, etc. Sin embargo la experiencia y la realidad, demuestran la conveniencia de ampliar en el tiempo y en profundidad estas materias a lo largo de toda la carrera. O lo que es lo mismo, toda esta enseñanza no ha de limitarse al período de formación inicial ni puntual, sino que debe

continuarse en los mismos lugares donde se ejerce el servicio, pasando por una descentralización práctica de la misma.

ASISTENCIAL O DE SALUD MENTAL.- La tarea policial presenta unas características muy especiales en cuanto a su desempeño, como son el contacto constante con multitud de miembros de la sociedad, el afrontamiento de situaciones muy singulares y el riesgo inherente al uso de la fuerza, tanto por pasivo como por activo. Su trabajo diario constituye un banco de pruebas constante para el profesional, en el que se somete a examen su equilibrio psíquico. Un trabajo así genera forzosamente un estresor continuo que puede afectar al individuo con menoscabo de su estabilidad psíquica.

Un factor de máximo interés a meditar es la doble incidencia que tiene la función policial, sobre el policía como persona y sobre la sociedad en cuyo seno trabaja, lo cual requiere que este funcionario posea el mayor nivel de normalidad psíquica posible, y que disponga de recursos mentales para desenvolverse de una forma adecuada en cada situación dada. Igualmente obligado es el que la Institución conozca en todo momento el estado mental de su personal y obre en consecuencia.¹⁵⁶

Desde estas consideraciones surge la necesidad de que la organización policial, como cualquier organización compuesta por seres humanos, establezca servicios específicos para poder atender a quienes por causas personales o profesionales muestren problemas de tipo psíquico, es decir, que ha de cuidar de la salud mental de su personal, por éste y por la Institución.

Cuando alguien padece una alteración psíquica se produce un malestar subjetivo en el individuo, que puede interesar toda su esfera vital, y por tanto, su conducta particular y profesional. Unido a ello, será la familia la que resulte perjudicada por su comportamiento. Además, en el trabajo de un policía, se han de tener muy en cuenta las consecuencias negativas que pueden derivar sobre la sociedad. Si el afectado continúa prestando servicio, su comportamiento profesional también sufrirá los efectos de su desequilibrio, con perjuicio para su Institución y para el ciudadano con el que intervenga. Una actividad preventiva que no puede faltar es el deber de supervisión de la Institución, desde el punto de vista de equilibrio psicológico, que ha de ejercer sobre las personas que pertenecen al colectivo, para evitar conductas negativas incluso fuera del servicio.

SERVICIOS ASISTENCIALES.- Como ya es sabido, en cualquier organización profesional, la salud mental de sus componentes se considera como un objetivo prioritario dentro de la búsqueda de su salud general. Y puede lograrse desde la prevención y desde la intervención. Sus funciones son,

¹⁵⁶ Yagüe, Marcelino. *Psicología Policial*. Papeles del psicólogo, 1994, vol. 60. Recuperado el 07 de marzo del 2018 a horas 13:09 de <http://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=646>, con algunas modificaciones con fines académicos.

entre otras: a) Determinar los factores que puedan incidir negativamente en la salud mental de los componentes del colectivo policial. b) Detección precoz de las psicopatologías. c) Orientación psicológica a los funcionarios policiales que tengan dificultades de obtenerla en otros centros.¹⁵⁷

Directrices orientadoras

- Sobrecarga (OAF y otros)

Existen tipos penales que terminan siendo el lastre más pesado de la carga procesal, como el de Omisión a la Asistencia Familiar, los mismos que deberían ser tratados, en una primera etapa, por una sección especial de la PNP, la misma que terminaría con la asignación convencional de una pensión alimenticia provisional con conocimiento de la Fiscalía de Familia, válida por un plazo prudencial, al cabo del cual el Fiscal que conoce solicitaría su convalidación ante el Juez de Familia y en caso contrario remitiría los actuados al Fiscal Penal que vía proceso inmediato perseguiría la condena del imputado.

- Delitos menores (conflictos sociales incipientes)

Su tratamiento estaría a cargo de la PNP, con participación desde el inicio del MP, el mismo que después de la indagación y de verificar los antecedentes del imputado pasaría discrecionalmente a disponer que sea tratado como Faltas o a la aplicación del Principio de oportunidad, si reúne las condiciones, lo que permitiría que muy excepcionalmente se formalice una Investigación Preparatoria.

- Delitos culposos de alta incidencia

Creemos que tratándose generalmente de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud generados por accidentes de tránsito, debería privilegiarse ante la PNP los acuerdos privados, con participación de las empresas aseguradoras y el MP, siendo que éste último coadyuvaría los acuerdos reparatorios satisfactorios para las partes.

- Crimen organizado y corrupción

Las entidades del Estado como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), SUNAT, Contraloría General de la República, designarían personal que trabaje permanentemente y en equipo con la PNP y el MP, dotados de recursos financiados con los recursos provenientes de las mismas organizaciones criminales desbaratadas, deberán avocarse exclusivamente a caminar un paso delante de este tipo de organizaciones y funcionarios para poder neutralizar su actividad y someter a sus integrantes y actores a proceso penal.

- Delitos violentos

¹⁵⁷ Op. cit.

Aquí estamos frente a las incidencias que abarcan un gran número de conductas ilícitas establecidas en el Código Penal, en que se afectan principalmente la vida, la integridad física o psíquica de las personas, la libertad personal o seguridad individual, y la propiedad, por lo tanto, involucran tanto los delitos de parricidio, homicidio simple y calificado, infanticidio, feminicidio, secuestro, sustracción de menores, lesiones, y aborto, como los distintos tipos de robos, tales como robos calificados, robos con violencia o intimidación, robos en lugar habitado y robos en lugar no habitado. Se incluyen además, dentro de esta especialidad, los cuasidelitos cometidos por profesionales de la salud. Ilícitos que deberían enfrentarse creándose fiscalías especializadas en la persecución penal de los delitos violentos, y por parte del Ejecutivo una unidad especializada que proporcionaría asesoría a todos los fiscales del país y colaboraría en la coordinación interinstitucional, apoyando en las diversas áreas que requiera la investigación, y brindaría capacitación continua en la materia. Por otro lado para asegurar el éxito y la alta calidad de las investigaciones, el MP, priorizando este tipo de casos, trabajaría mancomunada y coordinadamente, tanto con instituciones claves para el abordaje de esta especialidad, como con la PNP y sus brigadas o grupos especializados, para lo cual deberían potenciarse las mismas.

- **Coordinación interregional y resolución de la relación de la policía con los gobiernos locales**

Son muy pocas las regiones del país en que realmente existe un Comité de Seguridad Ciudadana que medianamente funcione, para ello debemos comenzar por entender que todos debemos remar en el mismo sentido no solo al interior de la región sino también interregionalmente para ello consideramos que es fundamental que funcione adecuadamente el trinomio Gobierno Regional, Gobierno Local, PNP, porque hasta ahora lo único que se ha visto son desempeños con ánimo de rédito político.

3.2.3 Aspecto de reforma procesal penal

Antecedentes

- El NCPP fue promulgado el 28 de julio del 2004 para ser aplicado en todo el territorio nacional, sin excepción alguna. Sin embargo, se consideró adecuado llevarlo a la práctica en forma progresiva, es decir, inicialmente en unos cuantos distritos judiciales, y poco a poco en más. Huaura (1 de julio de 2006), La Libertad (1 de abril de 2007), Tacna y Moquegua; (1 de abril de 2008); Arequipa (1 de octubre de 2008); Tumbes, Piura y Lambayeque (1 de abril de 2009); Cusco, Puno y Madre de Dios (1 de octubre de 2009); Ica

y Cañete (1 de diciembre de 2009); y San Martín, Amazonas y Cajamarca (1 de abril de 2010).

- Esta implementación gradual se debe a que el aprendizaje es un proceso acumulativo; es decir, las lecciones adquiridas en las primeras experiencias serán recogidas en las demás. Hay que tener en cuenta que el proceso de implementación necesariamente tiene aspectos positivos y negativos, y por eso es necesario perfeccionar los primeros y corregir los segundos.
- El distrito judicial de Huaura fue el elegido para aplicar el plan piloto de implementación del nuevo modelo procesal penal. Después se pasaría a otros como La Libertad, Moquegua, Tacna y finalmente Lima, último lugar donde se pondría en vigencia el NCPP.
- La Comisión de Implementación del NCPP escogió ese distrito judicial porque, al tratarse de un plan piloto, se requería que fuera un distrito judicial de dimensiones razonables y cuya carga procesal en lo penal fuera representativa del tipo de casos que se procesan en la mayoría de distritos judiciales del país. Otra razón fue porque Huaura se encuentra cerca del núcleo principal del sistema de justicia, el distrito judicial de Lima.
- Cabe señalar que este cronograma, por decisiones políticas, ya ha sido modificado en más de una ocasión.
- Finalmente, la implementación progresiva a la que hacemos referencia fue muy necesaria porque la aplicación del NCPP supone cambios sustanciales tanto en la estructura como en la concepción del proceso penal y, por ende, en la mentalidad de los jueces, de los fiscales y, en general, de todos los actores del sistema de justicia.¹⁵⁸

3.2.4 Etapas del nuevo proceso penal

a) La investigación preparatoria (IP)

El fiscal, con ayuda de la PNP, cumple la tarea de dirigir la investigación del presunto hecho delictivo, con la finalidad de determinar si procede o no la acusación contra el imputado.

b) La etapa intermedia (EI)

El juez de la investigación preparatoria revisará la decisión del fiscal y determinará si se continúa o no con el juicio oral.

c) El juicio oral (JO)

¹⁵⁸ Instituto de Defensa Legal. *¿Cómo es el proceso penal según el nuevo Código Procesal Penal?*. Bellido Ediciones E.I.R.L. Lima 2009 p 13. Recuperado el 28 de diciembre del 2016 a horas 13:00 de <http://www.derechoycambiosocial.com/revista019/como%20es%20el%20proceso%20penal%20segun%20NCP.pdf>.

Se lleva a cabo el juzgamiento del imputado y se pugna por llegar a una sentencia definitiva, que responda a las pruebas y los argumentos esbozados en la audiencia.¹⁵⁹

d) La segunda instancia o apelación

Luego de culminada la etapa de juicio oral, se iniciará la llamada segunda instancia de un proceso penal, en la cual se revisará la sentencia emitida al finalizar el juicio oral de la primera instancia.

Esta doble instancia se produce porque así lo exige el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, que determina que toda decisión judicial podrá ser revisada en una segunda instancia, por constituir un derecho fundamental de todo ciudadano.

Sin embargo, cabe señalar que la segunda instancia se concretará única y exclusivamente si el fiscal —como representante de los intereses de la sociedad—, el abogado defensor —en representación del imputado— y/o la parte civil —en el caso de que se haya dado una sentencia absolutoria— apelan la sentencia de primera instancia. Cabe aclarar que si la sentencia ha sido condenatoria, la parte civil solo podrá apelar con respecto a la reparación civil que se le haya asignado, mas no respecto a la pena atribuida al imputado.¹⁶⁰

3.2.5 Ámbitos del proceso penal. La etapa policial

Si bien no son etapas del proceso penal propiamente dicho, existen dos ámbitos que no se pueden dejar de mencionar: la etapa policial y la segunda instancia o apelación.

La etapa policial comprende las siguientes diligencias:

- En caso de flagrancia, la PNP detendrá al presunto implicado.
- La PNP recibe las denuncias de los delitos cometidos, aunque estas también se pueden interponer en cualquier fiscalía.
- Si bien el espíritu del NCPP espera que la PNP ponga inmediatamente la denuncia en conocimiento del Ministerio Público, en la práctica esta realiza una primera investigación de los hechos delictivos, y si considera que el delito efectivamente se cometió, remite el caso al Ministerio Público; de lo contrario, lo archiva. Sin embargo, la PNP debería encaminarse a que sea el Ministerio Público el que tome las decisiones fundamentales en los casos penales en investigación.¹⁶¹

3.2.5.1 Funciones de la PNP en la investigación preparatoria

3.2.5.1.1 Atribuciones directas

¹⁵⁹ Op. cit. p. 33

¹⁶⁰ Op. cit. p. 35

¹⁶¹ Op. cit. p. 34

Si bien las principales atribuciones de la PNP en cuanto a la investigación de delitos deberán ser puestas en práctica por requerimiento de un fiscal, existen una serie de tareas que esta institución debe realizar sin necesidad de contar con ese requerimiento. A continuación se describen las principales:

- Recepción de denuncias. La PNP tiene la atribución de recibir las denuncias escritas u orales de los agraviados o de terceros que se acerquen a alguna de sus sedes, así como la obligación de dar cuenta inmediatamente de esos hechos a un fiscal.
- Arresto en caso de flagrancia. Los miembros de la PNP podrán capturar a los presuntos autores de un delito exclusivamente en el caso de que lo hayan presenciado, y además, deberán leerles sus derechos en forma inmediata.
- Incautaciones. En caso de flagrancia, la PNP podrá incautar —elaborando un inventario— todo elemento que haya sido utilizado para cometer el delito. Asimismo, en caso de que exista el peligro inminente de la comisión de un delito, podrá incautar todo elemento que pudiera ser utilizado para tal fin.
- Delimitación y protección de la zona del delito. A fin de que el material probatorio no se pierda ni sea borrado de la escena del delito, la PNP tiene el deber de delimitar el lugar de los hechos e impedir el acceso de cualquier tercero hasta la llegada del fiscal de turno.
- Prestar auxilio a las víctimas del delito. En caso de que las víctimas del delito requirieran primeros auxilios, la PNP deberá brindarlos a la brevedad posible.¹⁶²

3.2.5.1.2 Por solicitud del fiscal

- Recoger el material probatorio.
- Levantar y conservar los objetos e instrumentos relacionados con el delito, así como todo elemento material que pueda servir en la investigación fiscal, tal como documentos privados.
- Identificar a los autores y partícipes del delito.
- Practicar las diligencias orientadas a la identificación física de los autores y partícipes del delito.
- Tomar declaraciones tanto de los presuntos autores del delito o de sus partícipes como de quienes hayan presenciado la comisión de los hechos. En el primer caso, la PNP puede tomar las declaraciones siempre y cuando los presuntos autores cuenten con la presencia de su abogado defensor; si no es así, el interrogatorio se limitará a constatar la identidad de los presuntos autores.

¹⁶² Op. cit. p. 42

- Levantar la documentación en el lugar de los hechos, es decir, levantar planos, tomar fotografías, realizar grabaciones en video y demás operaciones técnicas o científicas.¹⁶³

3.2.5.1.3 Obligaciones de la PNP luego de realizadas estas diligencias

La PNP deberá levantar un acta de cada una de las diligencias realizadas, y deberá poner estos documentos a disposición del fiscal a la brevedad posible, acompañados de cualquier material probatorio que hubiera recogido.¹⁶⁴

3.2.5.1.4 La detención en caso de flagrancia

En caso de que la PNP presencie la comisión de un delito, tendrá la facultad de capturar a los presuntos autores. Inmediatamente después de que se produzca la detención, los miembros de la PNP deberán proceder a leerle al detenido los derechos que lo asisten.

La flagrancia se produce cuando:

- El sujeto es descubierto en plena realización del hecho delictuoso o acaba de cometerlo.
- El sujeto huye, pero es identificado inmediatamente después de la ejecución del hecho delictuoso y es encontrado en un lapso de 24 horas después de producido este. La identificación se podrá realizar de la siguiente manera: i) mediante el testimonio de la persona afectada, ii) a través del testimonio de alguna persona que haya presenciado la realización del hecho delictuoso y iii) si se cuenta con alguna imagen en la que se haya registrado la realización de este hecho.
- El sujeto es encontrado en el lapso de 24 horas de producido el hecho delictuoso con algún instrumento que empleó para cometer el delito, o en su cuerpo o su ropa existe alguna señal que indica su probable autoría o participación en la realización del delito.¹⁶⁵

3.2.5.1.5 La detención preliminar

Luego de haber realizado los trámites correspondientes, el fiscal puede solicitar al juez de la investigación preparatoria que ordene la detención preliminar del sujeto mientras dure el proceso. De este modo, una vez que el juez haya emitido la orden de detención preliminar, esta será enviada a la PNP para que pueda llevar a cabo la detención.

Es necesario recalcar que la PNP no puede actuar por iniciativa propia, sino que para proceder a la detención preliminar del imputado se requiere que exista la mencionada orden judicial.

¹⁶³ Op. cit. p. 42

¹⁶⁴ Op. cit. p. 43

¹⁶⁵ Op. cit. p. 61

3.2.5.1.5.1 Supuestos establecidos por el NCPP en los cuales el juez ordena este tipo de detención:

- Cuando no se dio ninguno de los supuestos de flagrancia, pero existen razones suficientes para considerar que la persona ha cometido un delito que debe ser sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, hay peligro de que el acusado fugue.
- Cuando el sujeto que fue sorprendido en flagrante delito logró evitar ser detenido.
- Cuando el detenido se fugó del centro de detención preliminar.

3.2.5.1.5.2 Contenido de la orden de detención preliminar

La orden de detención (auto) deberá contener los datos de identidad del acusado — nombres y apellidos completos, edad, sexo, y lugar y fecha de nacimiento—, así como un resumen de los hechos que han motivado la detención y las normas legales aplicables.¹⁶⁶

3.2.5.1.6 El arresto ciudadano

El arresto es una medida de privación de la libertad que tiene distintos objetivos, pero fundamentalmente el de ser una forma de represión de delitos, es decir, cumplir la función de sanción.

En otras palabras, el arresto es aquella actividad realizada por la policía nacional con el apoyo de autoridad competente, quienes actúan en el contexto del inicio de una investigación que requiere la detención de una persona ya sea por flagrancia delictiva o para fines de investigación criminal.

No resulta necesaria la inmovilización de la persona arrestada ni que la privación de su libertad se lleve en un centro penitenciario, en tanto el mismo puede producirse en su lugar de residencia (arresto domiciliario).

Sin embargo, la norma penal faculta también a los ciudadanos para que realicen un arresto en determinadas situaciones. Es así, que toda persona podrá realizar el arresto de la persona que estuviese cometiendo delito flagrante, desde que entró en vigencia la Ley N° 29372 que modifica los artículos 259° y 260° del Código Procesal Penal, referidos precisamente al arresto ciudadano y a la detención sin mandato judicial.

La primera disposición establece que la Policía detendrá, sin necesidad de mandato judicial, a quien sorprenda en flagrante delito. Existirá flagrancia, además, cuando la realización del hecho punible es actual y, en esa circunstancia, el autor es descubierto, o cuando es perseguido y capturado inmediatamente después de haber realizado el acto punible, o si es

¹⁶⁶ Op. cit. p. 62

sorprendido con objetos o huellas que revelen que acaba de ejecutar el ilícito penal.

Si se tratara de una falta o delito sancionado con una pena no mayor de dos años de privación de la libertad, luego de los interrogatorios de identificación y demás actos de investigación urgentes, podrá ordenarse una medida menos restrictiva o en todo caso su libertad.

Por su parte, el artículo 260° modificado por la Ley N° 29372, precisa que en los casos antes descritos, toda persona también podrá proceder al arresto cuando se esté ante la situación de flagrancia delictiva. Asimismo señala que la persona que realiza el arresto deberá entregar en forma inmediata a la persona arrestada a la dependencia policial más cercana, así como aquellos objetos que puedan tener relación con el delito.¹⁶⁷

De lo que se puede concluir que si bien como regla general la PNP es la encargada de detener a las personas, según el NCPP existen algunos supuestos en los cuales, de manera excepcional, los ciudadanos pueden arrestar a otros ciudadanos. Así, una persona podrá detener a otra si la encuentra en alguno de los supuestos de flagrancia explicados anteriormente. Si esto sucede, el ciudadano deberá entregar inmediatamente al arrestado, junto con los objetos que constituyen la evidencia del delito, al policía que se encuentre más cercano.¹⁶⁸

Asimismo que es una facultad, no una obligación del ciudadano. Que únicamente procede en caso de flagrancia delictiva (flagrancia propiamente dicha, cuasi flagrancia y flagrancia presunta); es decir, solo procede en el caso de la comisión de delitos y no por hechos punibles que constituyen faltas penales. Que no autoriza a los ciudadanos a interrogar ni a ejercer violencia contra los arrestados ni para registrarlos en la búsqueda de pruebas. Y que es poco probable que el arresto ciudadano sea aplicado por el ciudadano común, y que sea aplicado por ciudadanos agrupados para garantizar la seguridad de determinadas zonas (juntas vecinales, rondas urbanas, etc.).¹⁶⁹

¹⁶⁷ Lavy Coral, Renato Daniel. *El arresto ciudadano*. Revista de actualidad jurídica: “La tribuna del Abogado”. Año VI- Edición 08. ICADE. Lima, agosto 2015, pp 88-89. Recuperado el 29 de mayo del 2017 a horas 10:14 de <http://www.icade.com.pe/imagen/Revistas%20ICADE/7%20Revista%20Agosto%20-%202015.pdf#page=85>

¹⁶⁸ Instituto de Defensa Legal. *¿Cómo es el proceso penal según el nuevo Código Procesal Penal?*. Bellido Ediciones E.I.R.L. Lima 2009 p. 65. Recuperado el 28 de diciembre del 2016 a horas 13:00 de <http://www.derechoycambiosocial.com/revista019/como%20es%20el%20proceso%20penal%20segun%20NCP.pdf>.

¹⁶⁹ Lavy Coral, Renato Daniel. *El arresto ciudadano*. Revista de actualidad jurídica: “La tribuna del Abogado”. Año VI- Edición 08. ICADE. Lima, agosto 2015, pp 89-90. Recuperado el 29 de mayo del 2017 a

3.2.5.2 Derecho Comparado

En el vecino país de Chile tenemos la presentación de una "Estrategia nacional de Seguridad Ciudadana", por primera vez en el año 2006, que apunta a concebir al sistema penal con un carácter integral, entendiéndolo como un sistema con énfasis en la generación de estrategias de tipo interinstitucionales, tendientes a reducir la victimización de la población. Esta estrategia se estructura a partir de seis ejes fundamentales: la institucionalidad, la información, la prevención, el control y la sanción, la rehabilitación y reinserción social, y la asistencia a víctimas. Dichos ejes, a su vez, están asociados a distintas instituciones, las que son coordinadas y supervisadas en su ejecución por el Ministerio del Interior. De esta forma, como lo precisa su mensaje, la citada estrategia buscó "consolidar una política pública de alta eficiencia y eficacia, capaz de responder a criterios centrales en la gestión gubernamental. De esta forma, se refuerza una política integral que aborda en profundidad los desafíos en ámbitos tan diversos como la Prevención o el Control del delito, con iniciativas ejecutadas por los organismos especializados para cada eje de acción. Estrategia Nacional de Seguridad Pública (2006-2010), p. 7.¹⁷⁰

En el caso de Colombia es necesario matizar esta idea puesto que los aspectos claves de la reforma procesal penal tuvieron sustento en políticas anteriores a la misma, y han dotado al sistema judicial de ese país de elementos que le han permitido afrontar de mejor manera el proceso. Los métodos alternativos de resolución de conflictos en el área penal, la modernización de la fiscalía, las facultades de persecución de los fiscales, el desarrollo de temas de gestión y la producción de estadísticas son aspectos que estaban presentes con bastante fuerza en el sistema colombiano varios años antes de la reforma, y han contribuido, sin duda, a darle vigor al proceso más allá de los problemas que puedan subsistir en esas mismas áreas.¹⁷¹

Asimismo, más allá de las dificultades que se detallan en el respectivo informe nacional, República Dominicana muestra un sólido proceso de cambio caracterizado por la búsqueda de la institucionalidad y la valoración de las experiencias comparadas. Destacan en este país los esfuerzos realizados para el fortalecimiento de la Defensoría Penal Pública, mediante la aplicación de mecanismos de gestión, especialmente dirigidos a supervisar y evaluar el desempeño de los

horas 10:14 de <http://www.icade.com.pe/imagen/Revistas%20ICADE/7%20Revista%20Agosto%20-%202015.pdf#page=85>

¹⁷⁰ Morales Peillard, Ana María. La política criminal contemporánea: Influencia en Chile del discurso de la ley y el orden. Política criminal. vol.7 N°.13 Santiago 2012

¹⁷¹ Riego R., Cristián. *Nuevas tendencias de las reformas procesales penales en América Latina*. Colombia 2013. Pp. 15 a 17. Recuperado el 10 de enero del 2018 a horas 09:21 de http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5086/informecomparativo_nuevastendenciasrppp_criego.pdf?sequence=1&isAllowed=y

defensores.¹⁷²

A su vez, por un lado Colombia y por otro Bolivia, Nicaragua y República Dominicana (en el primer caso por criterios de territorialidad y en el segundo caso por las nuevas normas procesales) muestran otra fortaleza importante que es la incorporación de la progresividad de la implementación, como una forma de acotar las complejidades del proceso y acercar estas a las capacidades con las que realmente se cuenta, con el fin de producir cambios concretos y de concebir la implementación como un proceso de largo plazo, al mismo tiempo que conseguir apoyo al proceso sobre la base de poder mostrar éxitos concretos en la primeras etapas.¹⁷³

Adicionalmente, debe señalarse que en Bolivia, Colombia, Nicaragua y República Dominicana las propias leyes de reforma dieron lugar a la creación de órganos especiales de coordinación destinados a facilitar y monitorear el proceso de implementación. Pareciera que en todos los casos la eficacia de estos mecanismos ha sido discutida, no obstante, el solo hecho que hayan sido contemplados revela una fortaleza del proceso de implementación, o a lo menos muestra preocupación por el problema.¹⁷⁴

¹⁷² Op. cit.

¹⁷³ Op. cit.

¹⁷⁴ Op. cit.

CAPÍTULO IV: CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y VERIFICACIÓN DE VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

4.1. Contrastación de la hipótesis

4.1.1. Contrastación de las variables independientes

Obviamente no podemos hablar de contrastación entre variables independientes pues existe una solamente.

4.1.2. Variable independiente.

El mejoramiento de los factores negativos del desempeño funcional de la PNP, cuyos indicadores se verificarían con el fortalecimiento de unidades de élite de alto nivel, la especialización, la implementación de tecnologías de la información de última generación, la adopción de una nueva estructura que comprenda una heterogenización nacional con la respectiva participación ciudadana, la aplicación de la inteligencia policial, un control psicológico del personal, impartición de directrices orientadoras y el logro de una coordinación interregional y resolución de la relación de la policía con los gobiernos locales.

4.2. Contrastación de las variables dependientes

4.2.1. Variable dependiente

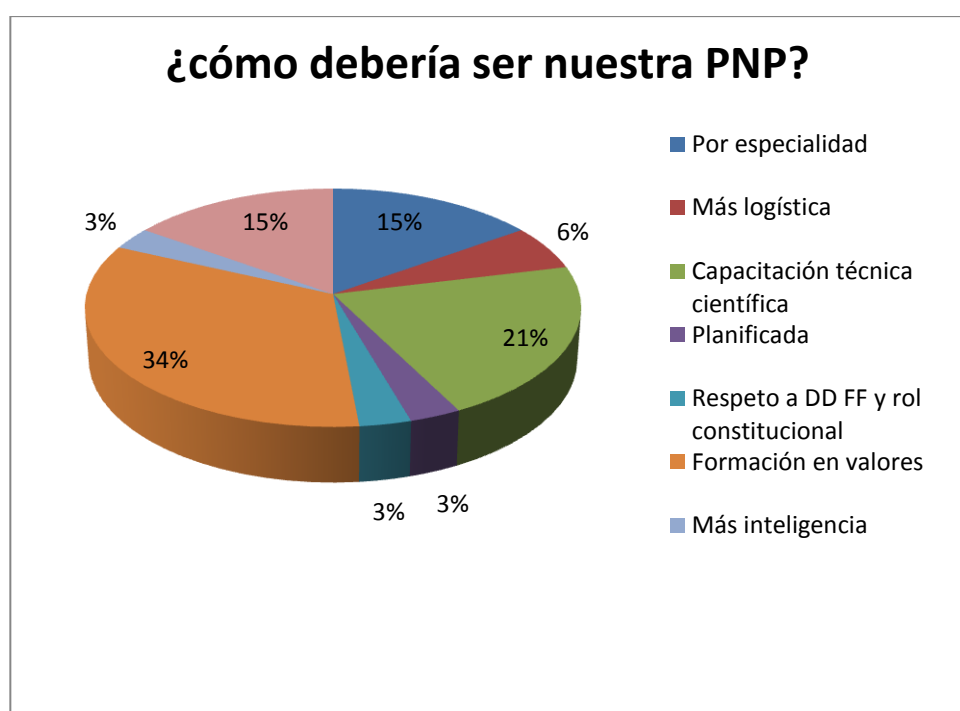
Fortalecimiento de la función del MP y por ende del proceso de implementación del NCPP.

4.2.2. Análisis

Aplicada la encuesta a 15 operadores jurídicos entre jueces, fiscales, policías y abogados docentes, tuvimos como resultado:

1. De acuerdo a su criterio, ¿cómo debería ser nuestra Policía Nacional?		
	Frecuencia	%
Por especialidad	5	33%
Más logística	2	13%
Capacitación técnica científica	7	47%
Planificada	1	7%
Respeto a DD FF y rol constitucional	1	7%
Formación en valores	11	73%
Más inteligencia	1	7%
Proactividad y compromiso	5	33%

Tomando en cuenta que los operadores preguntados opinan en varios sentidos o considerando más de una variable tenemos que el 73% de los encuestados opinaron que la formación en valores debe ser el factor principal en la preparación del personal policial, un 47% que la capacitación técnico científica debe ser el aspecto más importante en el adiestramiento, un 33% explicó que se les debe preparar por especialidades y otro 33% que la proactividad y el compromiso deben ser alentados prioritariamente; un 13% que la logística debe mejorar; sin dejar de lado al 7% que indica que la preparación en inteligencia debe primar, 7% que piensa que se debe atender al rol constitucional y DD FF, y otro 7% que opina que debe optimizarse la planificación.



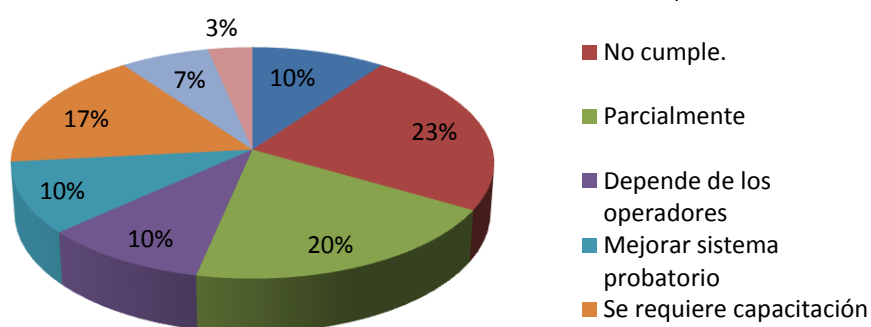
En términos absolutos por variable se obtuvo que la formación en valores resulta para nuestros encuestados el tema más importante para que la policía mejore su gestión funcional, aspecto que involucra necesariamente el gradual destierro de la corrupción, lo que permitirá que el personal con esta formación tenga un desempeño funcional en un ámbito que refuerce sus convicciones formativas y no viceversa; otro aspecto que resaltan es el de la capacitación técnico científica que sumado al anterior nos proporcionará un efectivo idóneo para la función; luego la proactividad y el desempeño por especialidades complementarán su perfil, sin dejar de lado el apoyo logístico, la planificación, la inteligencia en su gestión y ejercicio acorde con el respeto irrestricto a los DD FF y normas vigentes.

2. ¿Cree usted, que el nuevo Código Procesal Penal está cumpliendo su función en nuestro medio?

	Frecuencia	%
Sí cumple.	3	20%
No cumple.	7	47%
Parcialmente	6	40%
Depende de los operadores	3	20%
Mejorar sistema probatorio	3	20%
Se requiere capacitación	5	33%
Corrupción como traba	2	13%
Minimización de labor PNP	1	7%

Tomando en cuenta que los operadores preguntados opinan en varios sentidos o considerando más de una variable tenemos que el 47% de los encuestados opina que el NCPP no cumple con sus funciones, frente a un 20% que piensa que cumple, y que el 40% indicó que lo hace parcialmente; que el 33% explica que el personal requiere ser capacitado; un 20% que dijo que todo depende de los operadores jurídicos y otro 20% que asigna importancia a mejorar el sistema probatorio; un 13% que ve en la corrupción la principal traba y un 7% que observa que la PNP se encuentra minimizada.

¿cree usted, que el NCPP está cumpliendo su función en nuestro medio?



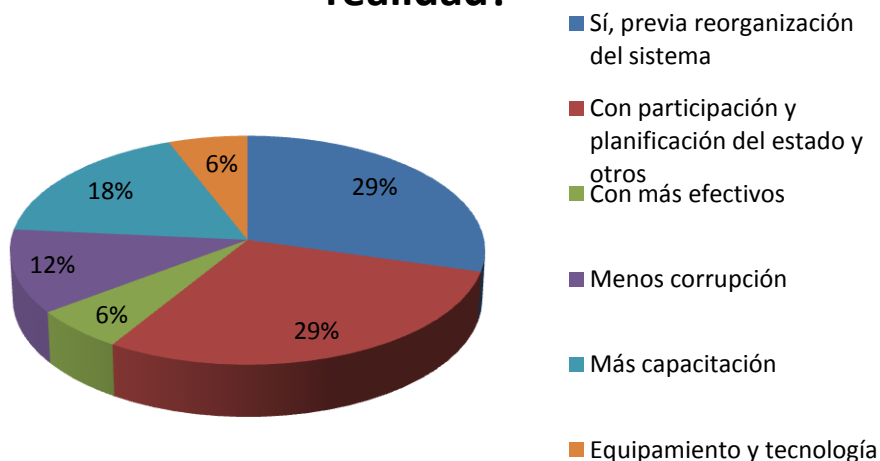
En términos absolutos por variable es indudable que casi la cuarta parte de los

entrevistados opina que el NCPP no viene cumpliendo el cometido para el que fue previsto, frente a un quinto que dice que lo hace parcialmente, lo que nos permite colegir que un 43% da cuenta del cumplimiento en tanto un 10% no lo hace; un 17% advierte que se requiere capacitación sobre el tema, un 10% considera que depende de los operadores, otro 10% que se debe mejorar el sistema probatorio, un 7% que la corrupción es el principal obstáculo para ello, y un 3% que la labor de la PNP en el tema se encuentra minimizada.

3. ¿Considera usted que el mejoramiento holístico de nuestra Policía Nacional, será uno de los factores que logrará controlar el incremento de la tasa de criminalidad en nuestra realidad?		
	Frecuencia	%
Sí, previa reorganización del sistema	5	33%
Con participación y planificación del Estado y otros	5	33%
Con más efectivos	1	7%
Menos corrupción	2	13%
Más capacitación	3	20%
Equipamiento y tecnología	1	7%
Nueva PNP con reingeniería	1	7%
Sacar personal c/problemas éticos	1	7%
Problema cultura, persona, Estado	1	7%

Tomando en cuenta que los operadores preguntados opinan en varios sentidos al considerar más de una variable, tenemos un 33% que opina que debería reorganizarse el sistema y otro 33% lo hace en el sentido que solo se logrará sumando la participación del Estado y otros organismos; otro 20% opina que se lograría con más y mejor capacitación del personal; en tanto un 13% nos habla de que la corrupción es el principal problema para mejorar la Institución; otros encuestados en 5 parciales de 7% opinan que se debe aumentar el número de efectivos, que debe mejorar el equipamiento y tecnología, que se debe generar previamente una reingeniería del sistema, separar al personal con problemas éticos y atender al trinomio cultura persona Estado, respectivamente.

¿el mejoramiento holístico de nuestra PNP, será uno de los factores que logrará controlar el incremento de la tasa de criminalidad en nuestra realidad?

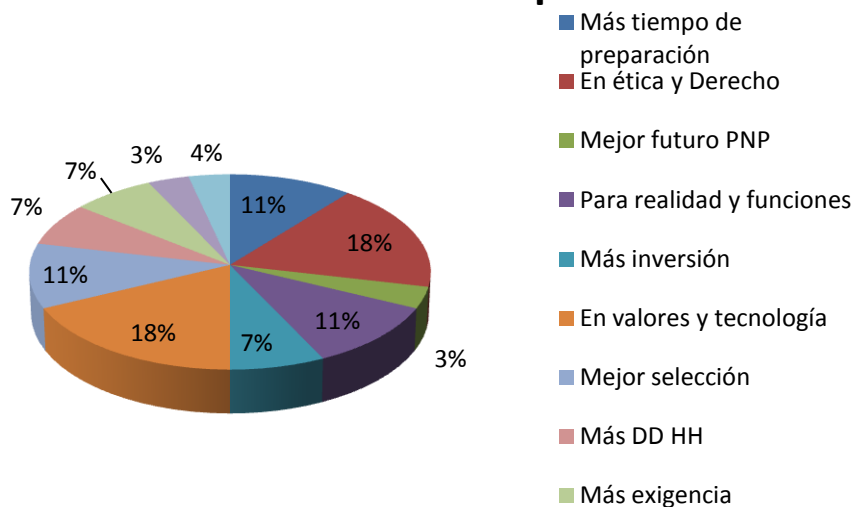


En términos absolutos por variable nuestros entrevistados piensan en un 29% que sí pero previa reorganización de ésta, otro 29% en el mismo sentido pero con planificación y participación estatal, un 18% destacó la capacitación, un 12% la disminución de la corrupción, un 6% el incremento de efectivos y otro 6% el aumento de equipamiento y tecnología.

4a. ¿Qué opinión le merece la formación de nuestros miembros policiales?		
	Frecuencia	%
Más tiempo de preparación	3	20%
En ética y Derecho	5	33%
Mejor futuro PNP	1	7%
Para realidad y funciones	3	20%
Más inversión	2	13%
En valores y tecnología	5	33%
Mejor selección	3	20%
Más DD HH	2	13%
Más exigencia	2	13%
Tecnología investigativa	1	7%
Más laboratorios	1	7%

Tomando en cuenta que los operadores preguntados opinan en varios sentidos o considerando más de una variable tenemos que dos grupos de 33% opinan que debe priorizarse los temas Derecho y valores en la formación, y que debe impartirse valores y tecnología respectivamente; 3 grupos de 20% son de la opinión que debe incrementarse el tiempo de preparación, se les debe formar atendiendo a la realidad y a las funciones que van a desempeñar, y mejorar la selección, respectivamente; 3 grupos de 13% que otorgan importancia a una mayor inversión en la preparación, a una mayor exigencia, y a una mejor capacitación en DD HH; asimismo 3 grupos de 7% que determinan que se debe atender a mejorar la tecnología investigativa, implementar más laboratorios, lo que permitirá mejorar la PNP que debiera ser el norte, respectivamente.

¿Qué opinión le merece la formación de nuestros miembros policiales?

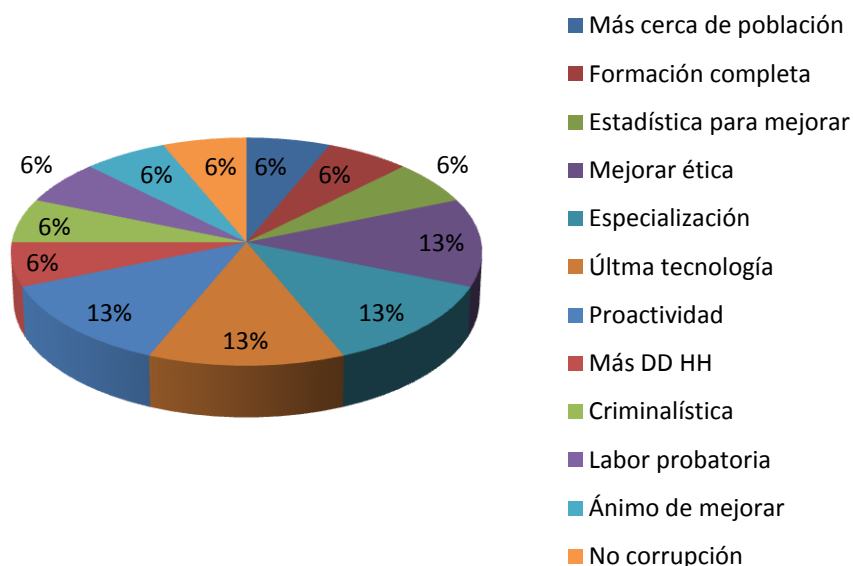


En términos absolutos por variable un 18% nos dice que se debe formar al personal en ética y Derecho, otro 18% que se debe incidir en valores y tecnología, un 11% que se debe atender a la realidad y a sus funciones, otro 11% opina por una mejor selección y otro 11% por un mayor tiempo de preparación; en tanto un 7% que debería haber mayor exigencia, otro 7% formación en DD HH, y otro 7% mayor inversión; en tanto un 4% dice que deben crearse más laboratorios, un 3% que se debe atender a mejorar el futuro de la PNP y otro 3% que apuesta por una mayor exigencia.

4b. ¿Qué opinión le merece el desempeño de nuestros miembros policiales?		
	Frecuencia	%
Más cerca de población	1	7%
Formación completa	1	7%
Estadística para mejorar	1	7%
Mejorar ética	2	13%
Especialización	2	13%
Última tecnología	2	13%
Proactividad	2	13%
Más DD HH	1	7%
Criminalística	1	7%
Labor probatoria	1	7%
Ánimo de mejorar	1	7%
No corrupción	1	7%

Tomando en cuenta que los operadores preguntados opinan en varios sentidos o considerando más de una variable tenemos que 4 grupos de 13% son de la idea que para mejorar el aspecto funcional debería mejorar el aspecto ético, atender a la especialización, implementar tecnología de punta, y tener más proactividad, respectivamente; y 7 grupos de 7% que el éxito va por el lado del acercamiento a la población, de que se complete su formación, de que la estadística sea una de sus principales herramientas, que se observen los DD HH, que se aplique la criminalística, que se mejore la labor probatoria, y que exista el ánimo de mejorar.

¿Qué opinión le merece el desempeño funcional de éstos?



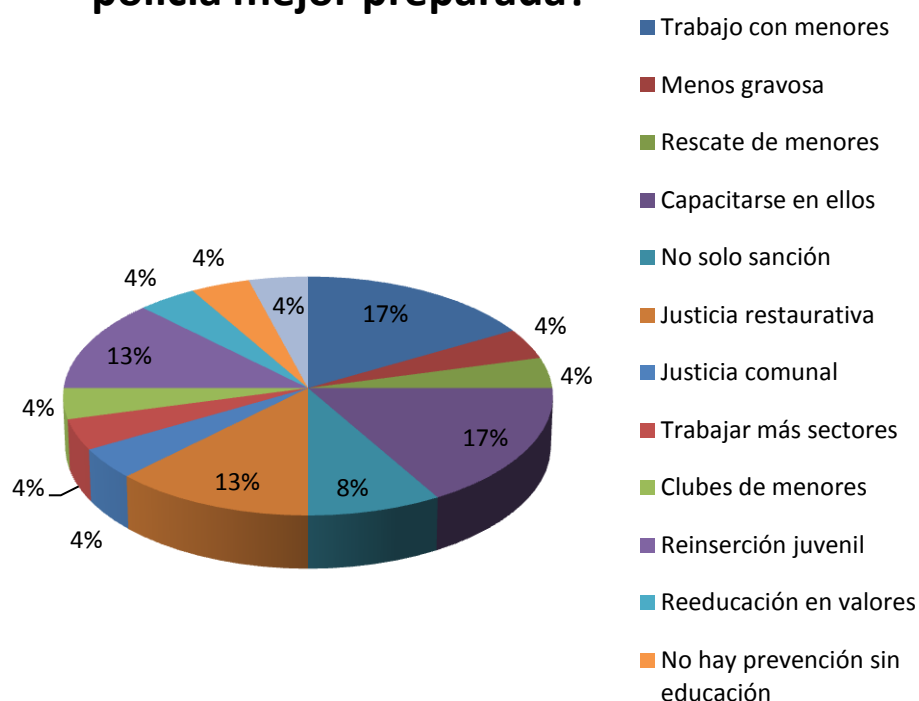
En términos absolutos por variable cuatro grupos de 13% nos hablan, uno de mejorar la ética, otro de atender a la especialización, otro de implementar tecnología de punta y otro de proactividad del personal; asimismo ocho grupos de 6% se pronuncian, uno por que el personal se acerque a la población, otro porque no se recorte el periodo de preparación, otro porque se aplique la estadística para mejorar, otro porque no se obvie lo referido a los DD HH, otro porque se aplique la criminalística, otro porque se optimice la labor probatoria, otro porque prime el ánimo de mejorar, y otro porque se enfrente la corrupción.

5a. ¿Considera usted que los métodos preventivos del delito aplicados al infractor penal, resultarían más efectivos para lograr la reducción efectiva de la tasa de criminalidad, si tuviéramos una policía mejor preparada?

	Frecuencia	%
Trabajo con menores	4	27%
Menos gravosa	1	7%
Rescate de menores	1	7%
Capacitarse en ellos	4	27%
No solo sanción	2	13%
Justicia restaurativa	3	20%
Justicia comunal	1	7%
Trabajar más sectores	1	7%
Clubes de menores	1	7%
Reinserción juvenil	3	20%
Reeducación en valores	1	7%
No hay prevención sin educación	1	7%
Problema cultura, persona, Estado	1	7%

Tomando en cuenta que los operadores preguntados opinan en varios sentidos o considerando más de una variable tenemos que 2 grupos de 27% opinan que los trabajos preventivos deben darse en menores y que el ellos debe haber capacitación, 2 grupos del 20% dicen que el tema está en la justicia restaurativa y en la reinserción juvenil, respectivamente; un 13% opina que no solo debe recurrirse a la sanción; 8 grupos del 7% estiman que la prevención es menos gravosa, que se debe priorizar el rescate de menores, que se debe trabajar en más sectores, en justicia comunal, en clubes de menores, en reeducación en valores, en trinomio persona, cultura, Estado, asimismo que no hay prevención sin educación, respectivamente.

¿los métodos preventivos del delito aplicados al infractor penal, resultarían más eficaces para lograr la reducción efectiva de la tasa de criminalidad, si tuviéramos una policía mejor preparada?

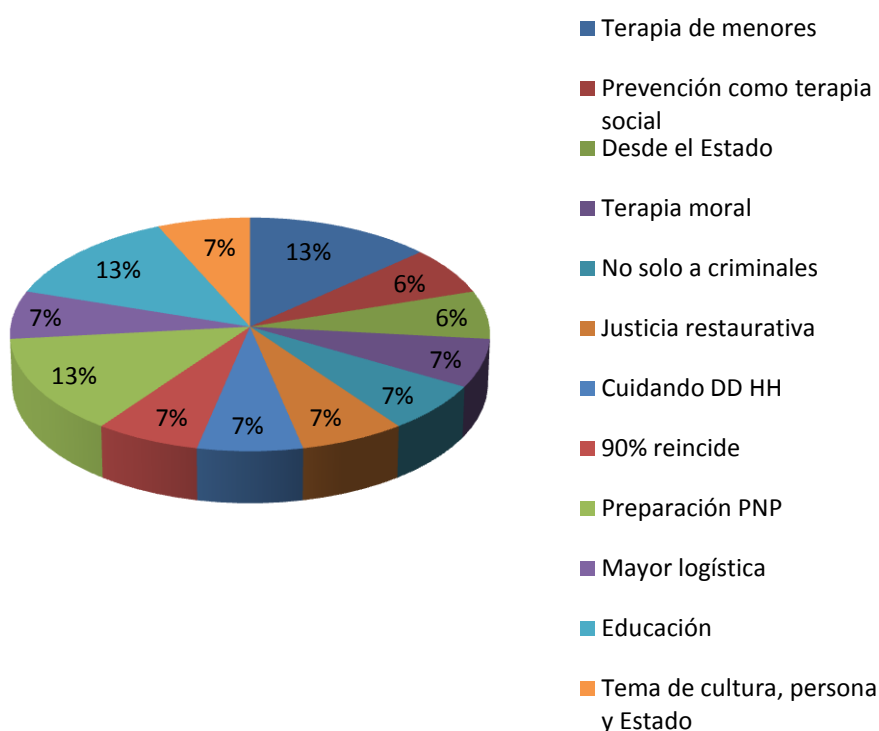


En términos absolutos por variable dos grupos de 17% opinan, uno por priorizar el trabajo con menores y otro por incluir en ellos aspectos de capacitación; dos grupos de 13% uno que prioriza la justicia restaurativa y otro que lo hace con la reinserción juvenil; un grupo de 8% que considera que en avocamiento del sistema no termina con la sanción; ocho grupos de 4% que dicen, uno que la prevención es menos gravosa, otro que se debe atender al rescate de menores, otro que se debe aplicar la justicia comunal, otro que se debe trabajar con más sectores, otro que se debe formar clubes de menores, otro la importancia de la reeducación en valores, otro que se debe considerar como factor a la educación, y otro que se debe atender al problema cultura, persona, Estado.

5b. ¿Considera usted que los métodos terapéuticos aplicados al infractor penal, resultarían más efectivos para lograr la reducción efectiva de la tasa de criminalidad, si tuviéramos una policía mejor preparada?		
	Frecuencia	%
Terapia de menores	2	13%
Prevención como terapia social	1	7%
Desde el Estado	1	7%
Terapia moral	1	7%
No solo a criminales	1	7%
Justicia restaurativa	1	7%
Cuidando DD HH	1	7%
90% reincide	1	7%
Preparación PNP	2	13%
Mayor logística	1	7%
Educación	2	13%
Tema de cultura, persona y Estado	1	7%

Tomando en cuenta que los operadores preguntados opinan en varios sentidos o considerando más de una variable tenemos que 3 grupos de 13% opinan que sería más efectiva la aplicación de los métodos terapéuticos atendiendo a la terapia de menores, mejor preparación del personal PNP y al aspecto educacional, respectivamente; 9 grupos de 7% dijeron que se debe priorizar la prevención como terapia social, la terapia moral, que se debe trabajar desde el Estado, la justicia restaurativa, que la terapia no solo es para criminales, cuidando los DD HH, que el 90% reincide, que debe haber mayor logística, y que no se debe olvidar el trinomio cultura, persona, Estado, respectivamente.

¿los métodos terapéuticos aplicados al infractor penal, resultarían más efectivos para lograr la reducción efectiva de la tasa de criminalidad, si tuviéramos una policía mejor preparada?



En términos absolutos por variable, tres grupos de 13% opinan, uno que se debe atender a la terapia de menores, otro que se debe priorizar la preparación PNP, y otro que la educación debe ser un factor fundamental; siete grupos de 7% que sostienen, uno que debiera implementarse una terapia moral, otro que la terapia no solo debe ser para criminales, otro que se debe atender a la justicia restaurativa, otro que se debe cuidar de los DD HH, otro que el noventa por ciento reincide, otro que debiera contarse con mayor logística, y otro que debe atenderse al trinomio cultura, persona, Estado.

Dado el análisis planteado pasamos de acuerdo a éste y al marco teórico a responder a las preguntas propias del planteamiento problemático. Así tenemos:

¿La problemática que trae consigo el concurso de la PNP en la implementación del Nuevo Código Procesal Penal es susceptible de superarse mediante la implementación de cambios inspirados en el desempeño funcional de los cuerpos policiales de élite a nivel internacional?

Lo definitivo es que la superación de dicha problemática será paulatina o gradual y ésta no será atribuible exclusivamente a los desempeños aludidos sino a factores tan significativos como el desempeño funcional con una nueva visión ética y la reestructuración de la formación policial, que redundará en la aplicación de los principios Criminalísticos con planteamientos inmersos en tecnología de punta.

¿La actitud asumida por nuestra policía durante los años 2011 a 2015 en Lambayeque a propósito de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal podrá reconducirse con una reforma de sus estamentos y la demostración de que los inconvenientes no radican en la forma de implementación sino en el reconocimiento de la eficacia de sus instituciones?

Nuestra indagación arroja que ello será posible desde el momento en que los factores puestos en juego redefinan el perfil policial logrando un efectivo que crea en su institución y en sus nuevas proyecciones como persona y como ciudadano de a pie.

¿Existe comprensión e interiorización por parte de los miembros policiales de Lambayeque y de todo el país de los principios pilares¹⁷⁵ del modelo procesal que trae consigo nuestro NCPP?

Debemos asumir que comprensión no es interiorización pues los principios a que hacemos referencia no son nada nuevo en una investigación criminal, lo que deberá ser novedoso es el enfoque con que se apliquen, en lo que consideramos será determinante la capacitación conjunta de los operadores jurídicos inmersos en el cambio de modelo, entre ellos principalmente el efectivo policial.

¿La capacitación que recibe nuestra policía está orientada a formar los investigadores que requiere la aplicación del NCPP?

Lo vivenciado a través de nuestra indagación nos deja convencidos de que existen

¹⁷⁵ Principios de oralidad, contradicción, intermediación y contradicción.

esfuerzos aislados en este sentido de que y en la medida en que éstos se integren o se sistematicen en políticas de corto, mediano y largo plazo traerá consigo una capacitación policial acorde con las necesidades del nuevo sistema.

¿Podremos lograr contar con un cuerpo policial que de manera uniforme sea capaz de afrontar el reto de una implementación eficaz del NCPP?

Estamos convencidos de que una vez que se logre la implementación de los factores a que hacemos referencia en nuestra investigación esta implementación será un hecho, logrado sobre la base de comprender la naturaleza del nuevo modelo acusatorio.

Como pudo apreciarse en la diversidad de datos que preceden. Hemos recogido información valorada en momentos distintos de la investigación, antes y durante el proceso que se desarrolló a través de nuestros encuestados, del marco teórico y antecedentes históricos.

Los hallazgos arrojados por el instrumento cuantitativo, sin llegar a ser determinantes, si servirán de punto de referencia en los aspectos cualitativos, que a continuación mencionaremos. Lo que nos permitirá no sólo contrastar información por medio de distintos instrumentos, informantes y momentos, para validar la misma, sino que complementaran detalles relativos al contexto en el que se desarrolla nuestro estudio cualitativo. Entendiendo que interpretar en toda su medida una situación o fenómeno, pasa por conocer suficientemente el contexto bajo el cual se desarrolla.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones

Contrastación de la hipótesis global

- 5.1.1. Determinar los factores negativos de que adolece la PNP, previo análisis de las diferentes posiciones de doctrinarios, jurisprudencia, diagnósticos de entidades nacionales e internacionales en este sentido.
- 5.1.2. Puntualizar la forma cómo los factores en mención influyen en el desempeño funcional del MP en el proceso de implementación del nuevo Código Procesal Penal en la región Lambayeque durante los años 2012-2015.
- 5.1.3. Describir el tratamiento que reciben cada uno de los factores negativos de que adolece nuestra PNP, de acuerdo a los diferentes aportes doctrinarios nacionales y extranjeros, y a la legislación comparada.
- 5.1.4. Comparar el efecto que tiene el actual desempeño funcional de la PNP, a propósito de la implementación del NCPP, con el que tendría de implementarse los aportes de este trabajo.
- 5.1.5. Explicar la forma como los aportes de este trabajo contribuirán al mejoramiento de la implementación del NCPP, asegurando previamente un óptimo desempeño funcional de la PNP en este sentido.
- 5.1.6. Proponer *de lege ferenda* la modificación del D. Leg. 1267, Ley de la PNP, en algunos de sus artículos relacionados con el presente trabajo.

5.2. Recomendaciones

- 5.2.1. Propuesta *de lege ferenda* la modificación del D. Leg. 1267, Ley de la PNP, en algunos de sus artículos relacionados con el presente trabajo.

PROPUESTA LEGISLATIVA DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1267

PARTE INTRODUCTIVA

Se considera a través del artículo 32 de la Ley de la PNP sobre Formación profesional policial que como parte de la etapa de educación superior del sistema educativo, es el proceso que tiene como finalidad la preparación, actualización, especialización y perfeccionamiento del Cuerpo policial y que la Formación profesional policial se ofrece a través de las Escuelas de la PNP. Sin embargo, de acuerdo a la naturaleza de la función policial y a la didáctica que es la disciplina técnico-científica que se encarga de articular un proyecto pedagógico (objetivos sociales de la educación) con los desarrollos en las técnicas y métodos de enseñanza (que se fundamentan en una teoría general del aprendizaje), no se puede soslayar que la compatibilización del desempeño policial con las exigencias coyunturales de nuestra realidad socio-económica resulta fundamental para que su desenvolvimiento contribuya eficazmente a la erradicación paulatina de los altos índices de criminalidad. Por lo que atendiendo a que las innovaciones pedagógicas más recientes enrumban dicho quehacer hacia la preparación para el cambio y no para una realidad concreta, deberá modificarse el artículo 32 de la Ley de la PNP dándole prioridad a este aspecto, iniciativa que quedará como sigue:

El Presidente del Poder Judicial que suscribe, con el Acuerdo aprobatorio de la Sala Plena de fecha, en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa reconocido en el Artículo 107° de la Constitución Política del Estado y el inciso 7) del Artículo 80° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, propone el siguiente Proyecto de Ley:

CONSIDERANDO:

Que, nuestra realidad socio económica viene adoleciendo de serias deficiencias determinadas por factores de corrupción que deben ser combatidos en el corto plazo.

Que, uno de los sectores más afectados en éste sentido es el de la administración de justicia que involucra de manera directa la actividad jurisdiccional de jueces y fiscales, sin dejar de lado la participación del personal policial como operador jurídico.

Que, de acuerdo a lo señalado, en el nivel formativo del personal de la Policía Nacional del Perú debe primar el aspecto ético.

PARTE SUSTENTATORIA

EXPOSICION DE MOTIVOS

El desenvolvimiento actual de los eventos propios de nuestra coyuntura socio económica se encuentra marcado por hechos que vienen revelando profundas brechas que afectan el crecimiento

de nuestra economía, aspectos que vienen siendo determinados en gran medida por actos de corrupción en la asignación de los grandes proyectos como en los demás aspectos del desenvolvimiento convencional de nuestra economía, actos en los que se verían involucrados funcionarios estatales del más alto nivel y demás, correspondiendo obviamente al Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional el procesamiento de sus autores, instituciones que vienen implementando un Nuevo Código Procesal Penal con un nuevo modelo desde el año 2006 hasta la fecha, modelo en el que nuestra policía y en Ministerio Público cumplen un rol fundamental, siendo que a la entidad policial le corresponde la intervención más inmediata en todos los casos.

Circunstancias que determinan que la preparación de nuestro personal policial debe optimizarse en lo más pronto posible; lo que sumado al hecho de que las deficiencias más notorias en la formación policial se han evidenciado en el aspecto ético, lo que requiere una solución a través de un criterio lógico jurídico. Por lo que el texto del artículo 32 de la Ley de la PNP que define la Formación profesional policial como el proceso que tiene como finalidad la preparación, actualización, especialización y perfeccionamiento del Cuerpo policial, precisa que ésta deberá ofrecerse exclusivamente a través de las Escuelas de la PNP; sin embargo la forma óptima de educar para el cambio es la preparación constante y permanente, y la manera más recomendable de actualizar al personal es incluir entre sus centros de formación los del Poder Judicial y Ministerio Público, cuyas funciones se compatibilizan de acuerdo al nuevo modelo, e incidir formativamente de manera prioritaria en el aspecto ético.

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

El beneficio que la implementación de esta propuesta traerá a nuestro sistema penal es obvio ya que se logrará una participación más eficiente y eficaz de la PNP en el nuevo Proceso Penal, lo que es perfectamente viable y efectivo dados los beneficios evidentes de la nueva práctica de formación en valores en el mediano plazo, y de la capacitación conjunta de Fiscales, Jueces y Policía, sin dejar de lado que la capacitación policial permanente logrará una mejor adaptación del personal a la realidad concreta, multiplicándose sus efectos a través de su contacto con la comunidad; lo que evidentemente logrará un impacto cuantificable económicamente al lograrse una capacitación adicional sin mayor costo; lográndose asimismo un impacto positivo en las entidades involucradas, Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional, así como en las diferentes comunidades de nuestro país que recibirán los beneficios paulatinamente, y teniendo en consideración que, en términos generales, una ley es de aplicación nacional, consecuentemente debe beneficiar a toda la sociedad; dado que consecuentemente la iniciativa legislativa mejorará nuestra sociedad; habiéndose logrado establecer dado en alcance social de nuestra policía que:

- a. Los beneficiarios y perjudicados de la norma en corto, mediano y largo plazo serán los miembros de nuestra comunidad nacional.
- b. El beneficio de la propuesta es incalculablemente grande y no tiene costo significativo.
- c. La norma no tiene costo para el Estado.
- d. Conclusivamente se puede decir que con la norma ganamos todos los peruanos y que nadie pierde con la norma, no existiendo en consecuencia ningún costo a ser trasladado a la población.
- e. Resulta definitiva por consiguiente la enorme contribución de la propuesta a los objetivos generales desde la perspectiva del bien común.

EFFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN NUESTRA LEGISLACION NACIONAL

De aprobarse la modificatoria nuestro personal policial ingresará en el corto plazo a un plano formativo mejorado, lográndose mejorar también el aspecto normativo en este sentido ya que su implementación generará un impacto positivo en el ámbito de la vigencia normativa en nuestra legislación nacional debido pues la capacitación conjunta de nuestros operadores jurídicos, la formación permanente y en valores de nuestro personal policial producirán cambios positivos en el ordenamiento legal a consecuencia de la suplencia del vacío normativo advertido y modificación propuesta. Lográndose en consecuencia optimizar el perfil de nuestro personal policial.

PARTE RESOLUTIVA

Propone a consideración del Congreso de la República el siguiente Proyecto de Ley;

El Congreso;

Ha dado la ley siguiente;

“Ley que modifica el Artículo 32 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú”

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 32 de Decreto Legislativo 1267, el cual queda redactado según el siguiente texto:

“La Formación Profesional Policial, como parte de la etapa de educación superior del sistema educativo, es el proceso que tiene como finalidad la preparación, actualización, especialización y perfeccionamiento constante del Cuerpo Policial. La Formación Profesional Policial se ofrece a través de las Escuelas de la Policía Nacional del Perú, del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Mediante normatividad específica se define la organización y estructura de la Formación Profesional Policial, con sujeción a la legislación vigente en la materia, en lo que le resulte aplicable.”

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Burgos, Víctor. *El Nuevo Código Procesal Penal: realidad o ficción*. Recuperado el 18 de enero del 2017 a horas 21:19 de inbox.lc/BN5
- Cabrera Huertas, Cristian (2011). *El rol de la Policía Nacional en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en la investigación del delito de extorsión en la Ciudad de Chiclayo periodo 2011*. Tesis presentada en la Universidad Señor de Sipán para optar el título de abogado, en Chiclayo, 2013. Recuperado a horas 08:36 del día 19 de octubre del 2017 de <http://repositorio.uss.edu.pe/handle/uss/1578>.
- Chinchay Castillo, Alcides. *La investigación preparatoria. Algunos comentarios críticos*. Recuperado el 17 de enero del 2017 a horas 19:06, de inbox.lc/DUbX. Con algunas modificaciones con fines académicos.
- Ciriaco Caqui, Jeferson Jesús. *La influencia del nuevo código procesal penal en la relación funcional entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en la etapa de la investigación preliminar en los delitos de crimen organizado en Lima Metropolitana, periodo 2014-2016*. Recuperado a horas 08:36 del día 19 de octubre del 2017 de <http://repositorio.uwiener.edu.pe/handle/123456789/545>.
- Cisneros Ibaña, Luis (2014). *El rol del Ministerio Público en la investigación penal de acuerdo al NCPP*. Pp. 10 y 11. Revista de actualidad jurídica: La tribuna del abogado. Año V, edición 07 de julio del 2014, Lima. Recuperado el 18 de octubre del 2017 a horas 10:14, de <http://www.icafe.com.pe/imagen/Revistas%20ICADE/6%20Revista%20Julio%20-%202014.pdf#page=45>
- Costa, Gino y Neild, Rachel (2005). *La reforma policial en el Perú*. Artículo publicado originalmente en inglés en la revista Australian & New Zealand Journal of Criminology, Volumen 38, N° 2, agosto de 2005. Recuperado el 03 de julio del 2017 a horas 19:02 de <http://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/112-126/976>
- Croda, José. Abad Eric (2016). *Modelos de investigación cualitativa y cuantitativa y su aplicación en el estudio del Derecho*. Revista Universita Ciencia. Año 4, núm. 12, enero – abril 2016, Universidad de Xalapa. México. P. 17.
- Dash, Scott. Álvarez, Álvaro (2016). *Función policial y transparencia* (Conferencia). Serie Cuadernos de Trabajo del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C. (Insyde). Número 15. Octubre de 2006, Ciudad de México. Recuperado el 07 de marzo del 2018 a horas 11:39 de <http://insyde.org.mx/wp-content/uploads/2013/08/NO.-15.pdf>, con algunas modificaciones con fines académicos.
- Fischer, Jhon. (1981). *Gobierno y sociedad en el Perú colonial*. Pontifica Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima. P. 204.
- García Ortiz, Enrique Carmelo (2009). *Historia de la Policía*. Recuperado el 22 de mayo del 2017 a horas 22:21 de <http://www.ipesad.edu.mx/repositorio1/BG-B23-2.pdf> San Luis Potosí, S.L.P., México 2009.
- Historia de la policía peruana en el siglo XX*. Recuperado el 23 de mayo del 2017 a horas 17:00 de <http://www.monografias.com/trabajos84/historia-policia-peruana-siglo-xx/historia-policia-peruana-siglo-xx.shtml>
- http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5086/informecomparativo_nuevastendencias_rppp_criego.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_policia_en_Espana

- https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa#Evoluci.C3.B3n_hist.C3.B3rica_de_la_noci.C3.B3n_de_polic.C3.ADa
- https://es.wikipedia.org/wiki/Polic%C3%ADa_Nacional_del_Per%C3%BA
- Huayta Ali, Cesar (2012). *Investigación criminalística para el esclarecimiento del hecho punible y su contribución a la administración de justicia de acuerdo al código procesal penal*. Recuperado a horas 08:36 del día 19 de octubre del 2017 de <http://repositorio.unap.edu.pe/handle/UNAP/339>
- Instituto de Defensa Legal (2009). *¿Cómo es el proceso penal según el nuevo Código Procesal Penal?*. Bellido Ediciones E.I.R.L. Lima 2009 p 13. Recuperado el 28 de diciembre del 2016 a horas 13:00 de <http://www.derechoycambiosocial.com/revista019/como%20es%20el%20proceso%20penal%20segun%20NCP.pdf>.
- Jiménez, Benedicto (2012). *Comentarios sobre el libro "Informe policial" escrito por el Mayor PNP José Enriquez Chipana*. Revista el Pacificador 2011. Recuperado el 17 de octubre del 2017 a horas 15:14, de <http://elpacificador2011.blogspot.pe/2012/08/comentarios-sobre-el-libro-informe.html>.
- Jiménez, Benedicto. *La inteligencia operativa policial*. Patrulleros.com. Recuperado el 07 de marzo del 2018 a horas 12:29 de <http://www.patrulleros.com/articulos-63633/61-policiales13/3401-la-inteligencia-operativa-policial>, con algunas modificaciones con fines académicos.
- Jiménez, Benedicto. *La inteligencia operativa policial*. Recuperado el 12 de junio del 2017 a horas 17:58 de <https://www.patrulleros.com/articulos/61-policiales13/3401-la-inteligencia-operativa-policial>
- Lavy Coral, Renato Daniel. *El arresto ciudadano*. Revista de actualidad jurídica: "La tribuna del Abogado". Año VI- Edición 08. ICADE. Lima, agosto 2015, pp 89-90. Recuperado el 29 de mayo del 2017 a horas 10:14 de <http://www.icafe.com.pe/imagen/Revistas%20ICADE/7%20Revista%20Agosto%20-%202015.pdf#page=85>
- Loza, Giuliana. *El derecho a no ser tratado como culpable mientras no exista sentencia condenatoria firme*. Alerta informativa. Recuperado el 22 de marzo del 2018 a horas 17:21 de http://www.ac-firma.com/biblioteca/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=19290.
- Manosalva, José (2009). *Doctrina policial*. Monografías.com. Recuperado el 22 de noviembre del 2017 a horas 10:03 de <http://www.monografias.com/trabajos68/doctrina-policial/doctrina-policial2.shtml>
- Mixán, Florencio. *Fiscal y policía: Un binomio de la reforma procesal penal*. Agenda Magna. El sitio de las soluciones justas. Recuperado el 18 de enero del 2017 a horas 23:00 de <https://agendamagna.wordpress.com/tag/florencio-mixan-mass/>.
- Moloeznik, Pablo; Balcázar-Villarreal, Manuel. *Inteligencia operativa. Aproximación a la inteligencia policial (la Policía Federal de México, 2006-2012)*. De file:///C:/Users/INTEL/Downloads/Dialnet-AproximacionALaInteligenciaPolicialLaPoliciaFedera-4451470.pdf
- Montbrun, Alberto. *El recurso humano de la Policía y su capacitación en el contexto de la complejidad*. Aporte al Consejo Provincial de Seguridad – Mayo, 2007, pp. 9-11. De http://www.albertomontbrun.com.ar/archivos/el_recurso_humano_de_la_policia_en_la_complejidad.pdf.
- Montbrun, Alberto. *Policia y seguridad pública: Modelos en marcha*. LA LEY – Gran Cuyo, Mendoza, Argentina; año VI, N° 1, febrero 2002, p. 10. Recuperado el 22 de mayo del 2017 a horas 15:36 de http://www.albertomontbrun.com.ar/archivos/policia_y_seguridad_modelos_en_marcha.pdf.
- Morales Peillard, Ana María. *La política criminal contemporánea: Influencia en Chile del discurso de la ley y el orden*. Política criminal. vol.7 N°.13 Santiago 2012

- Müller, Hugo. *Cambio policial para la investigación criminal en el Sistema penal acusatorio*. Transcripción de la presentación. Recuperado el 16 de marzo del 2018 a horas 17:25 de <http://slideplayer.es/slide/11672587/>.
- Müller, Hugo. *La Policía en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio. Teoría-práctica*. Biblioteca Cejaméricas. Recuperado el 22 de marzo del 2018 a horas 17:34 de <http://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5496/La%20Policia%20en%20el%20Nuevo%20Sistema%20Penal%20Acusatorio.%20%281%29%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Municipalidad Provincial de Chiclayo (2016). *Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 2016*. Comité Distrital De Chiclayo.
- Neyra, José (2010). *Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral*. IDEMSA Editorial Moreno S.A. Lima. Pp. 223-228.
- Portal de la Procuraduría General de la República de los Estados Unidos Mexicanos. *Centro de Evaluación y Control de Confianza*. De <http://www.pgr.gob.mx/Transparencia/Paginas/Evaluacion-y-Control-de-Confianza.aspx>.
- Programa para la Convivencia Ciudadana. *Policía Comunitaria: Conceptos, Métodos y Escenarios de Aplicación*. USAID. Recuperado el 23 de enero del 2017 a horas 17:08 de [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7A9ADDCC923BC03C05257F45005F29E6/\\$FILE/POLICIA_COMUNI.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/7A9ADDCC923BC03C05257F45005F29E6/$FILE/POLICIA_COMUNI.pdf)
- Riego R., Cristián. *Nuevas tendencias de las reformas procesales penales en América Latina*. Colombia 2013. Pp. 15 a 17. Recuperado el 10 de enero del 2018 a horas 09:21 de
- Rodríguez Hurtado, Mario. *Los sujetos procesales en el código procesal peruano de 2004*. Recuperado a horas 08:36 del día 19 de octubre del 2017 de <file:///C:/Users/INTEL/Downloads/3140-11802-1-PB.pdf>.
- Rodríguez, Mario. *El proceso común, vía emblemática del Código Procesal Penal de 2004 (CPP) y su primera etapa la investigación preparatoria*. Recuperado el 18 de enero del 2017 a horas <file:///C:/Users/INTEL/Downloads/13817-55018-1-PB.pdf>
- Rosas, Jorge. *El Sistema Acusatorio en el Nuevo Código Procesal Penal*. Recuperado el 18 de enero del 2017 a horas 19:00 de http://portal.mpfm.gob.pe/ncpp/files/dfbaaa_articulo%20dr.%20rosas%20yataco.pdf
- Salinas Siccha, Ramiro. *Conducción de la Investigación y Relación del Fiscal con la Policía en el Nuevo Código Procesal Penal*. Publicado en la Revista JUS-Doctrina N° 3, Grijley. Lima, marzo 2007. P. 02. Recuperado el 17 de octubre del 2017 a horas 15:14, de http://portal.mpfm.gob.pe/ncpp/files/c12171_articulo%20dr.%20salinas.pdf
- Ugolotti Dansay, Humberto. (1963). *La cultura como causa determinante de la independencia de América 5 ensayos históricos. Historia de la policía en el Perú. Del Incario a la república*. Talleres del Departamento de Prensa y Publicaciones de la Guardia Civil. Lima P. 117-118.
- Yagüe, Marcelino. *Psicología Policial*. Papeles del psicólogo, 1994, vol. 60. Recuperado el 07 de marzo del 2018 a horas 13:09 de <http://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=646>, con algunas modificaciones con fines académicos.

ANEXOS

LEY DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I.- Objeto

El presente Decreto Legislativo establece y norma la estructura, organización, competencias, funciones y atribuciones de la Policía Nacional del Perú, así como sus regímenes especiales. Los aspectos específicos se rigen por las leyes y reglamentos respectivos.

Artículo II.- Naturaleza

La Policía Nacional del Perú es un órgano de carácter civil al servicio de la ciudadanía, que depende del Ministerio del Interior; con competencia administrativa y operativa para el ejercicio de la función policial en todo el territorio nacional, en el marco de lo previsto en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú.

Es profesional, técnica, jerarquizada, no deliberante, disciplinada y subordinada al poder constitucional; sus integrantes se deben al cumplimiento de la Ley, el orden y la seguridad en toda la República. Participa en el sistema de defensa nacional, defensa civil, desarrollo económico y social del país.

Artículo III.- Función Policial

Se desarrolla en el marco de su finalidad fundamental descrita y definida en el artículo 166 de la Constitución Política del Perú, ejerciendo sus funciones en su condición de fuerza pública del Estado.

La Policía Nacional del Perú para el cumplimiento de la función policial realiza lo siguiente:

- 1) Garantiza, mantiene y restablece el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana.
- 2) Presta protección, y ayuda a las personas y a la comunidad.
- 3) Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado.
- 4) Previene, investiga los delitos y faltas, combate la delincuencia y el crimen organizado.
- 5) Vigila y controla las fronteras.
- 6) Vela por la protección, seguridad y libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades de la población.
- 7) Presta apoyo a las demás instituciones públicas en el ámbito de su competencia.

La función policial se materializa mediante la ejecución del servicio policial, requiriéndose del personal policial conocimientos especializados que permita la excelencia del servicio a prestar.

Los lineamientos rectores para la ejecución del servicio policial serán determinados mediante reglamento.

El personal de la Policía Nacional del Perú ejerce la función policial a dedicación exclusiva y obligatoria en todo momento, lugar y circunstancia. Está sujeta a las prohibiciones e incompatibilidades señaladas en el presente Decreto Legislativo.

Artículo IV.- Ejercicio de la Función Policial

El ejercicio de la función policial requiere conocimientos especializados, los cuales son adquiridos a través de la formación profesional y técnica. El profesional policial recibe una formación académica integral, permitiendo su desempeño profesional, desarrollo, cultural, social y económico, con énfasis en la disciplina, el mérito, el respeto irrestricto a los derechos fundamentales, la ética, el liderazgo y el servicio público.

Artículo V.- Fuerza Pública

Es la atribución del Estado, ejercida por la Policía Nacional del Perú que faculta el uso de la fuerza de manera legítima en el cumplimiento de su finalidad, para la conservación del orden interno y para garantizar el funcionamiento de los poderes del Estado dentro del orden constitucional. Se ejerce con pleno respeto de los derechos fundamentales y en el marco de las normas sobre la materia.

Artículo VI.- Apoyo a la Policía Nacional del Perú

Las autoridades, entidades públicas y privadas, así como las personas naturales y jurídicas están obligadas a prestar apoyo a la Policía Nacional del Perú, cuando las circunstancias así lo requieran, en el cumplimiento de sus funciones.

Artículo VII.- Principios Institucionales

Para el ejercicio de sus funciones y atribuciones, la Policía Nacional del Perú se orienta por los siguientes principios:

- 1) Primacía de la persona humana y sus derechos fundamentales: La defensa y protección de la persona humana, el respeto a su dignidad y a las garantías para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, considerando los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad; tienen primacía en el ejercicio de la función policial;
- 2) Unidad de la función policial: La función policial se brinda a través de la Policía Nacional del Perú, como fuerza pública unitaria y cohesionada;
- 3) Unidad de Comando: La Policía Nacional del Perú tiene Comando Único;
- 4) Acceso universal a los servicios: Los ciudadanos tienen derecho a acceder de manera gratuita, inmediata, oportuna y eficiente al servicio policial;
- 5) Orientación al Ciudadano: La Policía Nacional del Perú orienta su gestión a partir de las necesidades ciudadanas, buscando agregar valor público a través del uso racional de los recursos con los que cuenta y con un estándar de calidad adecuado;
- 6) Transparencia y rendición de cuentas: La Policía Nacional del Perú es transparente en su actuación y promueve la rendición de cuentas de su gestión a la ciudadanía;
- 7) Legalidad: La función policial se brinda en el marco de la Constitución Política del Perú y las demás normas sobre la materia;
- 8) Eficiencia y eficacia: Toda actuación policial procura ser eficiente, eficaz, y se orienta a una permanente optimización de la calidad del servicio policial;
- 9) La articulación de las intervenciones en el territorio nacional: La Policía Nacional del Perú planifica y ejecuta sus acciones operativas y administrativas de manera coordinada y alineadas con las políticas nacionales, sectoriales y los intereses del Estado, Gobiernos Regionales y Locales.

Artículo VIII.- Valores Institucionales

Los valores que rigen al personal de la Policía Nacional del Perú son:

- 1) Honor: Es el valor que asegura su prestigio y reputación; se cultiva mediante el cabal cumplimiento de la función policial, de los deberes ciudadanos y el respeto al prójimo y a sí mismo;
- 2) Honestidad: Actuar en todos los actos de la vida pública y privada con transparencia y verdad;
- 3) Justicia: Actuar con equidad e imparcialidad, fundada en la no discriminación y la protección de la dignidad de las personas, procurando el bien común y el interés general;
- 4) Integridad: El servicio policial demanda la actuación ética, proba y correcta;
- 5) Cortesía: Conducta respetuosa, amable, oportuna, deferente y predispuesta al servicio del ciudadano;
- 6) Disciplina: Acatar consciente y voluntariamente las órdenes impartidas con arreglo a ley, así como la normatividad institucional;
- 7) Patriotismo: Predisposición al sacrificio personal por la Patria;
- 8) Pertenencia institucional: Identificación con un colectivo humano unido por lazos institucionales y de compañerismo, basados en valores y buenas prácticas que dignifican la función policial;
- 9) Vocación: Poseer de manera permanente la aptitud y disposición para desempeñar la función policial en beneficio de la comunidad, denotando capacidad para establecer relaciones humanas armoniosas y madurez emocional, así como las condiciones físicas necesarias para el cumplimiento de la labor policial; y,
- 10) Servicio: Servir a la institución policial, cuya doctrina, organización y práctica son propias de la Policía Nacional del Perú, destinada a proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, prevenir y controlar toda clase de delitos y faltas, así como a mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden interno, el orden público y la seguridad ciudadana.

Artículo IX.- Símbolos y distintivos institucionales

Son símbolos de la Policía Nacional del Perú el estandarte, emblema e himno institucional.

Son distintivos de autoridad y mando del personal de armas, el uniforme reglamentario, la placa insignia y el carné de identidad.

Los uniformes, distintivos y las divisas de la Policía Nacional del Perú se especifican en el reglamento respectivo y son de uso exclusivo de sus integrantes, bajo responsabilidad penal y civil.

La denominación de Policía es un término distintivo y exclusivo de la Policía Nacional del Perú para efectos del ejercicio de sus funciones y de identificación ante la sociedad y autoridades.

Artículo X.- Lemas y efemérides institucionales

El lema de la Policía Nacional del Perú es: Dios, Patria y Ley.

La Policía Nacional del Perú, con la finalidad de fortalecer la vocación profesional, identidad, doctrina y mística institucional, así como la integración del personal policial celebra su aniversario institucional el 6 de diciembre de cada año como el "Día de la Policía Nacional del Perú".

TÍTULO I COMPETENCIAS, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES

Artículo 1.- Ámbito de Competencia

La Policía Nacional del Perú ejerce competencia funcional y exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden público; y competencia compartida en materia de seguridad ciudadana. En el marco de las mismas presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad; garantiza el cumplimiento de las leyes, la seguridad del patrimonio público y privado; previene, investiga y combate la delincuencia y el crimen organizado; vigila y controla las fronteras.

Artículo 2.- Funciones

Son funciones de la Policía Nacional del Perú las siguientes:

- 1) Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, orden público y la seguridad ciudadana;
- 2) Mantener la paz y la convivencia social pacífica, garantizando la seguridad, tranquilidad y orden público;
- 3) Promover e implementar mecanismos de coordinación y articulación en favor de la seguridad ciudadana;
- 4) Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado;
- 5) Garantizar los derechos de las personas y la protección de sus bienes, privilegiando de manera especial a la población en riesgo, vulnerabilidad y abandono, incorporando los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad en sus intervenciones;
- 6) Brindar seguridad al Presidente de la República en ejercicio o electo, a los Jefes de Estado en visita oficial, a los Presidentes de los Poderes Públicos y de los organismos constitucionalmente autónomos, a los Congresistas de la República, Ministros de Estado, así como a diplomáticos, dignatarios y otras personalidades que determine el reglamento de la presente Ley.
- 7) Prevenir, combatir, investigar y denunciar la comisión de los delitos y faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales;
- 8) Obtener, custodiar, asegurar, trasladar y procesar indicios, evidencias y elementos probatorios relacionados con la prevención e investigación del delito, poniéndolos oportunamente a disposición de la autoridad competente;
- 9) Practicar y emitir peritajes oficiales de criminalística para efecto de procesos judiciales y otros derivados de la función policial;
- 10) Realizar las funciones de investigación policial, por iniciativa propia o bajo la conducción jurídica del Fiscal, en concordancia con el Código Procesal penal y las leyes de la materia;
- 11) Investigar la desaparición y trata de personas;
- 12) Administrar el sistema de inteligencia policial, en armonía con las normas que regulan el Sistema Nacional de Inteligencia;
- 13) Vigilar y controlar las fronteras, así como prestar apoyo a la Superintendencia Nacional de Migraciones para el cumplimiento de las disposiciones legales sobre el control migratorio;
- 14) Fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito por parte de los usuarios de la infraestructura vial; y de manera subsidiaria las normas de transporte en la red vial nacional.
- 15) Garantizar el cumplimiento de los mandatos escritos del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Público y la Oficina Nacional de Procesos Electorales, en el ejercicio de sus funciones;
- 16) Participar subsidiariamente, a solicitud del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en la seguridad de los establecimientos penitenciarios y en seguridad externa del traslado de los procesados y sentenciados de conformidad con la normatividad vigente;
- 17) Participar en la política de eco eficiencia del Estado y en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la protección y conservación de los recursos naturales y del medio ambiente;

18) Velar por la seguridad de los bienes y servicios públicos, en coordinación con las entidades estatales correspondientes;

19) Garantizar la seguridad y protección de los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación y de aquellos que se presuman como tales; así como la de los turistas y sus bienes;

20) Participar en la Defensa Nacional, Defensa Civil y en el desarrollo económico y social del país;

21) Identificar a las personas con fines policiales;

22) Participar en Operaciones de Paz convocadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales; y,

23) Ejercer las demás funciones que le señalen la Constitución, las leyes y sus reglamentos.

Artículo 3.- Atribuciones

Son atribuciones del Personal Policial las siguientes:

1) Intervenir cuando el ejercicio de la función policial así lo requiera, por considerar que sus efectivos se encuentran de servicio en todo momento y circunstancia;

2) Requerir la identificación de cualquier persona, a fin de realizar la comprobación correspondiente, con fines de prevención del delito o para obtener información útil en la averiguación de un hecho punible;

3) Intervenir y registrar a las personas y realizar inspecciones de domicilios, instalaciones, naves, motonaves, aeronaves y otros vehículos y objetos, de acuerdo a la Constitución y la ley. De ser necesario, las personas y vehículos automotores podrán ser conducidos a la unidad policial para su plena identificación;

4) Intervenir, citar, conducir compulsivamente, retener y detener a las personas de conformidad con la Constitución y la ley;

5) Requerir el manifiesto de pasajeros de empresas de transporte, registro de huéspedes de los establecimientos de hospedaje y registro de ingreso de vehículos a talleres de mecánica, de reparación automotriz, factorías, ensambladoras, playas o centros de estacionamiento, custodia y guardiana;

6) Realizar la inspección física o química de los vehículos siniestrados y emitir protocolos periciales para las acciones administrativas o judiciales;

7) Prevenir, investigar y denunciar ante las autoridades que corresponda, los accidentes de tránsito, y las infracciones previstas en la normatividad vigente;

8) Hacer uso de la fuerza, de acuerdo a la normatividad vigente, Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego, en el marco de los acuerdos adoptados por las Naciones Unidas;

9) Poseer, portar y usar armas de fuego, de conformidad con la Constitución y la ley;

10) Realizar constataciones policiales de acuerdo a ley;

11) Tener pase libre en vehículos de transporte de servicio público;

12) Tener ingreso gratuito a los espectáculos públicos para el cumplimiento de sus funciones;

13) Coordinar, cooperar e intercambiar información con los Organismos Internacionales e Instituciones Policiales extranjeras con fines de prevención y represión de la delincuencia y el crimen organizado, de conformidad con los Convenios y/o acuerdos de cooperación interinstitucional suscritos; y,

14) Ejercer las demás atribuciones que señala la Constitución, las leyes y sus reglamentos.

TÍTULO II OBLIGACIONES Y DERECHOS

Artículo 4.- Obligaciones del personal policial

El personal policial tiene las siguientes obligaciones:

1) Respetar y cumplir los mandatos establecidos en la Constitución, las leyes, los reglamentos y las órdenes que en el marco legal vigente imparten sus superiores;

2) Ejercer la función policial en todo momento, lugar, situación y circunstancia, por considerarse siempre de servicio;

3) Cumplir sus funciones con imparcialidad, responsabilidad, diligencia y prontitud, así como ejercerlas con profesionalismo, lealtad y ética;

4) Comportarse con honorabilidad y dignidad;

- 5) Presentar las declaraciones juradas bienes, ingresos y rentas, según corresponda;
- 6) Incorporarse al servicio en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, cuando se decreta los regímenes de excepción.
- 7) Las demás establecidas por la ley y sus reglamentos.

Artículo 5.- Derechos del personal policial

El personal policial tiene los siguientes derechos:

- 1) Respeto y consideraciones que su autoridad le otorga;
- 2) No acatar disposiciones que constituyen una manifiesta violación a la Constitución y las leyes;
- 3) Formación, capacitación, especialización y perfeccionamiento, conforme a la normatividad vigente;
- 4) Ascenso, de acuerdo a la Ley de Carrera y de Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú;
- 5) Afectación de armamento, vestuario y equipo que garanticen el eficiente cumplimiento de sus funciones;
- 6) Remuneraciones, bonificaciones, beneficios y pensiones que le corresponden de acuerdo a Ley;
- 7) Tratamiento y asistencia médica por cuenta del Estado. Este derecho se hace extensivo al cónyuge o conviviente en unión de hecho declarada conforme a Ley, a los hijos menores de edad o mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo, a los padres del titular, según lo establecido en las normas de la materia;
- 8) Desempeñar labores de acuerdo a su aptitud, cuando por cualquier circunstancia o enfermedad sufre disminución de su capacidad física o sensorial;
- 9) Asesoramiento y defensa legal por cuenta del Estado, cuando sea demandado en la vía civil o denunciado penalmente por actos, omisiones o decisiones adoptadas en el ejercicio regular de sus funciones;
- 10) Permisos, licencias y goce de vacaciones anuales, conforme a ley;
- 11) Maternidad o paternidad responsable, conforme a lo señalado en las normas de la materia. El personal femenino está exceptuado de acciones o situaciones que ponen en riesgo su embarazo o lactancia;
- 12) Reconocimiento, sólo para efectos previsionales, como tiempo de servicios, del período de formación como cadete o alumno para el cómputo de los años de servicios a los Oficiales y Suboficiales de armas respectivamente. Este reconocimiento será hasta de cuatro (04) años por la formación profesional para los Oficiales de servicios y el tiempo del curso de adaptación institucional para los Suboficiales de servicios. Se aplica cuando el personal masculino ha cumplido veinte (20) años de tiempo de servicios y diecisiete (17) años y seis (06) meses para el personal femenino;
- 13) Reconocimiento de beneficios económicos por cambio de residencia cuando pase a la situación de retiro;
- 14) Reconocimiento de los beneficios sociales que correspondan por pase a la situación de retiro conforme a ley;
- 15) Respeto a sus derechos fundamentales, que comprenden la igualdad y no discriminación, educación, libre desarrollo de la personalidad y unidad familiar; y,
- 16) Los demás derechos, beneficios y prerrogativas reconocidos por la Constitución, las leyes y reglamentos aplicables a la Policía Nacional del Perú.

Artículo 6.- Prohibiciones e Incompatibilidades

Las prohibiciones e incompatibilidades tienen por finalidad que el ejercicio de la función policial se ajuste a los intereses institucionales, así como garantizar la imparcialidad, objetividad y neutralidad del personal policial en el ejercicio de la función encomendada.

Adicionalmente al marco general que regula la función pública y las normas de la Policía Nacional del Perú, el personal policial está sujeto a las siguientes prohibiciones:

- 1) Usar el uniforme reglamentario, los distintivos y las divisas de la Policía Nacional del Perú, así como el armamento provisto por el Estado para la realización de actividades distintas a la función policial;
- 2) Emitir opiniones o declaraciones en nombre de la Policía Nacional del Perú, salvo autorización expresa del comando policial.

El personal policial está sujeto a las siguientes incompatibilidades:

- 1) Intervenir en asuntos donde sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo;

- 2) Prestar servicios de seguridad privada durante la jornada de trabajo o cuando se afecte y/o interrumpa la continuidad de la función policial;
- 3) Intervenir como abogado, apoderado, asesor, patrocinador, perito o árbitro en los procesos donde el Sector Interior sea agraviado o demandado, salvo en causa propia, de su cónyuge, padres o hijos.

TÍTULO III
ORGANIZACIÓN
CAPÍTULO I
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 7.- Estructura Orgánica

La Policía Nacional del Perú tiene la siguiente estructura orgánica:

1. Alta Dirección
- 1.1. Dirección General
- 1.2. Sub Dirección General
- 1.3. Inspectoría General
2. Secretaría Ejecutiva
3. Órgano de Control Institucional
4. Comité de Asesoramiento
5. Órganos Consultivos
6. Órganos de Administración Interna
- 6.1. Órganos de Asesoramiento
- 6.2. Órganos de Apoyo Administrativo
- 6.3. Órganos de Apoyo Policial
7. Órganos de Línea
- 7.1. Dirección Nacional de Investigación Criminal
- 7.2. Dirección Nacional de Prevención, Orden y Seguridad
8. Órganos Desconcentrados
- 8.1. Macro Regiones
- 8.2. Regiones y Frentes Policiales
- 8.3. Comisarías

Las funciones y organización interna de los órganos y unidades orgánicas que conforman la estructura orgánica de la Policía Nacional del Perú se establecerán en el Reglamento del presente Decreto Legislativo y se sujetarán a los lineamientos establecidos en las normas que regulan la organización y funciones de las Entidades del Estado.

CAPÍTULO II
ESTRUCTURA ORGÁNICA

Artículo 8.- Conformación de la Alta Dirección

La Alta Dirección de la Policía Nacional del Perú está conformada por el Director General; el Sub Director General y el Inspector General.

El Director General de la Policía Nacional del Perú es designado por el Presidente de la República, entre los tres Oficiales Generales de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, en el grado de Teniente General, en estricto orden de antigüedad en el escalafón de oficiales, por un periodo no mayor de dos (02) años en el cargo, y recibe la denominación honorífica de General de Policía. En los casos que la designación del Director General de la Policía Nacional del Perú, recaiga en un Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, en el grado de General, este será ascendido al grado de Teniente General.

Excepcionalmente, el Presidente de la República podrá prorrogar, por un año adicional el nombramiento del Director General de la Policía Nacional del Perú. El Director General depende del Ministro del Interior y tiene los mismos honores, preeminencias y prerrogativas que los Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas.

Cuando la designación del Director General de la Policía Nacional del Perú recae sobre un Oficial General menos antiguo, los más antiguos a él, pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación de manera excepcional e inmediata.

Con la designación del Director General de la Policía Nacional del Perú, se designa al Sub Director General y al Inspector General quienes conforman la Alta Dirección.

Artículo 9.- Dirección General

La Dirección General es el órgano de Comando de más alto nivel de la Policía Nacional del Perú, encargado de planificar, organizar, dirigir y supervisar el desarrollo de la gestión administrativa y operativa de la Policía Nacional del Perú para el ejercicio de la función policial en todo el territorio nacional, en un contexto de mejor atención a la ciudadanía y eficiente uso de los recursos, en el marco de las políticas sectoriales aprobadas por el Ministerio del Interior.

La Dirección General está a cargo de un Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, en el grado de Teniente General. El Director General recibe la denominación de General de Policía, y ostentará los distintivos correspondientes para efectos de su representatividad y jerarquía policial; tiene las siguientes funciones:

- 1) Ejercer el comando y la representación de la Policía Nacional del Perú;
- 2) Administrar la Institución Policial a través de sus órganos competentes y los recursos que se le asigne a la Policía Nacional del Perú

- 3) Evaluar los niveles de eficiencia y eficacia de la Policía Nacional del Perú, disponiendo las acciones de comando pertinentes para mejorar el nivel operativo institucional;
- 4) Dirigir y controlar la efectiva ejecución de las políticas, planes y programas en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana, en el marco de sus competencias, en concordancia con las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento del Gobierno Nacional;
- 5) Aprobar, dirigir y supervisar el desarrollo de las estrategias institucionales en el ámbito de su competencia;
- 6) Participar en la formulación de políticas en materia de orden interno y seguridad pública y las demás que el Sector Interior le asigne;
- 7) Gerenciar el desarrollo institucional, de conformidad con la Constitución Política del Perú y la normatividad legal y administrativa vigente;
- 8) Promover, orientar y supervisar la formación profesional policial que se brinda en las Escuelas y la actualización, especialización y perfeccionamiento continuo del personal policial, para fortalecer el desarrollo institucional al servicio del ciudadano;
- 9) Preservar y controlar la disciplina y la moral del personal, así como la imagen y el prestigio institucional;
- 10) Promover las relaciones interinstitucionales e intersectoriales, nacionales y extranjeras, que coadyuven al desarrollo de la función policial;
- 11) Asesorar a la Alta Dirección del Ministerio del Interior y demás entidades de la Administración Pública, en asuntos relacionados con su competencia;
- 12) Proporcionar información oportuna al Ministro del Interior sobre asuntos de conflictividad social y graves alteraciones al orden interno o seguridad pública;
- 13) Proponer a través del Ministerio del Interior iniciativas legislativas y normas en materia de su competencia;
- 14) Aprobar el Plan Operativo Anual de la Policía Nacional del Perú, en concordancia con los lineamientos del Sector Interior;
- 15) Aprobar, en el marco de su competencia, las resoluciones, manuales, reglamentos, directivas y demás documentos de carácter interno que regulen el funcionamiento operativo de la Policía Nacional del Perú para el ejercicio de la función policial; y,
- 16) Otras establecidas en el Reglamento de la Ley.

El Director General de la Policía Nacional del Perú puede delegar funciones en el Sub Director, Secretario Ejecutivo, los Directores Nacionales y Jefes Macro Regionales.

Artículo 10.- Sub Dirección General

La Sub Dirección General es el órgano encargado de proponer, asesorar, disponer, evaluar y supervisar la implementación, operatividad y ejecución de las estrategias y planes a cargo de la Policía Nacional del Perú para su buen desempeño operativo.

La Sub Dirección General está a cargo de un Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad en el grado de Teniente General. En los casos que la designación del Sub Director General de la Policía Nacional del Perú, recaiga en un Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, en el grado de General, este será ascendido al grado inmediato superior. Sus funciones son:

- 1) Disponer, evaluar y supervisar la implementación, operatividad y ejecución de las estrategias y planes para el buen desempeño operativo de la Policía Nacional del Perú;
- 2) Promover, coordinar y supervisar el funcionamiento articulado de los órganos y unidades orgánicas de la Policía Nacional del Perú, para coadyuvar a una efectiva coherencia e interacción en el quehacer de la función policial a través de una gestión por procesos, en beneficio de los ciudadanos;
- 3) Proponer al Director General resoluciones, manuales, reglamentos, directivas y demás documentos de carácter interno que sean necesarios para el mejor funcionamiento operativo de la Policía Nacional del Perú en el ejercicio de la función policial; en el marco de su competencia;
- 4) Supervisar el rendimiento operativo de la Policía Nacional del Perú y ejecutar las disposiciones de comando para mejorar los niveles de eficiencia y eficacia operativa institucional;
- 5) Priorizar y determinar los recursos institucionales para garantizar el cumplimiento oportuno de la función policial;
- 6) Coordinar y supervisar las actividades y operaciones de inteligencia y contrainteligencia en la Policía Nacional del Perú;
- 7) Orientar, coordinar y supervisar la gestión de los servicios de salud del Régimen de Salud de la Policía Nacional del Perú;
- 8) Orientar, coordinar y supervisar las operaciones aéreas de apoyo a los diferentes órganos y unidades orgánicas de la Policía Nacional del Perú;
- 9) Promover, orientar y supervisar las acciones de cooperación policial recíproca a nivel internacional para la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado;
- 10) Asesorar al Director General de la Policía Nacional del Perú en asuntos de su competencia;
- 11) Informar y emitir opinión sobre asuntos de sus competencias; y,
- 12) Las demás funciones que le sean asignadas.

Asume la Dirección General de la Policía Nacional del Perú de manera temporal, por ausencia o impedimento del titular.

Artículo 11.- Inspectoría General

La Inspectoría General es el órgano de la Policía Nacional del Perú, de carácter sistémico encargado de preservar, controlar y supervisar la disciplina, la imagen institucional, la ética y la calidad del servicio policial.

Efectúa investigaciones administrativas disciplinarias, en el ámbito de su competencia, en concordancia con la normativa legal vigente y los lineamientos establecidos por la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior.

La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú mantiene dependencia funcional con la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior.

La Inspectoría General está a cargo de un Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, en el grado de Teniente General.

En los casos que la designación del Inspector General de la Policía Nacional del Perú, recaiga en un Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad, en el grado de General, este será ascendido al grado inmediato superior. Sus funciones son:

- 1) Determinar los objetivos y estrategias para mantener la disciplina, la imagen institucional, la ética y la calidad del servicio policial, en concordancia con las políticas y lineamientos establecidos por la Dirección General de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio del Interior;
- 2) Evaluar y supervisar las investigaciones administrativas disciplinarias en el marco de la Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú, para la adecuada aplicación de las sanciones o medidas que correspondan;
- 3) Supervisar el cumplimiento de las órdenes y disposiciones dictadas por el Director General para el óptimo ejercicio de la gestión administrativa y operativa de todos los órganos que conforman la Policía Nacional del Perú;
- 4) Ejercer la supervisión y disponer las medidas de control orientadas a evaluar el cumplimiento y calidad de los servicios policiales;
- 5) Realizar inspecciones de control interno a los órganos y unidades orgánicas que conforman la Policía Nacional del Perú para verificar la calidad, eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función policial;
- 6) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas recomendadas;
- 7) Realizar actividades y exámenes de control interno; de carácter previo, simultáneo y posterior, en relación a la correcta y eficiente gestión de los recursos y bienes asignados por el Estado para el ejercicio de la función policial; así como supervisar la ejecución de sus procesos internos;
- 8) Proponer normas que resulten necesarias para el eficaz funcionamiento del Régimen Disciplinario Policial;
- 9) Liderar las acciones en materia de lucha contra la corrupción en la Policía Nacional del Perú, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior;
- 10) Proponer directivas para establecer procedimientos destinados a optimizar las acciones de inspección, supervisión y control de la disciplina, ética, servicio policial e imagen institucional; y,
- 11) Otras establecidas en el Reglamento de la presente norma.

CAPÍTULO III SECRETARÍA EJECUTIVA

Artículo 12.- Secretaría Ejecutiva

La Secretaría Ejecutiva es el órgano encargado de la gestión administrativa y documentaria de la Policía Nacional del Perú; así como, asistir y asesorar al Director General en dichas materias y tiene a su cargo los órganos de asesoramiento, de apoyo administrativo y de los órganos de apoyo policial, estos últimos que no sean de competencia de la Sub Dirección General de la Policía Nacional del Perú.

La Secretaría Ejecutiva está a cargo de un Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad o de un profesional civil altamente calificado; ambos con especialización en gestión pública y experiencia en el manejo de sistemas administrativos.

Los órganos de la Secretaría Ejecutiva están a cargo de personal civil altamente calificado y/o especializado en los sistemas administrativos. Las funciones de cada uno de ellos se detallan en el Reglamento del presente Decreto Legislativo.

CAPÍTULO IV COMITÉ DE ASESORAMIENTO

Artículo 13.- Comité de Asesoramiento

La Alta Dirección de la Policía Nacional del Perú cuenta con un Comité de Asesoramiento especializado para la conducción de las estrategias diseñadas para cumplir con las políticas en materia de orden interno, orden público y seguridad ciudadana establecidas por el Ministerio del Interior. Realiza análisis, estudios o documentos técnicos requeridos por la Alta Dirección de la Policía Nacional del Perú y la Alta Dirección del Ministerio del Interior; así como, absuelve las consultas que se le formulen, proponiendo alternativas de solución.

CAPÍTULO V ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Artículo 14.- Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional es el órgano encargado de efectuar el control gubernamental en la Policía Nacional del Perú, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes del Estado asignados, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como, el logro de sus resultados, mediante la ejecución de los servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados, con sujeción a las normas del Sistema Nacional de Control. Mantiene una dependencia funcional con la Contraloría General de la República y dependencia administrativa con la Policía Nacional del Perú.

CAPÍTULO VI ÓRGANOS CONSULTIVOS

Artículo 15.- Órganos Consultivos

Los Órganos Consultivos tienen por finalidad brindar asesoría en los asuntos que por su naturaleza son puestos a su consideración, emitiendo opinión y recomendación.

Los integrantes de los órganos consultivos son designados y convocados por el Director General de la Policía Nacional del Perú, quien preside los mismos.

Son Órganos Consultivos de la Policía Nacional del Perú, los siguientes:

- 1) Consejo de Alta Dirección;
- 2) Consejo de Calificación;
- 3) Consejos de Investigación; y,
- 4) Comisiones Consultivas.

Su conformación, finalidad y funciones se establecerán en el Reglamento del presente Decreto Legislativo.

CAPÍTULO VII

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA

Artículo 16.- Órganos de Administración Interna

Los órganos de administración interna se clasifican de la manera siguiente:

- 1) Órganos de Asesoramiento.- Son responsables de orientar la labor de la Policía Nacional del Perú mediante el cumplimiento de actividades de asesoría jurídica y planeamiento;
- 2) Órganos de Apoyo Administrativo.- Son aquellos que desarrollan actividades en materia de administración, recursos humanos y apoyo al policía, comunicación e imagen institucional y tecnología de la información, en apoyo al cumplimiento de sus funciones sustantivas que permitan el desempeño eficaz de la Policía Nacional del Perú; y,
- 3) Órganos de Apoyo Policial.- Son aquellos que cumplen actividades de apoyo en materia de asuntos internacionales, cooperación policial internacional, aviación policial, criminalística, inteligencia, formación profesional, doctrina y sanidad, para el ejercicio eficiente y oportuno de la función policial.

CAPÍTULO VIII

ÓRGANOS DE LÍNEA

Artículo 17.- Órganos de Línea

Los órganos de línea realizan funciones técnicas, normativas y operativas necesarias para el cumplimiento de los objetivos encomendados a la Policía Nacional del Perú en aplicación de las normas sustantivas que así lo establecen. Están conformados por la Dirección Nacional de Investigación Criminal y la Dirección Nacional de Prevención, Orden y Seguridad.

Artículo 18.- Dirección Nacional de Investigación Criminal

La Dirección Nacional de Investigación Criminal es el órgano de carácter técnico, normativo y operativo, encargado de formular, ejecutar, comandar y evaluar las operaciones policiales que comprende materias como lucha contra el terrorismo, antidrogas, medio ambiente, investigación criminal, lavado de activos, trata de personas y contra la corrupción. Tiene competencia a nivel nacional. Está a cargo de un Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad.

Depende de la Sub Dirección General de la Policía Nacional del Perú y está conformada por Direcciones. Su organización y funciones se establecerán en el Reglamento del presente Decreto Legislativo y se sujetarán a los lineamientos establecidos en las normas que regulan la organización y funciones de las Entidades del Estado.

Artículo 19.- Dirección Nacional de Prevención, Orden y Seguridad

La Dirección Nacional de Prevención, Orden y Seguridad es el órgano de carácter técnico, normativo y operativo, encargado de planificar, comandar y supervisar las operaciones policiales en materia de seguridad del estado; seguridad integral; seguridad ciudadana; operaciones especiales; tránsito, transporte y seguridad vial; y, turismo, a cargo de las unidades orgánicas que dependen de esta. Tiene competencia a nivel nacional. Está a cargo de un Oficial General de Armas de la Policía Nacional del Perú en situación de actividad.

Depende de la Sub Dirección General de la Policía Nacional del Perú y está conformada por Direcciones. Su organización y funciones se establecerán en el Reglamento del presente Decreto Legislativo y se sujetarán a los lineamientos establecidos en las normas que regulan la organización y funciones de las Entidades del Estado.

CAPÍTULO IX

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Artículo 20.- Órganos Desconcentrados

Los órganos desconcentrados cumplen funciones específicas asignadas dentro de un ámbito territorial determinado. Actúan en representación y por delegación dentro del territorio de su jurisdicción, sobre el cual ejercen mando y comando. Dependen de la Sub Dirección General y se organizan en:

- 1) Macro Regiones Policiales;
- 2) Regiones Policiales o Frentes Policiales; y,
- 3) Comisarías.

El Reglamento de la presente norma establecerá su estructura funcional; así como los criterios para la creación, fusión o supresión.

Artículo 21.- Macro Regiones Policiales

Las Macro Regiones Policiales son aquellas conformadas por una o más Regiones Policiales y/o Frentes Policiales. Están a cargo de Oficiales Generales de Armas en situación de actividad, quienes tienen responsabilidad administrativa y operativa en su jurisdicción policial. Comandan, coordinan y establecen

líneas de acción conjunta, complementaria y subsidiaria para la ejecución de la función policial en el marco de los Planes Generales de Operaciones, de acuerdo al ámbito de su competencia.

Depende de la Sub Dirección General de la Policía Nacional del Perú. Su organización y funciones se establecerán en el Reglamento del presente Decreto Legislativo y se sujetarán a los lineamientos establecidos en las normas que regulan la organización y funciones de las Entidades del Estado.

Artículo 22.- Regiones Policiales

Las Regiones Policiales son unidades orgánicas cuya jurisdicción se encuentra constituida por el ámbito geográfico de un departamento, con excepción de las Regiones Policiales de Lima y Callao. Están a cargo de Oficiales Superiores de Armas en situación de actividad en el grado de Coronel, quienes tienen responsabilidad administrativa y operativa en su jurisdicción policial. Dependen de las Macro Regiones Policiales.

Las Regiones Policiales son responsables de ejecutar y materializar de manera oportuna las estrategias policiales diseñadas en materia de prevención, orden y seguridad e investigación, en el ámbito de su competencia y en atención de la demanda ciudadana. Su estructura funcional se establecerá en el Reglamento del presente Decreto Legislativo y se sujetarán a los lineamientos establecidos en las normas que regulan la organización y funciones de las Entidades del Estado.

Artículo 23.- Frentes Policiales

Los Frentes Policiales se crean de manera excepcional y temporal, en el mismo nivel y organización funcional de una Región Policial. Están a cargo de Oficiales Superiores de Armas en situación de actividad en el grado de Coronel, quienes tienen responsabilidad administrativa y operativa en su jurisdicción policial. Dependen de las Macro Regiones Policiales.

Artículo 24.- Comisarías

La Comisaría es la célula básica de la organización de la Policía Nacional del Perú; depende de las Regiones o Frentes Policiales. Desarrolla la labor de prevención, orden, seguridad e investigación; mantiene una estrecha relación con la comunidad, Gobiernos Locales y Regionales, con quienes promueve la participación de su personal en actividades a favor de la seguridad ciudadana, coadyuvando al desarrollo económico y social de la jurisdicción.

Están a cargo de personal policial de armas en las jerarquías de Oficiales Superiores de Armas, Oficiales Subalternos y Suboficiales Superiores en situación de actividad, según corresponda. Dependen de las Regiones Policiales y de manera excepcional y temporal a los Frentes Policiales, cuando así corresponda al ámbito geográfico asignado.

Las Comisarías son de naturaleza urbana o rural, según su ubicación geográfica.

TÍTULO IV REGÍMENES ESPECIALES

CAPÍTULO I RÉGIMEN DEL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

Artículo 25.- Personal Policial de la Policía Nacional del Perú

El personal de la Policía Nacional del Perú está integrado por Oficiales de Armas, Oficiales de Servicios, Suboficiales de Armas y Suboficiales de Servicios y Alumnos de las Escuelas de Formación Profesional Policial.

El personal de la Policía Nacional del Perú está sometido a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales ratificados por el Estado Peruano, las leyes, el Código Penal Militar Policial y las normas reglamentarias. El personal policial de Armas y Servicios no puede pertenecer, ni estar afiliado o tener vínculo alguno con agrupaciones políticas, organizaciones sindicales ni con instituciones u organismos cuyos principios u objetivos sean incompatibles con lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.

Artículo 26.- Carrera Policial

La carrera policial se basa en un conjunto de principios, normas, procesos y condiciones que permiten al personal de la Policía Nacional del Perú, acceder de manera sucesiva a cada grado, ocupar cargos, obtener los grados académicos y títulos correspondientes, y además de reconocimientos.

El ingreso, carrera y término de la función policial, así como las categorías, jerarquías y grados, se regulan por la Ley de Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú.

Artículo 27.- Situación del personal

Es la condición en la que se encuentra el personal de la Policía Nacional del Perú, dentro o fuera del servicio. Las situaciones del personal son actividad, disponibilidad y retiro, que se regulan por la Ley de Carrera y Situación del Personal de la Policía Nacional del Perú.

Los grados, honores, tratamiento, preeminencias, prerrogativas, remuneraciones y las pensiones inherentes a los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional son equivalentes.

Artículo 28.- Especialidades funcionales del personal de armas

- 1) Prevención, Orden y Seguridad
- 2) Investigación Criminal
- 3) Inteligencia
- 4) Control Administrativo Disciplinario

El personal policial accede a la especialidad funcional de control administrativo disciplinario como segunda especialidad en la jerarquía de Oficial Superior.

Mediante Decreto Supremo, refrendado por el Ministro del Interior, se puede crear, modificar, suprimir o fusionar las especialidades y o direcciones policiales.

CAPÍTULO II RÉGIMEN DEL PERSONAL CIVIL

Artículo 29.- Del Personal Civil

El personal civil que por razones de su profesión, especialidad u oficio, prestan servicios en la Policía Nacional del Perú, no forma parte de la carrera del personal policial de la Policía Nacional del Perú.

Se encuentran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento, en tanto se implementen las disposiciones de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus normas reglamentarias, en lo que corresponda; las normas que regulan el sector público y los lineamientos que en materia del sistema de recursos humanos establezca la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio del Interior.

Artículo 30.- De los Auxiliares de Policía

El personal civil que realiza labores específicas de apoyo a la función policial se denominará "Auxiliares de Policía".

En tanto personal civil, en la función de Auxiliar de Policía no podrá portar un arma de fuego o alguna de las denominadas armas no letales, ni podrá asumir las competencias ni funciones propias de un efectivo policial. Dicho personal podrá asumir funciones administrativas vinculadas a las funciones policiales.

CAPÍTULO III SISTEMA DISCIPLINARIO POLICIAL

Artículo 31.- Sistema Disciplinario Policial

El Sistema Disciplinario Policial establece las normas y procedimientos disciplinarios destinados a regular, prevenir, investigar y sancionar las infracciones en las que incurre el personal de la Policía Nacional del Perú, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar. Se regula por la ley de la materia.

CAPÍTULO IV FORMACION PROFESIONAL POLICIAL

Artículo 32.- Formación Profesional Policial

La Formación Profesional Policial, como parte de la etapa de educación superior del sistema educativo, es el proceso que tiene como finalidad la preparación, actualización, especialización y perfeccionamiento del Cuerpo Policial. La Formación Profesional Policial se ofrece a través de las Escuelas de la Policía Nacional del Perú.

Mediante normatividad específica se define la organización y estructura de la Formación Profesional Policial, con sujeción a la legislación vigente en la materia, en lo que le resulte aplicable.

Artículo 33.- Obtención y Registro de Grados y Títulos

Las Escuelas de Formación Profesional Policial están facultadas a otorgar a Nombre de la Nación, los grados académicos y los títulos profesionales equivalentes a los otorgados por las universidades y las escuelas e institutos de educación superior del sistema educativo, para los Oficiales y Sub Oficiales de la Policía Nacional del Perú; según corresponda.

La obtención de los grados académicos y los títulos correspondientes que se encuentran facultadas a otorgar las Escuelas de Formación Profesional de la Policía Nacional del Perú, se realiza de acuerdo a las exigencias académicas y administrativas que establecen las Escuelas y conforme a los créditos de estudios exigibles por la normativa vigente en el sistema educativo nacional.

Los grados y títulos profesionales obtenidos por los egresados de las Escuelas de Formación Profesional de la Policía Nacional del Perú, se inscriben en los Registros Nacionales correspondientes de acuerdo la normativa vigente del sistema educativo nacional.

CAPÍTULO V RÉGIMEN DE BIENESTAR POLICIAL

Artículo 34.- Bienestar y apoyo al Policía

El régimen de bienestar tiene como finalidad organizar, desarrollar, dirigir y ejecutar programas, proyectos y actividades de bienestar del personal de la Policía Nacional del Perú y su familia, a fin de contribuir a su desarrollo integral.

Comprende entre otros aspectos: sistemas de pensiones, servicios educativos, servicios de vivienda, asistencia legal, asistencia social y servicios de salud.

Los policías afectados en circunstancias de servicio, sus familiares y herederos, tienen derecho preferente a la prestación de los servicios ofrecidos por el régimen de bienestar de la Policía Nacional del Perú, los cuales deben ser promovidos de oficio.

Los reglamentos respectivos norman los procedimientos, modalidades, condiciones, beneficios y otros, a los que tiene derecho el personal de la Policía Nacional del Perú y sus familiares con derecho.

Artículo 35.- De la asistencia social

La Policía Nacional del Perú contribuye a la mejora de la calidad de vida de su personal en situación de actividad, disponibilidad y retiro, así como de sus familiares con derecho, a través de programas de asistencia sociocultural, psicológicos, recreativos y espirituales.

Artículo 36.- Servicios de Salud

La Policía Nacional del Perú cuenta con un Régimen de Salud para el personal policial y familiares beneficiarios, con la finalidad de garantizar una adecuada asistencia y tratamiento médico. Para este efecto el personal accede a un conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, recuperativo y de rehabilitación, en óptimas y adecuadas condiciones de eficiencia, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, a través de la Sanidad Policial o recurriendo cuando sea necesario y proceda de conformidad con la

normatividad vigente sobre la materia, a instituciones prestadoras de servicios de salud públicas, privadas o mixtas.

Artículo 37.- De los servicios educativos

La Policía Nacional del Perú promueve servicios educativos para los hijos de su personal, garantizando la buena marcha administrativa y pedagógica de las instituciones educativas a su cargo; asimismo, mediante convenios con otras entidades educativas en todos los niveles, promueve beneficios para su personal y familiares con derecho.

Artículo 38.- De los programas y servicios de vivienda

La Policía Nacional del Perú, a través del Fondo de Vivienda Policial, administra los fondos provenientes del Estado y de las aportaciones de su personal, con la finalidad de contribuir al acceso a una vivienda digna al personal aportante y sus familiares con derecho.

El personal de la Policía Nacional del Perú cambiado de colocación fuera de su lugar de origen, puede acceder, de acuerdo a la disponibilidad, a una vivienda en forma temporal, a través del programa de viviendas que administra la Dirección de Bienestar.

Artículo 39.- Servicio de Defensa Legal al Policía

La Policía Nacional del Perú brinda el servicio de asesoría y defensa legal gratuita al personal de la Policía Nacional del Perú, que afronta un proceso penal o civil derivado del cumplimiento de la función policial.

Artículo 40.-Servicio de Auxilio Funerario

La Policía Nacional del Perú, a través del Fondo de Auxilio Funerario, administra el fondo proveniente de las aportaciones del personal, con la finalidad de brindar el servicio funerario al personal aportante y sus familiares con derecho.

TÍTULO V RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 41.- Presupuesto

El Presupuesto de la Policía Nacional del Perú es fijado para cada ejercicio fiscal dentro de la estructura presupuestal del pliego del Ministerio del Interior.

TÍTULO VI DEFENSA NACIONAL

Artículo 42.- De la participación en la Defensa Nacional, Movilización y Defensa Civil

La Policía Nacional del Perú participa en la Defensa Nacional, Movilización y Defensa Civil.

TÍTULO VII SISTEMAS TECNOLÓGICOS Y REGISTROS POLICIALES

Artículo 43.- Empleo de sistemas tecnológicos y registros con fines policiales

La Policía Nacional del Perú está facultada a emplear sistemas tecnológicos y registros para el mejor cumplimiento de sus fines institucionales, entre ellos los sistemas de video-vigilancia en vías y espacios públicos, los sistemas de patrullaje virtual para la detección de delitos cometidos por medio de las tecnologías de la información y comunicación, los sistema de información y comunicación policial, entre otros.

La Policía Nacional del Perú implementará el Registro Nacional de Seguridad Pública, que contendrá los registros y bases de datos, en todo tipo de soporte físico o magnético, que contengan información o datos que permitan hacer un seguimiento del accionar delictivo a nivel nacional. Forman parte de este registro: antecedentes policiales, referencias policiales, vehículos robados, personas desaparecidas, el sistema de registro y estadística del delito de trata de personas y afines, bienes culturales sustraídos, pasaportes sustraídos o perdidos, documentos oficiales sustraídos o perdidos, vehículos, naves o aeronaves empleadas para la comisión de ilícitos penales, personas jurídicas utilizadas para la comisión de delitos, identidad balística, identificación dactilar de delincuentes, infractores a la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre y otros registros propios de la función policial.

TÍTULO VIII COMITÉS CÍVICOS DE APOYO

Artículo 44.- Comités Cívicos de Apoyo

Los Comités Cívicos de Apoyo a la Policía Nacional del Perú son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro que se constituyen de conformidad con el Código Civil y se rigen por éste y las normas reglamentarias correspondientes. Pueden participar en tareas de apoyo de seguridad ciudadana.

TÍTULO IX ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Artículo 45.- Articulación Interinstitucional

La Policía Nacional del Perú articula el desarrollo de sus funciones a nivel sectorial y con las entidades de los tres niveles de gobierno, asociando sus recursos, capacidades y cooperando entre sí, para poder responder a las demandas ciudadanas con eficiencia y de manera oportuna, proponiendo al Ministerio del Interior la celebración de convenios y/o acuerdos de cooperación institucional.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Reglamentación

El Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú se aprueba por Decreto Supremo en el plazo máximo de treinta (30) días hábiles, contados a partir de su vigencia.

Su formulación se desarrollará dentro del marco de la normatividad vigente sobre la materia.

SEGUNDA.- Recursos Directamente Recaudados

Los recursos directamente recaudados que se generen por concepto de la prestación de procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad a cargo de la Policía Nacional del Perú, contenidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio del Interior, están destinados prioritariamente al financiamiento de los costos de implementación y sostenibilidad de los mismos; así como para su simplificación administrativa y mejora de la atención a la ciudadanía en el marco del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.

Los procedimientos administrativos y servicios prestados en exclusividad que se brinden a través de la Policía Nacional del Perú son aprobados por el Ministerio del Interior, con opinión previa de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Cualquier modificación a los mismos, debe contar con la opinión previa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior.

A partir de la vigencia de la presente norma, no se podrá financiar el pago de las remuneraciones, bonificaciones, así como cualquier otra entrega económica de similar naturaleza, a favor del personal militar y policial, con cargo a los recursos de la fuente de financiamiento de recursos directamente recaudados.

TERCERA.- Documentos de Gestión Institucional

Son documentos con los que cuenta el Ministerio del Interior en su condición de Entidad para gestionar o administrar el sector de manera ordenada, planificada, eficiente y eficaz, tanto en su aspecto organizacional como en el relacionado con el cumplimiento de los objetivos y metas a su cargo. Por tanto, deben ser aprobados en forma obligatoria por el Titular del Sector.

El Reglamento del presente Decreto Legislativo establece los documentos de gestión institucional que la Policía Nacional del Perú en el ámbito de sus competencias requiere para el cumplimiento de la función policial, los mismos que deben guardar concordancia con los documentos de gestión institucional aprobados por el Ministerio del Interior.

CUARTA.- De la sostenibilidad de la Formación Profesional Policial

Los recursos presupuestales que demanden los procesos de formación, capacitación, especialización, actualización, perfeccionamiento e investigación científica del personal policial; deberán ser previstos y/o programados de manera antelada al inicio de cada ejercicio fiscal a cargo al presupuesto institucional del pliego del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al tesoro público, no debiendo representar costo alguno a los cadetes, alumnos, participantes y/o personal policial que en situación de actividad participe en ellos, según corresponda.

QUINTA.- Del Personal de Servicio

Los procesos de asimilación del personal profesional y técnico en la Policía Nacional del Perú están destinados única y exclusivamente a cubrir las necesidades institucionales en materia del sistema criminalístico policial (profesionales y técnicos para la atención pericial, investigación científica y dinámica del delito en la sociedad), así como profesionales en salud y abogados.

Las categorías para Oficiales y Suboficiales de Servicios son cubiertas por personal profesional y técnico egresado de las universidades e institutos superiores respectivamente. Su admisión, asimilación, administración y funciones son establecidas en el reglamento respectivo.

SEXTA.- Servicios Policiales Extraordinarios

La Policía Nacional del Perú, a través del personal policial que se encuentre de vacaciones, permiso o franco y de manera voluntaria, podrá prestar servicios policiales extraordinarios en entidades del Sector Público y/o del Sector Privado, en situaciones que puedan comprometer y/o afectar el orden público y la seguridad ciudadana.

Las modalidades, requisitos, condiciones, costos y demás aspectos que impliquen la prestación de los servicios policiales extraordinarios deben contar previamente con opinión favorable de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio del Interior, sujeto a la disponibilidad presupuestaria. Para el cumplimiento de lo dispuesto queda exceptuado de lo señalado en el tercer párrafo de la Segunda Disposición Complementaria Final del presente Decreto Legislativo.

Para la prestación de los servicios policiales extraordinarios, la Policía Nacional del Perú propone al Ministerio del Interior la celebración de los respectivos convenios, los mismos que son aprobados por Resolución Ministerial y suscritos por el Director General de la Policía Nacional del Perú.

La celebración y cumplimiento de dichos convenios no deberá afectar la continuidad de la función policial durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año así como el cumplimiento cabal de su finalidad. En ningún caso se podrá contratar en forma directa al personal policial de la Policía Nacional del Perú.

El personal policial en actividad o disponibilidad que preste servicios de seguridad privada se sujetará a la regulación y control sobre la materia.

SÉTIMA.- De las Unidades que ejercen funciones administrativas

El funcionamiento de las Unidades que ejercen funciones administrativas en el Ministerio del Interior, se sujetarán a los lineamientos propuestos por el sector.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Acciones para la implementación del Decreto Legislativo

En tanto se apruebe el Reglamento del presente Decreto Legislativo, el Ministerio del Interior establece transitoriamente las disposiciones que resulten necesarias para el proceso de implementación de la nueva estructura orgánica y conducción de los órganos de la Policía Nacional del Perú establecidos en la presente norma.

SEGUNDA.- Comisión Sectorial

El Ministerio del Interior conformará una Comisión Sectorial presidida por el titular de la Oficina General de Infraestructura, que en coordinación con la Oficina de Administración de la Policía Nacional del Perú,

efectuará la evaluación de la situación legal de la infraestructura de la Policía Nacional del Perú; contando con un plazo de noventa (90) días hábiles para disponer las acciones necesarias para efectuar el saneamiento físico legal de los terrenos ocupados por la Policía Nacional del Perú.

TERCERA.- Administración temporal de los establecimientos penitenciarios

En tanto el Instituto Nacional Penitenciario no cuente con el personal que garantice la adecuada administración, tratamiento y seguridad integral de los establecimientos penitenciarios del país, la Policía Nacional del Perú mantiene la dirección y la seguridad de los establecimientos penitenciarios que se encuentran bajo su cargo, en coordinación con el Instituto Nacional Penitenciario como ente rector del Sistema Penitenciario Nacional.

CUARTA.- Modificación del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú

En un plazo no mayor de treinta (30) días calendario, posteriores a la vigencia del presente Decreto Legislativo, el Ministerio del Interior, mediante Decreto Supremo, modificará el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2015-IN, en lo que resulte pertinente.

En tanto se apruebe la modificación señalada en el párrafo anterior, el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2015-IN, mantendrá su vigencia en tanto no se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modificaciones del Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú

Modifícase los artículos 3 y 5, así como la Segunda Disposición Complementaria Transitoria, del Decreto Legislativo N° 1174, Ley del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú, en los siguientes términos:

“Artículo 3.- Beneficiarios

Son beneficiarios del Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL), los siguientes:

(...)

d. El o la cónyuge o conviviente en unión de hecho declarada conforme a Ley, los hijos menores de edad o mayores incapacitados en forma total y permanente para el trabajo, los padres del personal policial comprendido en el inciso a) del presente artículo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento respectivo.

La inscripción como beneficiarios de los derechos habientes a los que se refiere el párrafo precedente está a cargo del titular respectivo o, de ser el caso, del propio derecho habiente. La desafiliación de los derechos habientes es potestativa, requiriendo para ello la conformidad del titular y del derecho habiente. Para el caso de menores de edad la desafiliación será solicitada por el titular con la conformidad del padre, madre o tutor distinto al titular.

(...)”

“Artículo 5.- Directorio

El Directorio es el máximo órgano de dirección de SALUDPOL. Le corresponde establecer la política institucional y supervisar la aplicación de la misma. Está integrado por los siguientes miembros:

a. Dos directores designados por el Ministro del Interior, uno de ellos lo presidirá;

b. Un director a propuesta del Director General de la Policía Nacional del Perú;

c. Un director designado por el Ministro de Economía y Finanzas;

d. Un director designado por el Ministro de Salud;

(...)”

“SEGUNDA.- Financiamiento de medicinas, equipamiento, bienes, infraestructura y servicios.

(...)

SALUDPOL será responsable de la ejecución de los contratos vigentes y de aquellos en proceso de contratación, a la fecha de publicación de la presente norma, así como de los contratos mencionados en los literales a) y b), solicitados por DIREJESAN, en el marco del Plan, hasta el 31 de diciembre de 2017.

Dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, SALUDPOL podrá financiar recursos humanos en salud requeridos por la DIREJESAN para los establecimientos de salud de la PNP. La contratación será realizada mediante la modalidad prevista en el Decreto Legislativo N° 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, correspondiéndole a la DIREJESAN, supervisar la prestación del servicio, dirigir a la persona contratada, deslindar, establecer las responsabilidades de la persona contratada, asumir la responsabilidad de las acciones adoptadas por la persona y otorgar la conformidad del servicio prestado.”

SEGUNDA.- Modifícase la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1163, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones para el fortalecimiento del Seguro Integral de Salud
Modifícase la Quinta Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1163, Decreto Legislativo que aprueba disposiciones para el fortalecimiento del Seguro Integral de Salud, la cual queda redactada de la siguiente manera:

“QUINTA.- Del Procedimiento Especial de Contratación para el Seguro Integral de Salud (SIS), el Seguro Social de Salud (EsSALUD) y el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL)

Autorízase hasta el Segundo Semestre del año 2016, al Seguro Integral de Salud (SIS), al Seguro Social de Salud – EsSalud, **y al Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL)** para contratar de manera complementaria a la oferta pública, servicios de salud a través de IPRESS privadas y servicios de albergue a través de centros de atención residencial incluida la alimentación, cuando corresponda, para sus asegurados y un acompañante según un procedimiento especial de contratación. Asimismo, dicho procedimiento especial podrá ser utilizado por el Seguro Integral de Salud (SIS) **y al Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL)** para la compra, dispensación o expendio, para un conjunto de medicamentos esenciales (en Denominación Común Internacional), de manera complementaria a la oferta pública, en oficinas farmacéuticas privadas, en los casos en que las IPRESS públicas no se encuentren abastecidas con dichos medicamentos.

El Seguro Social de Salud – EsSalud, el Seguro Integral de Salud (SIS) **y el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú (SALUDPOL)** establecerán los mecanismos de control de las prestaciones requeridos para tales fines.

(...)”

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA.- DEROGACIÓN

Deróguense las siguientes normas:

- a) Decreto Legislativo N° 1148, Ley de la Policía Nacional del Perú.
- b) El artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1213, que regula los servicios de seguridad privada.
- c) La Vigésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD

Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI

Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS

Ministro del Interior

DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA HERRAMIENTAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INTERIOR

TÍTULO I OBJETO DE LA NORMA

Artículo 1.- Objeto

La presente ley tiene por objeto crear herramientas efectivas para la lucha contra la corrupción en el Sector Interior, con la finalidad de lograr una gestión transparente y confiable para la ciudadanía.

TÍTULO II DECLARACIONES JURADAS DEL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

Artículo 2.- Presentación de Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas

Los Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional del Perú están obligados a presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas. El cumplimiento de esta obligación se hace efectiva, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 30521.

Artículo 3.- Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del Personal de la Policía Nacional del Perú

Créase el “Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del Personal de la Policía Nacional del Perú”, instrumento mediante el cual se realiza el registro y procesamiento de las declaraciones juradas que presenta el personal policial a nivel nacional. La Administración del sistema estará a cargo del Ministerio del Interior.

Lea también: CVR: César San Martín le responde enérgicamente a Villa Stein en seminario del Congreso

Artículo 4.- Registro de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas del personal de la Policía Nacional del Perú

La Inspectoría General de la PNP es responsable de garantizar que el personal policial a nivel nacional realice el registro de sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, para lo cual adoptará las medidas administrativas que correspondan, debiendo informar de tal hecho a la Oficina General de Integridad Institucional.

La Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú, y la Dirección General de Gestión en Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior, o los que hagan sus veces, prestarán el apoyo necesario para el adecuado funcionamiento del “Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del Personal de la Policía Nacional del Perú”

Artículo 5.- Plazo de presentación

La declaración jurada de ingresos, bienes y rentas del personal de la Policía Nacional del Perú se presenta en las oportunidades y plazos que se establezcan en el reglamento de la presente Ley.

La omisión de la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas y la reincidencia constituye falta administrativa leve y grave respectivamente. La falsedad de la información contenida en las declaraciones juradas constituye falta administrativa muy grave y se sanciona con pase al retiro.

Artículo 6.- Procesamiento de la Información Contenida en la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas

La Oficina General de Integridad Institucional verificará la información contenida en las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas adoptando las acciones administrativas, civiles o penales que correspondan.

TÍTULO III PRUEBAS DE CONTROL Y CONFIANZA

Artículo 7.- Prueba de Control y Confianza para el personal del Sector Interior

La Prueba de Control y Confianza se efectúa mediante la utilización del polígrafo u otros medios tecnológicos y tiene por finalidad evaluar el comportamiento laboral del personal del Sector Interior, el cual debe ser profesional, ético y moral contribuyendo con el cumplimiento óptimo de las funciones que le son asignadas.

El sometimiento a la Prueba de Control y Confianza es voluntario y deberá contar con la autorización expresa del personal seleccionado para pasar la misma.

Artículo 8.- Aplicación de la Prueba de Control y Confianza

Para la aplicación de la prueba de Control y Confianza se considera lo siguiente:

- a) El Ministro del Interior determinará la política para la aplicación de la Prueba de Control y Confianza a los funcionarios, servidores civiles o policiales del Sector Interior.
- b) El Director General de la Oficina General de Integridad Institucional determinará la política para la aplicación de la Prueba de Control y Confianza a los funcionarios y/o servidores civiles de las oficinas a su cargo y la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú.
- c) El Director General de la PNP determinará la política para la aplicación de la Prueba de Control y Confianza al personal policial a su cargo, determinando cuáles son las unidades policiales, niveles de comando y personal policial que deberá someterse a esta prueba.

Para los efectos de esta disposición, se tendrá en cuenta lo señalado en el último párrafo del artículo 7 de la presente Ley.

Artículo 9.- Características de la Prueba de Control y Confianza

La Prueba de Control y Confianza tiene las siguientes características:

El sometimiento a la prueba es voluntario
No se afecta la intimidad personal
El resultado de la prueba tiene carácter de información confidencial

TÍTULO IV RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO Y PRUEBA DE INTEGRIDAD

Artículo 10.- Rendición de Cuentas al Ciudadano

Las autoridades policiales dentro de su jurisdicción están obligadas a rendir cuenta ante su comunidad, respecto la gestión realizada, considerando la problemática policial de la jurisdicción, los objetivos propuestos y las metas alcanzadas. La medida se hará efectiva mediante audiencias públicas con la participación de autoridades y sociedad civil.

La rendición de cuentas se realiza trimestralmente. Es responsabilidad del Jefe de Región Policial, Frentes Policiales o Direcciones Especializadas supervisar el cumplimiento de las rendiciones de cuentas.

La Dirección General de la Policía Nacional adopta las acciones administrativas necesarias para la ejecución de las audiencias públicas a nivel nacional.

Artículo 11.- Prueba de Integridad en el ejercicio de la función asignada

La Prueba de Integridad es la evaluación realizada al personal policial en situación de actividad y al personal civil del Sector Interior que permite verificar su disposición al cumplimiento de estándares mínimos de ética, integridad y honestidad. Consiste en plantear situaciones similares a las que un efectivo policial o servidor civil podrá enfrentar como parte de las actividades propias de su función.

Artículo 12.- Finalidad de la Prueba de Integridad

La Prueba de Integridad busca determinar si el personal policial en actividad o servidor civil del Sector Interior tiene una conducta íntegra, proba, honrada, incorruptible e insobornable en sus acciones cotidianas, de manera libre y espontánea.

Artículo 13.- Comisionado de integridad

El Comisionado de Integridad es la persona seleccionada e instruida para plantear una situación simulada que permita evaluar la conducta íntegra, proba, honrada, incorruptible e insobornable del personal policial o

civil del Sector Interior en el cumplimiento de sus funciones, dejando que los funcionarios y/o servidores decidan actuar conforme a la normatividad que lo regula o contraria a su normal cumplimiento.

Artículo 14.- Aplicación de la Prueba de Integridad

La Oficina General de Integridad Institucional efectuará la prueba de integridad al personal que forma parte del Sistema Disciplinario Policial, y al personal policial o civil de otras áreas del Sector Interior.

Artículo 15.- Resultado de la Prueba de Integridad

El personal que no responda satisfactoriamente a la prueba de integridad, será reasignado a un nuevo cargo por no responder al perfil de la función específica a desarrollar u otra acción administrativa que se establezca por Ley. Los resultados de la prueba serán registrados en su legajo personal y perfil estadístico de la Dirección de Recursos Humanos o la que haga sus veces, para la evaluación de la asignación a nuevos cargos.

Artículo 16.- Características de la Prueba de Integridad

La Prueba de Integridad tiene las siguientes características

La prueba se realizará por uno o varios de un comisionado de integridad.

Tiene carácter aleatorio y de aplicación a nivel nacional.

La aplicación de la prueba por sí misma no constituye sanción disciplinaria.

Si como resultado de la prueba se presenta una conducta tipificada como infracción disciplinaria o ilícito penal, se procederá de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.

El comisionado de integridad actuará sin provocar situaciones comprometedoras que induzcan a la comisión de actos contrarios a la ley.

Las situaciones que se plantean en la prueba de integridad no serán invasivas a la privacidad. Se guardará reserva del personal que se desempeña como comisionado de integridad.

TITULO V

IMPLEMENTACION DE LA ESPECIALIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

Artículo 17.- Especialidad de Control Administrativo Disciplinario

Adicionalmente a las especialidades señaladas en la Ley de la Policía Nacional del Perú créase como segunda especialidad la “Especialidad de Control Administrativo Disciplinario”, la misma que se implementa dentro de la carrera de la Policía Nacional del Perú.

Lea también: Destituyen a secretario judicial por mantener relaciones extraprocesales con esposa del imputado

Artículo 18.- Objetivo de la Especialidad de Control Administrativo Disciplinario

La Especialidad de Control Administrativo Disciplinario tiene por objetivo que los órganos y unidades orgánicas del Sistema Disciplinario policial cuenten con personal policial altamente calificado y con el perfil idóneo que permita realizar una labor profesional y efectiva para el control del buen uso de los recursos asignados por el Estado, así como la preservación de los bienes jurídicos que sustentan la función policial.

El personal policial previamente seleccionado formará parte de los órganos y unidades orgánicas del Sistema Disciplinario Policial Inspectoría General de la PNP y accede en la jerarquía de oficial superior en el grado de mayor y en caso de suboficiales, a partir de la jerarquía de suboficiales técnicos.

El personal policial que accede a esta especialidad permanecerá en ésta hasta el término de su carrera.

Lea también: Descarga el “Protocolo de actuación interinstitucional para el proceso inmediato en casos de flagrancia y otros supuestos bajo el D. Leg. N° 1194”

Artículo 19.- Incentivos de la Especialidad de Control Administrativo Disciplinario

El personal policial que ejerza la Especialidad de Control Administrativo Disciplinario tiene los siguientes incentivos:

Bonificación por función administrativa y de apoyo operativo efectivo en el marco del Decreto Legislativo 1132

Vacantes exclusivas en los procesos de ascenso para cubrir las necesidades de la especialidad

Capacitación permanente en el país y en extranjero por cada grado

Permanencia en la especialidad hasta el término de la carrera policial

El personal seleccionado no podrá pasar al retiro por causal de renovación de cuadros.
Los beneficios señalados serán otorgados al personal policial que sea seleccionado para integrar el Sistema Disciplinario Policial. La regulación de la selección se realiza a través de la reglamentación correspondiente.

Artículo 20.- Financiamiento

La implementación de lo establecido en el presente Decreto Legislativo, se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Lea también: El delito de violencia y resistencia a la autoridad policial: a propósito del Acuerdo Plenario N° 1-2016

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Reglamentación

Mediante Decreto Supremo del Ministro del Interior en un plazo de noventa (90) días establecerá los procedimientos y normas reglamentarias que resulten necesarias para implementar las presentes disposiciones.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Única.- Exoneración

Exonérase al Ministerio del Interior de la prohibición dispuesta en el artículo 6 de la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017, para la aplicación del Bonificación económica por función administrativa y de apoyo operativo efectivo considerada en el artículo 19 literal a) de la presente norma. Esta disposición entra en vigencia el 2 de enero de 2017.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la República

FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS
Ministro del Interior

**DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1291,
DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA HERRAMIENTAS PARA LA LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INTERIOR**

DECRETO SUPREMO

N° 013-2017-IN

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto Legislativo N° 1291, Decreto Legislativo que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el Sector Interior expedido al amparo de las facultades delegadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo mediante Ley N° 30506, se tiene por objeto crear diversas herramientas para la lucha contra la corrupción en el Sector Interior, con la finalidad de lograr una gestión transparente y confiable para la ciudadanía;

Que, el Sector Interior comprende el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, sus organismos públicos adscritos y el Fondo de Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional del Perú;

Que, el Ministerio del Interior ejerce competencia exclusiva en materia de orden interno y orden público, por lo que el Decreto Legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, le reconoce un conjunto de funciones de especial importancia, dentro de las cuales considera como función rectora, garantizar, mantener y restablecer la seguridad ciudadana;

Que, el problema de la corrupción constituye una de los principales males que afecta al Estado, no siendo ajeno a ello el Sector Interior, por lo que es necesario implementar herramientas eficaces para resolver dicho problema, buscando lograr un Estado más transparente en el ejercicio de las funciones que le han sido encomendadas y que la ciudadanía pueda confiar sin reservas en las múltiples acciones que lleva a cabo la Policía Nacional del Perú en el territorio nacional;

Que, la Única Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1291 otorga al Ministerio del Interior el plazo de noventa (90) días para la reglamentación del citado Decreto Legislativo;

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 8) del artículo 118 de la Constitución Política del Perú, la Ley N°29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Decreto legislativo N° 1266, Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior y el Decreto Legislativo N° 1291;

DECRETA:

Artículo 1.- Aprobación del Reglamento

Apruébase el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1291, Decreto Legislativo que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el Sector Interior, y que consta de tres (3) títulos, cuatro (4) capítulos, treinta y dos (32) artículos, una (1) disposición complementaria final y dos (2) disposiciones complementarias transitorias; el mismo que forma parte integrante del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- Financiamiento

La implementación de lo establecido en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Artículo 3.- Publicación

El presente Decreto Supremo y su Reglamento son publicados en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal Institucional del Ministerio del Interior (www.mininter.gob.pe), el mismo día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Artículo 4.- Refrendo

El presente Decreto Supremo es refrendado por el Ministro del Interior.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil diecisiete.

PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD

Presidente de la República

CARLOS BASOMBRIO IGLESIAS

Ministro del Interior

**REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1291, DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA
HERRAMIENTAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INTERIOR**

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

La presente norma tiene por objeto regular y desarrollar el Decreto Legislativo N° 1291, Decreto Legislativo que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el Sector Interior.

Artículo 2.- Nomenclatura:

Cuando en el presente Decreto Supremo se mencione, sin especificar:

a. Decreto Legislativo: se entiende el Decreto Legislativo N° 1291, Decreto Legislativo que aprueba herramientas para la lucha contra la corrupción en el Sector Interior.

b. Sector: se entiende el Sector Interior

c. Ministerio: se entiende el Ministerio del Interior

d. PNP: se entiende la Policía Nacional del Perú

e. Sistema: se entiende el Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del Personal de la Policía Nacional del Perú

Artículo 3.- Restricciones y Reservas

El personal de los diferentes órganos y unidades orgánicas del Sector Interior, incluyendo a la Policía Nacional del Perú que tenga como función la aplicación de las herramientas para la lucha contra la corrupción establecidas en el Decreto Legislativo N° 1291, está obligado a mantener estricta reserva y confidencialidad de toda la información obtenida como resultado de la aplicación de dichas herramientas. El uso de la información obtenida se limita única y exclusivamente para fines institucionales

Artículo 4.- Registro de los resultados de la aplicación de las Herramientas para la Lucha contra la Corrupción

4.1 Los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de las Herramientas para la Lucha contra la Corrupción, son registrados en los legajos personales del personal civil o policial, según corresponda.

4.2 En el caso de la prueba del polígrafo, se incorporan adicionalmente las autorizaciones de sometimiento a dichas pruebas o su negativa de ser el caso.

4.3 Para efectos de la administración de los resultados señalados precedentemente, se toma en cuenta lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

TÍTULO II

HERRAMIENTAS PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SECTOR INTERIOR

CAPÍTULO I

**DECLARACION JURADA DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS DEL PERSONAL DE LA POLICIA
NACIONAL DEL PERÚ**

Artículo 5.- Objetivo

La presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas tiene como objetivo fomentar la cultura de transparencia en todo el personal de la Policía Nacional del Perú, evidenciando su situación patrimonial y financiera, verificando si existe concordancia entre sus ingresos, bienes y gastos o desbalance patrimonial.

Artículo 6.- Obligatoriedad de la presentación

6.1 La presentación de la Declaración Jurada de Ingresos Bienes y Rentas tiene carácter obligatorio para todo el personal policial en sus diferentes categorías, jerarquías y grados. Su incumplimiento está tipificado como falta administrativa disciplinaria y se sanciona conforme lo establecido en la ley de la materia.

6.2 La utilización de la información contenida en las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas se encuentra restringida al ámbito del Sector Interior y se circunscribe a la consecución de los objetivos especificados en el artículo precedente.

Artículo 7.- Oportunidad de la presentación

7.1 El personal policial debe presentar Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas en forma bianual, hasta el 31 de marzo del año que corresponda.

7.2 Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley N° 30521, Ley que modifica la Ley N° 30161, Ley que regula la presentación Jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, con la finalidad de extender la referida obligación a todos los funcionarios públicos, empleado de confianza y servidores públicos para incrementar los alcances de la fiscalización que realiza la Contraloría General de la República, en el caso del personal policial que en el ejercicio del cargo administra recursos económicos, logísticos o presupuestales de cualquier tipo o que tenga responsabilidad en los procesos de compras o pagos por adquisiciones a cuenta del Estado conforme a la ley sobre la materia, presentarán Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas al inicio y al término de la designación en el cargo.

Artículo 8.- Forma de presentación

La Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas se realiza en forma virtual a través de la plataforma informática “Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del Personal de la Policía Nacional del Perú”, para lo cual la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la PNP o la que haga sus veces y la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio habilitan el acceso al personal policial a través del intranet - Águila 6 PNP.

Artículo 9.- Contenido de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas

La Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas, no obliga a la presentación de documentos que sustenten su contenido. Estos pueden ser requeridos únicamente cuando se evidencien inconsistencias en la información presentada.

Artículo 10.- Funciones de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza

La Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza de la Oficina General de Integridad Institucional, respecto a las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del personal policial tiene las siguientes funciones:

- a) Administrar la plataforma denominada “Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas”, así como de toda la información que se obtenga de ésta y de la verificación de la misma.
- b) Realizar el análisis, verificación y seguimiento de manera aleatoria de la información contenida en las declaraciones juradas correspondientes previamente registradas en el “Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del Personal de la Policía Nacional del Perú”
- c) Poner en conocimiento de la autoridad correspondiente para las acciones de su competencia, aquellos casos, en que del contenido de lo declarado, se evidencien hechos que hagan presumir o constituyan infracción disciplinaria o presunta comisión de un ilícito penal.
- d) Requerir documentación que considere necesaria a los declarantes cuando existan inconsistencias en la información registrada en el Sistema.
- e) Gestionar -a través de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior- la obtención de información de otros organismos o entidades públicas o privadas, para la verificación y contraste del contenido de las declaraciones juradas.
- f) Dictar los lineamientos para garantizar la confidencialidad y reserva de la información a las Declaraciones Juradas de ingresos bienes y rentas registradas en el Sistema.

Artículo 11.- Funciones de la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú

La Inspectoría General de la PNP, respecto de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del personal policial tiene las siguientes funciones:

- a) Garantizar el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del personal policial a nivel nacional, de manera oportuna.
- b) Dictar los lineamientos necesarios para garantizar el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del personal policial a nivel nacional.
- c) Disponer que los órganos competentes adopten las acciones administrativas disciplinarias que correspondan, en caso se acredite el incumplimiento de la presentación de la Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas por parte del personal policial.

d) Informar mensualmente a la Oficina General de Integridad Institucional sobre el cumplimiento de la presentación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas del personal policial.

Artículo 12.- Funcionamiento, mantenimiento y acceso al “Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del Personal de la Policía Nacional del Perú”

12.1 La Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la PNP, o la que haga sus veces, son responsables del funcionamiento y mantenimiento de la plataforma informática “Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del Personal de la Policía Nacional del Perú”, así como de su actualización permanente.

12.2 De acuerdo a los lineamientos emitidos por la Oficina General de Integridad Institucional, la Oficina General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio del Interior asigna los perfiles de acceso y usuarios al sistema.

CAPÍTULO II

PRUEBA DE CONTROL Y CONFIANZA

Artículo 13.- Objetivo de la prueba de control y confianza

13.1 La prueba de control y confianza se aplica al personal civil y policial del Sector Interior y tiene como objetivo fortalecer los niveles de confiabilidad y seguridad, mediante la identificación de personal cuyas conductas, principios y valores sean acordes a los institucionales, así como prevenir riesgos que dañen la operación, seguridad y cumplimiento de los objetivos institucionales.

13.2 La aplicación de la prueba de control y confianza se realiza con la utilización de soportes tecnológicos.

Artículo 14.- Tipos de Prueba de control y confianza

14.1 La prueba de control y confianza se realiza mediante la aplicación de evaluaciones de confiabilidad, entorno social y situación patrimonial, evaluación psicométrica, uso de polígrafo u otros medios tecnológicos.

14.2 Las evaluaciones indicadas precedentemente no constituyen una lista cerrada, pudiendo incorporarse, por disposición de la Oficina General de Integridad Institucional, todas aquellas pruebas de control y confianza que puedan generarse como consecuencia del avance tecnológico.

14.3 La ejecución de la prueba de control y confianza es independiente de las pruebas de descarte toxicológico o de alcoholemia que la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza de la Oficina General de Integridad Institucional o la Inspectoría General de la PNP pueden realizar como parte de sus actividades propias o de cualquier otra dispuesta legalmente.

Artículo 15.- Evaluación de confiabilidad

La evaluación de confiabilidad es aquella que permite verificar el nivel de confianza, disciplina, ética, integridad, tendencia a comportamientos negativos y juicio del personal evaluado, con relación al respeto y cumplimiento de las normas y condiciones que rigen su función.

Artículo 16.- Evaluación de entorno social y situación patrimonial

La prueba de entorno social y situación patrimonial es aquella mediante la cual se verifica la congruencia entre la información patrimonial proporcionada por personal civil o policial y el entorno social, económico y laboral en el que se desarrolla.

Artículo 17.- Evaluación mediante uso de polígrafo o instrumentos similares

17.1 La evaluación mediante la utilización de polígrafo o instrumentos similares, es aquella mediante la cual se verifica la reacción psicofisiológica del evaluado ante la aplicación de un cuestionario a fin de establecer la veracidad de la información proporcionada.

17.2 El personal seleccionado para ser sometido a la prueba, debe expresar de manera indubitable su voluntad de ser sometido a la misma, caso contrario deja constancia de su negativa.

Artículo 18.- Evaluación Psicométrica

La evaluación psicométrica es aquella que busca conocer e identificar las características de personalidad, inteligencia y habilidades generales del personal evaluado.

Artículo 19.- Plan de acción para la aplicación de las pruebas de control y confianza

Las políticas para la aplicación de las pruebas de control y confianza de acuerdo a los lineamientos emitidos por el despacho ministerial, son elaboradas por el Director General de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio y el Director General de la PNP conforme a lo señalado en los literales b) y c) del

artículo 8 del Decreto Legislativo. Para ello elaboran anualmente un plan de acción que especifique cuáles son las pruebas de control y confianza a aplicar, así como las unidades y el personal policial o civil, según sea el caso, seleccionado para la aplicación de dichas pruebas.

Artículo 20.- Aplicación de las pruebas de control y confianza

20.1 La aplicación de las pruebas se realiza a través de personal especializado del Sector o consultores externos.

20.2 Corresponde a la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza elaborar las directivas que establezcan los protocolos, procedimientos, metas, objetivos y plazos para la aplicación de las pruebas, asimismo es la encargada de disponer y supervisar su ejecución, salvo en aquellos casos en que la prueba se encuentre determinada por directivas o normas internas de la PNP, en cuyo caso la prueba es supervisada y ejecutada por la PNP conforme a sus propios procedimientos.

Artículo 21.- Contenido de la prueba

21.1 El contenido de la prueba de control y confianza se elabora en base a la actividad funcional del órgano, unidad o dependencia en la cual el servidor civil o policial labora o presta servicios.

21.2 En ningún caso la prueba puede estar referida a la vida personal o privada del personal o su familia, ni atentar contra su honor, dignidad, derechos humanos o principios constitucionales. Tampoco puede versar sobre la condición actual de salud de la persona evaluada, salvo autorización expresa de esta.

Artículo 22.- Restricciones y reservas

22.1 La Prueba de Control y Confianza no puede ser aplicada dentro de un procedimiento administrativo disciplinario sancionador.

22.2 La Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza, así como el personal policial, pericial o técnico que participe en la prueba, se encuentra obligado a mantener estricta confidencialidad respecto de la información obtenida con las pruebas de control y confianza.

22.3 La información obtenida de las pruebas de control y confianza se codifica bajo responsabilidad de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza.

CAPÍTULO III

RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO POR EL EJERCICIO DE FUNCIÓN POLICIAL

Artículo 23.- Planificación para implementar la rendición de cuentas al ciudadano

23.1 Corresponde a la Dirección General de la Policía Nacional del Perú, la elaboración del plan de acción anual, las directivas, los protocolos y procedimientos para la ejecución de la Rendición de Cuentas al Ciudadano.

23.2 A los efectos del cumplimiento de lo señalado en el artículo 10 del Decreto Legislativo, los jefes de los órganos, unidades y dependencias policiales dentro de la primera quincena del mes de diciembre de cada año calendario, presentan a su comando, las actividades, metas y objetivos a cumplir el año siguiente. Toman como referencia la problemática, mapa del delito, mapa de riesgo e índice delincuencia de la demarcación territorial donde tienen jurisdicción y competencia.

23.3 Asimismo, los jefes de los órganos, unidades y dependencias policiales en la segunda quincena del mes de diciembre, presentan a su comando las metas y objetivos alcanzados durante la gestión del año en curso; documento que obrará como antecedente y referente estadístico para la gestión del siguiente año calendario.

23.4 La Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú, supervisa el cumplimiento de las actividades, metas y objetivos programados dentro del año calendario.

23.5 La Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza monitorea la implementación y cumplimiento del proceso de rendición de cuentas.

Artículo 24.- Obligados a rendir cuentas, oportunidad de rendición y contenido

24.1 La Dirección General de la PNP establece cuáles son las autoridades policiales obligadas a rendir cuentas dentro de su respectiva jurisdicción conforme al artículo 10 del Decreto Legislativo. Corresponde al Jefe de la respectiva Región Policial, Frente Policial o Dirección Especializada, establecer el rol de rendición de cuentas al ciudadano y supervisar su cumplimiento.

24.2 La rendición de cuentas estará referida al incremento o disminución de la criminalidad dentro de la jurisdicción, así como a las dificultades con que pueda haberse encontrado la Policía Nacional del Perú en la ejecución de sus actividades, y a los logros y metas planteados y alcanzados o en desarrollo.

Artículo 25.- Exposición de la rendición de cuentas

En las audiencias públicas de rendición de cuentas, la sociedad civil podrá estar representada cuando menos por las autoridades electas de la jurisdicción y los miembros de las juntas vecinales que estuviesen conformadas.

CAPÍTULO IV

PRUEBA DE INTEGRIDAD

Artículo 26.- Objetivo de la prueba de integridad

26.1 La prueba de integridad se aplica al personal civil o policial del Sector Interior. Se ejecuta mediante la aplicación de situaciones simuladas idénticas a las que el personal enfrenta cotidianamente o puede enfrentar según su función. Tiene por finalidad identificar el grado de probidad, confianza, ética, integridad, honestidad, así como el compromiso del servidor con la función asignada y la lucha contra la corrupción.

26.2 Su ejecución no puede involucrar la vida personal o privada del servidor ni atentar contra su honor, dignidad, derechos humanos o principios constitucionales, ni ejecutarse por razones discriminatorias por motivos raciales, religiosos, sexuales, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier índole, o condición económica.

Artículo 27.- Oficina responsable de la aplicación de la prueba de integridad

27.1 La aplicación de la prueba de integridad está a cargo de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior por intermedio de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza. La Oficina General de Integridad Institucional coordina la ejecución de las pruebas de integridad con las autoridades de los diferentes órganos del Estado que fuere necesario.

27.2 Su aplicación es aleatoria y se realiza a través de uno o más comisionados de integridad.

Artículo 28.- Plan de acción para la aplicación de la prueba de integridad

La Oficina General de Integridad Institucional elabora anualmente un plan de acción que especifique los criterios para la selección, la programación de la ejecución de la prueba de integridad, así como el número de unidades y el personal policial o civil, según sea el caso, para la aplicación de dicha prueba.

Artículo 29.- Consecuencias de la aplicación de la prueba

En caso la prueba de integridad no fuera superada, se generan las siguientes consecuencias:

a) El personal que no responda satisfactoriamente a la prueba de integridad, es reasignado a un nuevo cargo. La formalización de la acción administrativa está a cargo del jefe inmediato superior del efectivo policial o personal civil sometido a la prueba, registrándose tal hecho en su legajo personal.

b) Cuando de la aplicación de la prueba se identifiquen deficiencias en los procesos de atención al ciudadano u otros que no constituyan infracción administrativa o penal, la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza tiene en cuenta dichos resultados para la mejora de protocolos y procedimientos que satisfagan las necesidades ciudadanas, lo cual es puesto en conocimiento del órgano u unidad donde presta servicios el personal que sea sometido a la prueba.

c) En caso de evidenciarse la comisión de infracciones administrativas, los registros de las pruebas constituyen indicios para el inicio de acciones disciplinarias. Si los hechos constituyen ilícito penal, se hacen de conocimiento de la autoridad competente poniendo a su disposición los recaudos obtenidos.

Artículo 30.- Contenido de la prueba

Las acciones simuladas no podrán constituir actos manifiestamente provocadores que signifiquen hechos inductivos o instigadores para la comisión de una conducta funcional irregular. La Oficina General de Integridad Institucional dictará las pautas que deben seguirse para la ejecución de las pruebas de integridad.

Artículo 31.- Comisionados de integridad

31.1 Los comisionados de integridad son seleccionados por la Oficina General de Integridad Institucional por intermedio de la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza. Pueden ser seleccionadas como comisionados de integridad, personas pertenecientes al Sector o ajenas a él, que acepten colaborar como tales.

31.2 La identidad de los comisionados de Integridad, se mantiene en reserva hasta el término de la ejecución de la prueba. Su acreditación como comisionado de integridad es otorgada por la Oficina de Control, Cumplimiento y Confianza, debiendo registrar su identidad para asegurar su amparo en caso sea necesario.

TÍTULO III

ESPECIALIDAD DE CONTROL ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

Artículo 32.- Implementación de la Especialidad de Control Administrativo Disciplinario

32.1 El Decreto Legislativo N° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, establece lo concerniente a la especialidad de control administrativo disciplinario.

32.2 El proceso de selección del personal policial que ingresa a la Especialidad de Control Administrativo Disciplinario está a cargo de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

Única.- Delegación de la aplicación de las pruebas

La Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior, cuando considere conveniente, puede delegar en la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú la ejecución de pruebas a su cargo. En este caso la Inspectoría General de la PNP informa documentadamente el resultado de las pruebas a la autoridad delegante dentro de los quince días calendario posteriores a su ejecución.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIA

Primera.- Aplicación del Sistema en el año 2017

Para el presente año 2017 la implementación de Sistema de Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas del Personal de la Policía Nacional del Perú, se efectúa dentro del segundo semestre.

Segunda.- En tanto se implemente la selección del personal policial en la Especialidad de Control Administrativo Disciplinario como segunda especialidad dentro de la carrera de la Policía Nacional del Perú, se mantienen los cuadros asignados conforme a los cambios generales de colocación para el año 2017.

1. De acuerdo a su criterio, ¿cómo debería ser nuestra policía nacional?
2. Cree usted, que el nuevo Código Procesal Penal está cumpliendo su función en nuestro medio.
3. Considera usted que el mejoramiento holístico¹⁷⁶ de nuestra policía nacional, será uno de los factores que logrará controlar el incremento de la tasa de criminalidad en nuestra realidad.
4. ¿Qué opinión le merecen la formación de nuestros miembros policiales y el desempeño funcional de éstos?
5. Considera usted que los métodos preventivos del delito¹⁷⁷ y terapéuticos aplicados al infractor penal¹⁷⁸, resultarían más efectivos para lograr la reducción efectiva de la tasa de criminalidad¹⁷⁹, si tuviéramos una policía mejor preparada.

APRECIADO ENTREVISTADO AGRADECERÉ SOBRE MANERA QUE:

- TOME EN CUENTA LAS NOTAS A PIE DE PÁGINA PARA UNIFICAR CRITERIOS CON RESPECTO A LOS TÉRMINOS UTILIZADOS.
- SUS RESPUESTAS SEAN LO MÁS OBJETIVAS POSIBLE.
- DE SER POSIBLE REMITA SUS RESPUESTAS AL MAIL: mariochavez1@hotmail.com o mariochavez1956@hotmail.com

¹⁷⁶ El principio general del holismo fue resumido de forma concisa por Aristóteles en sus escritos sobre metafísica, (después o más allá de la física): «el todo es mayor que la suma de sus partes». Este concepto se puede definir como el tratamiento de un tema o de un problema de tal forma que se consideren todos sus componentes, incluyendo sus relaciones invisibles pero igualmente evidentes o existentes. Esta aproximación se usa como una tercera vía o un nuevo enfoque a un determinado problema o cuestión.

¹⁷⁷ Los métodos preventivos consistirían en:

- Incremento de la vida y desarrollo económico y social de las comunidades.
- Superación de las limitaciones de la justicia penal tradicional (policía, tribunales, cárceles) para responder a la delincuencia.
- Apoyo a las medidas preventivas de reducción de la cantidad de víctimas y de delincuentes, atacando las causas subyacentes de la delincuencia y la inseguridad:
 - diseño urbano más seguro (espacios públicos y sistemas de transporte público)
 - apoyo a los niños, los jóvenes, y las familias vulnerables
 - fomento de la responsabilidad y la creación de conciencia de la comunidad
 - captación y creación de empleos para los jóvenes de las zonas pobres
 - prestación adecuada de servicios de proximidad, especialmente de policía y justicia
 - reinserción social de los delincuentes jóvenes
 - asistencia a las víctimas de delitos.

¹⁷⁸ Se fundamentan en las explicaciones y otros conocimientos sobre la delincuencia a que se ha aludido con anterioridad, tales como la teoría del aprendizaje social y los análisis de carreras criminales. En esencia los tratamientos consisten en intervenciones psicoeducativas que se dirigen a jóvenes en riesgo de delincuencia o a delincuentes convictos, con el objetivo de reducir los factores de riesgo dinámicos que se asocian a su actividad delictiva.

¹⁷⁹ Mecanismo que nos aproxima a la criminalidad existente, con ella calculamos el número de delitos existentes, pero no es algo exacto, porque hay delitos de los que no se tiene conocimiento, y por ello no se pueden medir.